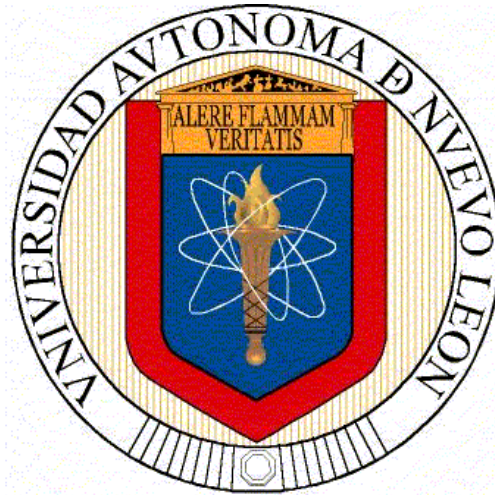


**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
FACULTAD DERECHO Y CRIMINOLOGÍA**



**“Nueva Propuesta de los Componentes del Derecho al
Desarrollo Basado en un Análisis Crítico”**

PRESENTA

DAVID EMMANUEL CASTILLO MARTÍNEZ

**PARA OBTENER EL GRADO DE DOCTOR EN DERECHO CON
ORIENTACIÓN EN DERECHO CONSTITUCIONAL Y GOBERNABILIDAD**

AGOSTO, 2017



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
FACULTAD DE DERECHO Y CRIMINOLOGÍA
DIVISIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO



TESIS

**NUEVA PROPUESTA DE LOS COMPONENTES DEL DERECHO AL
DESARROLLO BASADO EN UN ANÁLISIS CRÍTICO**

PRESENTA

DAVID EMMANUEL CASTILLO MARTÍNEZ

**COMO REQUISITO PARA OBTENER EL GRADO DE DOCTOR
EN DERECHO CON ORIENTACIÓN EN DERECHO CONSTITUCIONAL
Y GOBERNABILIDAD**

DIRECTOR DE TESIS

DRA. AMALIA GUILLÉN GAYTÁN

CO-DIRECTOR

DR. MOHAMMAD H. BADI ZABEH

SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN, MÉXICO

AGOSTO, 2017

AGRADECIMIENTOS

Le agradezco a Dios por darme la fortuna de ponerme en el camino de la verdad por guiarme en los momentos de debilidad y darme fortaleza y valor para culminar esta etapa de mi vida.

A mis padres Carlos y Rocío por apoyarme en todo momento, por nunca darse por vencidos en el esfuerzo de darles la mejor educación a sus hijos, por los valores que me han inculcado, pero sobre todo por ser un excelente ejemplo a seguir.

A mis hermanos por ser los pilares en mi vida y representar la unidad familiar. Carlos y Adrian ejemplo a seguir en el desarrollo profesional, laboral y familiar, Karla y Rocío por llenarme de alegría y amor en esos momentos que más lo he necesitado.

A mi amada esposa Marcela por su amor apoyo y animo que me brinda día con día para alcanzar nuevas metas, por valorar el esfuerzo en este trayecto y por estar siempre en los momentos más difíciles.

A mi hijos, principal motivación de vida.

A mi maestro Mohammad por todo el apoyo brindado a lo largo del doctorado, por su tiempo, amistad y conocimientos que me brindó.

Y en especial a mi Directora de Tesis, Amalia por haberme brindado sus confianza, dedicación, amistad y por motivarme día a día a seguir adelante en los momentos de frustración, por su invaluable apoyo y consejos que permitieron culminar el desarrollo de este trabajo.

INDICE

INTRODUCCIÓN.....	5
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.....	8
HIPÓTESIS	8
OBJETIVOS	8
COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS	9
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN	10

CAPITULO I

LA DIGNIDAD HUMANA Y SEGURIDAD CIUDADANA COMO EJES

CENTRALES DEL DERECHO AL DESARROLLO

1.1. APROXIMACIONES GENERALES.....	15
1.2. EL ESTADO FRENTE A LA DIGNIDAD HUMANA	20
1.2.1. EL ESTADO COMO GARANTE DEL DERECHO AL DESARROLLO	22
1.3. LA DIGNIDAD HUMANA FRENTE A LA LIBERTAD COMO MANIFESTACIÓN DEL DERECHO AL DESARROLLO	26
1.3.1. INTELIGENCIA Y VOLUNTAD; ANÁLISIS DESDE UNA ÓPTICA FILOSÓFICA PARA EL DESARROLLO HUMANO	30
1.4. LA JUSTICIA COMO DERECHO INDIVIDUAL DE LIBERTAD E IGUALDAD.....	33
1.4.1. LA JUSTICIA COMO FORMA DE DESARROLLO	36
1.4.2. LA JUSTICIA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA FRENTE AL DERECHO AL DESARROLLO	42
1.4.3. PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE SEGURIDAD CIUDADANA	44

CAPITULO II

ALCANCES E IMPLICANCIAS DEL DERECHO AL DESARROLLO EN LA ACTUALIDAD

2.1. ALCANCES GENERALES	52
2.2. ORIGEN Y EVOLUCIÓN DEL DERECHO AL DESARROLLO.....	55
2.3. EL DERECHO AL DESARROLLO COMO PARTE DE LOS DERECHOS HUMANOS DE TERCERA GENERACIÓN	61
2.4. DIFICULTADES POLÍTICAS Y JURÍDICAS DEL DERECHO AL DESARROLLO	66
2.5. LA CONSTITUCIÓN FRENTE A LA PROTECCIÓN DEL DERECHO AL DESARROLLO	71

CAPITULO III

SALUD, POBREZA Y EDUCACIÓN; FACTORES DE PRIMORDIAL IMPORTANCIA EN EL DESARROLLO HUMANO

3.1. DIGNIDAD HUMANA; PIEDRA ANGULAR DEL DERECHO AL DESARROLLO	84
3.2. LA SALUD COMO DERECHO EN LA CONSTITUCIÓN MEXICANA	85
3.3. IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN EN EL SISTEMA DE SALUD MEXICANO ORIENTADO HACIA EL DERECHO AL DESARROLLO	88
3.4. ACCESIBILIDAD EN EL DERECHO A LA SALUD	92
3.5. DERECHO A LA SALUD EN MÉXICO.....	95
3.6. LA ECONOMÍA COMO PIEDRA ANGULAR Y GARANTE DEL DERECHO AL DESARROLLO	97
3.6.1. LA IMPLICANCIA DE LA ESCASES DE RECURSOS ECONÓMICOS EN EL DERECHO AL DESARROLLO	100
3.7. AMPLIACIÓN Y CONCEPTUALIZACIÓN DE LA POBREZA CON ORIENTACIÓN DEL DERECHO AL DESARROLLO	104

3.7.1. LA POBREZA EN MÉXICO.....	106
3.8. LA EDUCACIÓN COMO VÍA FUNDAMENTAL PARA MITIGAR LA POBREZA Y GARANTE DEL DERECHO AL DESARROLLO	109
3.9. TEORÍA DE LA ELECCIÓN RACIONAL	110
3.10 LA TEORÍA MARXISTA.....	111
3.11 LA EDUCACIÓN EN MÉXICO	113

CAPÍTULO IV

EL ACCESO A LA JUSTICIA COMO DERECHO CONSTITUCIONAL Y BASE PARA EL DESARROLLO HUMANO

4.1. ACCESO A LA JUSTICIA COMO FORMA DE DESARROLLO.....	115
4.2. LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA.....	119
4.3. DERECHO DE TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA Y SU IMPLICANCIA EN EL DESARROLLO HUMANO.....	120
4.4. IMPACTO DE LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA EN EL PROCESO JUDICIAL COMO MECANISMOS DE DEFENSA DE LOS DERECHOS DE TODA PERSONA.....	127
4.5. TUTELA JURISDICCIONAL Y DERECHO AL DESARROLLO	132

CAPÍTULO V

EL MEDIO AMBIENTE COMO FORMA DE DESARROLLO HUMANO

5.1. BASES TEÓRICAS PARA ANALIZAR EL MEDIO AMBIENTE	134
5.1.1. TEORÍA DE LA LÓGICA DE LA ACCIÓN COLECTIVA PLANTEADO POR OLSON	134
5.1.2. TEORIA DE LA ACCIÓN COMUNICATIVA.....	135
5.2. TEORÍAS CONEXAS A LA TEORÍA DE LA ACCIÓN COMUNICATIVA	151

5.2.1. TEORÍA DE LA ACCIÓN SOCIAL DE WEBER	151
5.2.2. TEORÍA DE LA ACCIÓN SOCIAL DE PARSONS.....	153
5.2.3. TEORÍA DE LA SOCIEDAD DE DURKHEIM	154
5.2.4. TEORÍA DE LA FACTIBILIDAD Y VALIDEZ.....	156
5.2.5. TEORÍA DE LOS SISTEMAS	157
5.2.6. TEORÍA DE LOS ACTOS DEL HABLA	158
5.3. LA INEFICACIA DE LAS POLÍTICAS MEDIOAMBIENTALES POR FALTA DE COMUNICACIÓN	159
5.4. DERECHO A VIVIR EN UN AMBIENTE SANO Y EQUILIBRADO	163
5.5. EL DERECHO HUMANO A UN MEDIO AMBIENTE SANO Y EQUILIBRADO	165
5.6. EL DERECHO AL MEDIO AMBIENTE COMO UN DERECHO HUMANO DE TERCERA GENERACIÓN	168
5.7. ALGUNAS REFERENCIAS EN EL CONSTITUCIONALISMO COMPARADO SOBRE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE: SU RELACIÓN CON LOS DERECHOS HUMANOS	169
5.8. CONCEPCIÓN NORMATIVA.....	170
5.9. AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	177
CONCLUSIONES	179
REFERENCIAS	188

NUEVA PROPUESTA DE LOS COMPONENTES DEL DERECHO AL DESARROLLO BASADO EN UN ANÁLISIS CRÍTICO

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo se inicia con la firme convicción de intentar retomar la discusión sobre la operacionalización del derecho al desarrollo observándolo como una base para potencializar el desarrollo de cada persona. Al comenzar la búsqueda de la naturaleza, su raíz y evolución de nuestro tema central el “Derecho al Desarrollo” observamos múltiples interpretaciones y corrientes teóricas lo cuales en un contexto del Estado Mexicano son inoperables, así como en cualquier otro país en vías de desarrollo. La amplia carga que se atribuye al Estado para conseguir potencializar al individuo nos hace considerar impensable el inicio de un desarrollo con una obligación tan amplia contrastando con la falta de infraestructura para el desarrollo integral del individuo, al mismo tiempo tenemos plena conciencia que sin la intervención del Estado es impensable incentivar el progreso, que genere un avance equilibrado en nuestra sociedad.

En los últimos años se ha desarrollado una discusión amplia del concepto de “Derecho al Desarrollo” dentro del marco teórico y técnico de dicho paradigma sin abundar sobre los límites y el alcance en su operacionalidad. Nos hemos percatado que nuestro objeto de estudio al igual que muchos otros fenómenos con un carácter transdisciplinario parece no tener explicación por cada una de las posturas e ideologías que se entrelazan en su evolución, situación que no contribuye a la ciencia. Es por eso que en nuestra investigación intentamos observar nuestro objeto de estudio como un ente en transformación que requiere evolución no solo en su operacionalización sino en su concepción.

Diferentes componentes del Artículo 8 de la declaración sobre el Derecho al Desarrollo en realidad forman los cinco elementos esenciales que se les aluden en

nuestro trabajo siendo éstos: la justicia, la seguridad ciudadana, la salud, la educación y la disminución de la pobreza, como un mínimo básico para que el Estado cumpla con su intervención ante este derecho fundamental que redimensiona salvaguardar la dignidad humana. Los reclamos para tener acceso a un reparto adecuado de la prosperidad y de la cultura en la sociedad plantea límites estrechos a la pretensión de transferir los costos y riesgos sistemáticos a los individuos (Habermas, 20010) en respuesta a la carga excesiva del Estado, situación que justifica una adecuación y evolución del concepto en cuestión con una visión socio-jurídico-económica que reactive su instrumentación.

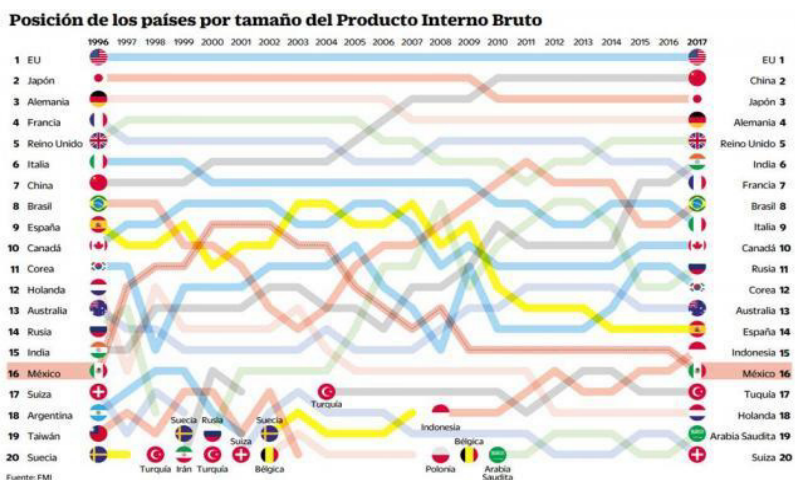
La protección y el impulso del individuo es una tarea inacabada para cualquier Estado, y en un contexto de países en vías de desarrollo nos topamos con una tarea titánica, la cual de forma dinámica acrecienta la carga del Estado tanto para su instrumentación como para su protección, motivo por el cual se fue construyendo el Derecho al Desarrollo que conocemos en la actualidad.

Es interesante observar cómo el Desarrollo fue el motor de la intromisión y evolución de los derechos humanos con los acuerdos de Bretton Woods (1944) y el establecimiento del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, 1947), que iniciaron una serie de estrategias para implementar un desarrollo internacional con una marcada visión totalmente económica con la cual florece un sistema económico internacional en torno al eje del desarrollo con instrumentos y mecanismo encaminados a la cooperación económica internacional. En esta primera visión observamos el acercamiento del Derecho al desarrollo con un conjunto de herramientas jurídicas (declaraciones, resoluciones y tratados e instituciones) que dieron vida al desarrollo como medio para mejorar las condiciones de vida de los seres humanos y para el cambio social. Dicha visión tuvo su ruptura en 1971 frente a la administración de Nixon.

La materialización legal de la construcción del derecho al desarrollo surge de observar que intentar un desarrollo solamente económico no lograba ni ser

viable ni aumentar la calidad de vida de la sociedad. Con esta categorización de priorizar o conglomerar los derechos humanos no se pretende disminuir o dar un diferente valor a los derechos humanos que aceptamos y defendemos la postura en la cual se pugna por su igualdad de categoría y su valor inalienable, el objetivo de dicho conglomerado es en razón a la escasez de recursos para la efectividad del desarrollo tal y como ya fue señalado por el Dr. Angulo Sánchez a quien citamos en el cuerpo de la presente investigación.

Es en realidad ese enfoque ligado al ámbito económico lo que ha frenado su desarrollo integral que debe incluir aspectos políticos, sociales que incidan en la cultura de la comunidad.



En la actualidad existe un sinnúmero de indicadores que se han adaptado para intentar medir el desarrollo de los países con la finalidad de tener elementos para la toma de decisiones entre los que destacan:

- Índices de felicidad
- PIB
- Índice de Desarrollo Socioeconómico (IDSE)
- índice de desarrollo humano (IDH)

- Indicadores de Desigualdad
- Indicadores de Género
- Índice de Libertad

Al comparar de forma transversal y dinámica este tipo de evidencias científicas comenzamos nuestro proceso de investigación al cuestionarnos ¿Cuáles son las variables o el grupo de derechos humanos que potencializan el Derecho al Desarrollo en México?

Formulación del Problema

El derecho al desarrollo se ve disminuido por la falta de oportunidades en materia de acceso a la justicia, seguridad ciudadana, salud, pobreza y educación; los cuales impactan directamente en la potencialización de la dignidad humana en un medio ambiente sustentable.

Hipótesis

El acceso al derecho al desarrollo se potencializaría condicionado a vincular de forma institucional mecanismos legales conducentes a la dignidad humana a través de la salud, educación, reducción de la pobreza para lograr justicia y seguridad ciudadana que ofrezcan una base digna generadora de un cambio social, todo dentro de un marco de sustentabilidad que salvaguarda la continuidad equilibrada y sana del fenómeno del interés.

Objetivos

Objetivo General:

Explorar, describir y explicar la perspectiva y su alcance entorno al resguardo del Derecho al Desarrollo por parte del Estado Mexicano en las políticas públicas implementadas clarificando su visión en contraste al marco global.

Objetivos Específicos:

- 1.- Comprender el enfoque conceptual del derecho al desarrollo, tras lograr un entendimiento preliminar del marco normativo en materia de derechos humanos;
- 2.- Analizar la realidad social en torno al Derecho al Desarrollo
- 3.- Comprobar la interacción social y el marco legal del Estado Mexicano
- 4.- Inquirir las problemáticas que se observan en torno a la operacionalización y tutela del Derecho al Desarrollo
- 5.- Determinar un esquema que propicie el Derecho al Desarrollo

Comprobación de Hipótesis

La comprobación de la hipótesis se logrará en primer lugar, a través del sustento teórico de los conceptos claves para la investigación. Hay que destacar que una teoría general es un paradigma comprobado y que perdura a lo largo de tiempo. Además, una teoría debe contar con los siguientes elementos fundamentales: 1.- que sea elegante, lo cual se deriva de la simplicidad y parsimonia en la explicación de los hechos, 2.- que explique los hechos observados actuales, 3.- que pueda explicar los hechos que ocurren en el futuro y 4.- que sea sujeta al rechazo en luz de evidencias que refutan su validez.

Se ha de buscar, también, la teoría neoinstitucional que pueda crear un respaldo razonable para defender la máxima de una mínima intervención del Estado con excepción de provocar un desarrollo. El sustento en los grandes teóricos del derecho es clave, también, para que los conceptos definidos puedan ser aplicados de forma coherente en la narrativa de los elementos encontrados.

La metodología científica (con sus dos pilares fundamentales de (a) repetitividad y (b) probabilidad de rechazo de la hipótesis) de este trabajo, será el medio a través del cual se adecuará todo lo recolectado en la realidad y medido para ser analizado y poder tener criterios de impacto que puedan entregar una conclusión definitiva respecto a los programas de derecho al desarrollo. El diseño

correspondiente es exploratorio, que de acuerdo a Babbie (2007) se utiliza cuando los problemas se encuentran en una etapa preliminar.

La investigación exploratoria se utiliza cuando el tema o asunto es nuevo y cuando los datos son difíciles de recopilar. Esta se caracteriza porque es flexible y puede responder a preguntas de investigación de todo tipo (qué, por qué, cómo). (Babbie, 2007)

Diseño de la Investigación

- Esta investigación se basa en un diseño de investigación “cualitativa”. El aspecto cualitativo cobra especial relevancia ya que uno de sus propósitos esenciales es “reconstruir la realidad, tal y como la observan los actores de un sistema social previamente definido” (Sampieri, Fernández, & Baptista, 2003) Y eso precisamente es lo que se pretende hacer aquí. Los cambios cualitativos en nuestro entorno son cambios que definitivamente son trascendentes para nuestra sociedad.
- Este trabajo tiene un esquema “Explorativo” y por tanto trata de destacar los aspectos fundamentales del problemática bajo el estudio.
- Por otro lado, la investigación es de corte “descriptivo” ya que señala las características esenciales del problema. (En una investigación este concepto rebasa la profundidad de un tema a estudiar)
- Es una investigación de “acción” donde se intenta de realizar una indagación organizada y reflexionar sobre el significado verdadero del tema.
- “Explicativo” en donde se indaga el “cómo” y el “porqué” del fenómeno del estudio.
- Se usa también el diseño “interpretativo” en donde se provee significado aplicado al tema del estudio.
- Es una investigación “documental” donde se hará la inclusión de documentos primarios, como lo son las narrativas directas del sujeto con la

finalidad de resolver nuestra problemática y comprobar o rechazar nuestra hipótesis planteada.

Esta investigación se sustenta en los siguientes recursos teóricos los cuales nos permiten analizar la problemática que aquí se estudia que nos permitirán analizar, observar y llevar a cabo propuestas que resuelvan la problemática a desarrollar en este estudio.

- **Derecho Extranjero y Comparado:** El derecho Extranjero nos servirá como punto de comparación, referencia y apoyo, dando el argumento, en aquellos casos donde los diversos países integrantes de las Naciones Unidas conceptualizan nuestro constructo columna vertebral de nuestra investigación en el cual existen avances y propuestas que son merecedoras de ser tomadas en consideración; y no solo eso, en cuanto a la comparación con el derecho al desarrollo interno de los países referentes en el tema que sirven de antecedente en los diversos países miembros y en nuestro país.
- **Epistemología Jurídica Aplicada y Dogmática Legal:** La epistemología jurídica aplicada nos permitirá conocer los antecedentes filosóficos de nuestra problemática que envuelven la materia en estudio, en términos de búsqueda de la verdad contrastando nuestra realidad en la actividad diaria del individuo como parte de la colectividad, una individualidad que al sumarse crea el espacio público compartido en donde debe tutelarse los derechos humanos y en especial el derecho al desarrollo como potencializador de la dignidad humana cuya comprensión es relevante en la tesis. La epistemología jurídica aplicada nos proporciona las condiciones para dilucidar si una creencia es una axioma en un escenario de realidad o es una mera explicación por parte de los operadores políticos o ideologías sociales o un acto de la ciencia verificable y por tanto repetible para su comprobación; la dogmática nos proporcionará las bases de apoyo para la recta definición de los conceptos sujetos a análisis y su probable verificación.

- **Hermenéutica Jurídica:** Esta herramienta nos permitirá realizar la labor interpretativa de los preceptos sujetos a análisis; para ello nos valdremos de diversas teorías interpretativas, como la sistémico, la analógica, exegética, lógico jurídica, lógico formal y conceptual, etc. La hermenéutica nos permitirá de manera científica llevar a cabo la exégesis de la norma, escenario que nos proporcionará una mayor comprensión de los derechos humanos con un énfasis específico de la operacionalización y tratamiento del Estado en el “Derecho al Desarrollo”, integrados objetivamente al texto legal del que deviene. Con ello podremos entender el entorno que rodea a nuestro constructo y sus variables operativas, y nos permitirá percibir el estado del arte del mismo.

- **Historia del Derecho:** En la historia del derecho indagaremos los antecedentes del problema al estudio, para con ello comprender los motivos del estado actual del mismo, y en su caso aprender sobre las maneras antiguas de prestarlo; antes de pretender realizar una propuesta actual, el investigador debe escudriñar en el pasado, para valerse de los aciertos y desaciertos de tiempos anteriores, solo así el derecho evoluciona.

- **Jurisprudencia:** Con la jurisprudencia aprenderemos sobre la manera en que los Tribunales tanto en el ámbito internacional como en el nacional han tratado las cuestiones de competencia en torno a la tutela del derecho al desarrollo, observando la actuación y alcances del derecho por cada una de sus partes a la hora de operacionalizar este constructo de carácter transdisciplinario, cómo los han interpretado, la forma en que los resuelven y estudian los criterios que por haber formado jurisprudencia han pasado a ser considerados como la interpretación obligatoria que las autoridades deben tomar en determinados asuntos.

- **Metodología del Derecho:** En nuestra labor la metodología será de gran auxilio saber lo que es un concepto, un principio, una regla del derecho, es necesario en el hombre de ley, o sea el que legisla, juzga, aplica el derecho; el que lo estudia

para conocerlo profundamente y explicarlo con sentido crítico es el jurista. El medio es la lógica, la materia es variada: la historia, la vida individual y social, en relación con el derecho, todo eso entra en conocimiento, el examen y el análisis metódico. Conocer una institución jurídica, su naturaleza, su formación, su contenido expreso o virtual en el derecho positivo, y señalar las diferencias respecto de otra similar en la misma legislación o en una legislación distinta, presupone una labor metódica. Desde luego en el proyecto definitivo la metodología jurídica será de gran auxilio, en principio porque la misma tesis deberá hacerse en base del método científico que garantice la seriedad de las propuestas.

- **Lógica Jurídica:** Con esta ciencia procuraremos apoyarnos para encontrar las bases que nos permitan definir plenamente a la operacionalización de los derechos humanos los cuales son inherentes a la persona y están fundados en el respeto a la dignidad y el valor de cada ser humano. Emanan de valores humanos apreciados y comunes a todas las culturas y civilizaciones.
- **Retórica Jurídica:** La retórica puede ser tanto un medio de expresión, como una forma de comprender la realidad (entendida esta como la manera en que se construye discursivamente la existencia). La realidad se refiere a la materialidad del mundo, mientras que la existencia se refiere a las diversas discursividades que las comunidades construyen en torno a la relación del sujeto con otros sujetos y con la materialidad. A esa comprensión le denominamos verdad comunitaria, dado que no tiene la pretensión de describir al ente como una verdad probada, sino que tiene la voluntad de narrar al ente en relación con la comunidad y, por lo tanto, comprender la existencia.

El interés es netamente científico, pues el área a analizar carece de análisis profundo, además resulta ser de interés para la sociedad en atención a que somos los seres que nos beneficiamos con la ejecución satisfactoria del servicio público de la educación y el municipio, que es el primer nivel de gobierno que tiene mayor

cercanía a nosotros; por lo que el resultado del estudio puede ser de gran impacto, y servir de apoyo para los estudiosos del área administrativa del derecho.

El problema es científico, pues es a la ciencia del derecho —a través de sus ramas— a la que le corresponde colmar las lagunas que presenta la ley su operación o su aplicación— y eso es lo que se pretende con este estudio. Además de que aún y cuando el problema no es nuevo, existe poca doctrina que enfoque el problema tal y como se pretende hacer en la tesis que se propone.

En suma, el diseño de la investigación está basada en los componentes anteriormente mencionados, y además, es un tipo de investigación que se trata de explorar, describir, reflexionar, explicar e interpretar los puntos de interés, utilizando datos de fuentes documentales, contrastando fundamentos teóricos con la aplicación práctica, y de corte cualitativo. Se debe destacar que todo lo anterior se postula con mira hacia un ambiente sustentable que permite la durabilidad balanceada, sana y progresista de cualquier fenómeno incluyendo nuestro tema central del “Derecho del Desarrollo”.

CAPÍTULO I

LA DIGNIDAD HUMANA Y SEGURIDAD CIUDADANA COMO EJES CENTRALES DEL DERECHO AL DESARROLLO

1.1. APROXIMACIONES GENERALES

La doctrina del derecho, en su mayoría, considera al derecho al desarrollo dentro de la categoría de los Derechos Humanos; sin embargo es necesario también mencionar que no se puede estar frente a un derecho al desarrollo en su plenitud, si no se cuenta con estrategias políticas encaminadas a satisfacer algunas necesidades.

Aunado a lo anterior se sostiene que el fundamento de los Derechos Humanos, es la dignidad humana, por ende, cuando se hace alusión al derecho al desarrollo, intrínsecamente se debe tomar en cuenta el fundamento filosófico de este tipo de derecho, referidos a los de tercera generación.

Ahora bien, el concepto de dignidad humana es una expresión eminentemente ética filosófica, a la cual, algunas constituciones la protegen debido a su eminente fundamento. Así por ejemplo el caso de las constituciones Chilena¹, Brasileña², Peruana³, reconocen expresamente el respeto absoluto que se le debe a la persona humana.

¹ En la Constitución Política de Chile, se expresa literalmente en cuanto a la dignidad humana, reconocida en el artículo primero que a la letra prescribe: Artículo 1º. Las

Por otro lado, la Ley fundamental de la República Federal de Alemania, vincula la dignidad humana con los derechos fundamentales y considera como un deber del Estado protegerla. Allí puede leerse, por ejemplo, lo siguiente: “La dignidad humana es intangible. Respetarla y protegerla es obligación de todo poder público. (...) El pueblo alemán, por ello, reconoce los derechos humanos inviolables e inalienables como fundamento de toda comunidad humana, de la paz y de la justicia en el mundo”⁴.

En los instrumentos internacionales, se observa que en el artículo 1 del “Preámbulo” de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se afirma que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. En general, el concepto de dignidad humana remite al valor único, insustituible e intransferible de toda persona humana, con independencia de su situación

personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad.

² En Brasil, la Constitución Política, ha establecido en el Art. 1. La República Federal del Brasil, formada por la unión indisoluble de los Estados y Municipios y del Distrito Federal, se constituye en Estado Democrático de Derecho y tiene como fundamentos: III la dignidad de la persona humana.

³ Perú es uno de los países, que también consagran en la Constitución lo relativo a la dignidad humana, en específico en el artículo primero que a la letra prescribe: Defensa de la persona humana. La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado.

⁴ El legislador constituyente alemán implanta el derecho a la dignidad humana (artículo 1.1 de la Ley Fundamental de la República Federal de Alemania) como reacción inmediata, en primer lugar frente al desprecio a la humanidad del régimen nacionalsocialista, y destacando la prioridad del ser humano ante el Estado de la tradición jurídica europea,

económica y social, de la edad, del sexo, de la religión, etcétera, y al respeto absoluto que ella merece⁵.

Más allá de las explicitaciones mencionadas, y de la relevancia que posee la noción de dignidad humana tanto en el ámbito filosófico como en el político, jurídico, el concepto de dignidad humana no deja de ser problemático⁶. Mientras que algunos pensadores sostienen que se trata de un criterio ético fundamental, que ofrece también la base para la vinculación jurídica (Reiter, 1998, pp. 16-35). Otros se muestran escépticos respecto de

⁵ De aquí se desprende, la idea antes reconocida, la afirmar que dignidad aparece en los textos jurídicos indisolublemente ligada al concepto de derechos humanos. Los hombres tienen derechos que han de ser reconocidos por el poder político porque tienen dignidad. La dignidad humana es la causa de que se reconozcan derechos, es su justificación. Esta idea la expresa magistralmente A. Heller y la escuela de Budapest, en el sentido de señalar que: "El derecho a tener y a poner en práctica derechos es la especificación del valor de la dignidad humana". "Si observamos con atención los Preámbulos y los textos articulados de la Declaración Universal y de los Pactos internacionales [...] podemos concretar el contenido esencial de éstos como el derecho a tener derechos" HERRERA FLORES, J , Los derechos humanos desde la escuela de Budapest, Tecnos, Madrid, 1989, pags 126 y 127.

⁶ La dificultad del concepto es por el trasfondo, filosófico, jurídico, social. También se predica de ella que es la cualidad esencial del ser humano, su cualidad específica y exclusiva, en virtud de la cual se distingue lo humano de lo no-humano. La dignidad aparece, pues, como una seña de identidad del ser humano, como ser dotado de inteligencia y libertad, como ser moral. Se ha dicho, al respecto, recientemente, que la idea de dignidad resulta tan atractiva, que se manifiesta en la actualidad como uno de los "ganchos" transcendentales del discurso moral de la humanidad, que ha encontrado su mejor definición operativa y su concreción más palmaria en el concepto de derechos humanos.

los aportes y del alcance ético y jurídico que pueda tener el criterio de la dignidad humana (Fuchs, 1990). Estas divergencias muestran que cuando se aborda la cuestión de la dignidad humana, los problemas claves a resolver no son diferentes de los que presentan otros principios y normas éticos a saber: es necesario resolver, por un lado, el problema de la fundamentación de su validez, y, por otro lado, las cuestiones vinculadas con las condiciones de aplicación situacional e histórica (De La Válgoma M., 2000, p. 48).

Frente a esta realidad, por ejemplo Emanuel Kant, ha abordado explícitamente el concepto de dignidad humana y, más allá de las controversias, su interpretación sigue siendo relevante en la actualidad. Desde el planteo ético-filosófico kantiano, es posible dar una respuesta tanto al problema de la fundamentación de la noción de dignidad humana, como también a las cuestiones vinculadas con la demarcación de la atribución de dicha dignidad y las condiciones de aplicación situacional e histórica de la misma. Kant ha aportado buenas razones para la solución de cada una de estas cuestiones (Kant, 1995, p. 42).

Como es sabido, Kant distingue claramente entre valor y dignidad y concibe a esta última como un valor intrínseco de la persona moral, la cual no admite equivalentes. La dignidad no debe ser confundida con ninguna cosa, con ninguna mercancía, dado que no se trata de nada útil ni intercambiable o provechoso. Lo que puede ser reemplazado y sustituido no posee dignidad, sino precio. Cuando a una persona se le pone precio se la trata como a una mercancía. “Persona es el sujeto cuyas acciones son imputables (...) Una cosa es algo que no es susceptible

de imputación (Kant, 1995, p. 103) ” De ahí que la ética, según Kant, llegue sólo hasta “los límites de los deberes recíprocos de los hombres”.

En cuanto ser dotado de razón y voluntad libre, el ser humano es un fin en sí mismo, que, a su vez, puede proponerse fines. Es un ser capaz de hacerse preguntas morales, de discernir entre lo justo y lo injusto, de distinguir entre acciones morales e inmorales, y de obrar según principios morales, es decir, de obrar de forma responsable. Los seres moralmente imputables son afines en sí mismos, esto es, son seres autónomos y merecen un respeto incondicionado. El valor de la persona no remite al mercado ni a apreciaciones meramente subjetivas (de conveniencia, de utilidad, etcétera), sino que proviene de la dignidad que le es inherente a los seres racionales libres y autónomos.

En consecuencia, la autonomía moral es el concepto central con que Kant caracteriza al ser humano y constituye el fundamento de la dignidad humana: “La autonomía, es pues, el fundamento de la dignidad de la naturaleza humana y de toda naturaleza racional”. Esta caracterización moral marca una diferencia entre los animales y los seres humanos, y, a la vez, deja abierto un espacio para el respeto a otros seres que pudieran ser moralmente imputables.

Kant, frente a cualquier pensamiento filosófico, se presenta como alternativa válida al considerar a la dignidad humana como algo que

contiene un valor fundamental e inalterable, aún y cuando puede ser interpretado por otros autores, su fundamento radica en que todo ser con capacidad para razonar y decidir se hace acreedor a ella, es decir, a todo ser humano le corresponde. Esto es, la dignidad se encuentra presente en los seres racionales, misma que se constituye como un fin en sí mismo, y nunca como un medio que permita satisfacer bienes ajenos. Por ello, al referirnos al derecho al desarrollo, la dignidad humana está presente como un eje central.

1.2. EL ESTADO FRENTE A LA DIGNIDAD HUMANA

Antes de encontrar la relación dinámica que debe existir entre Estado y dignidad, es preciso describir de manera somera, la idea de Estado. Es por ello que siguiendo a Cançado Trindade, se entiende que el Estado como institución política jurídica ha evolucionado a la par de sus elementos esenciales; así se puede afirmar, que en la actualidad al referirnos a Estado la mayoría de los autores coinciden que éste constituye una organización política, social, económica, con un trasfondo jurídica, que tiende a la realización de fines específicos, como lo es el bien común o bien público temporal, la seguridad, la tranquilidad, la justicia y la felicidad. De lo anterior se distingue con claridad que el Estado no es solo la conformación de un grupo humano, organizado en un territorio específico, sino que está sujeto a un poder de dominación que ha sido creado por el propio grupo

humano, por voluntades propias, para así realizar los fines que le permitan la existencia de una supremacía que mande sobre otros poderes⁷.

De lo anterior, también se deduce que el Estado, tiene muchas connotaciones, ya sea política, social, así como también, para algunos, es una organización jurídica, que tiene su origen en la constitución como orden fundamental, que determina su existencia, su forma y su gobierno, los órganos que lo conforman, sus competencias y las funciones que se les encomiendan. En la vida moderna – parafraseando al profesor GIALDINO, ROLANDO- en relación a lo afirmado en líneas anteriores, los pueblos hacen uso de esa soberanía para establecer un orden jurídico coactivo, en estricto se hace referencia al ordenamiento jurídico, en el cual regulan sus actividades como individuos aislados o como pueblo en conjunto. Surge así de este ordenamiento jurídico creado por el estado con su personalidad política, dos tipos de personas jurídicas: Las personas jurídicas individuales, correspondientes a cada uno de los seres humanos, y la persona jurídica estatal, correspondiente a la totalidad de ellos, tomados como conjunto, lo que la doctrina ha nombraba como la dualidad de las personalidades del Estado (Gialdino, 2003, p. 152).

⁷ Se ha mencionado que el Estado ha evolucionado de una forma drástica, lo cierto es que como todos sabemos, los procesos de cambio nunca son estáticos, sino más bien dinámicos y en el contexto actual se entiende que resulta importante analizar el rol que cumple el Estado social frente al derecho al desarrollo de toda persona, lo que se traduce en la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales. En ese mismo sentido, se pronuncia CANÇADO TRINDADE, Antonio, La nueva dimensión de las necesidades de protección del ser humano en el inicio del siglo XXI.

Lo que respecta al derecho al desarrollo, como un derecho humano de tercera generación y su relación con la actividad del Estado, estos se ven influenciados por el estado social de derecho, dentro de la teoría del Estado. Claro sin dejar de lado que los derechos sociales vienen a complementar a los derechos individuales, configurándose como instrumentos para la lucha política. Ya no son simplemente los derechos de los ciudadanos que actúan como coraza frente a las intromisiones indebidas del poder público, antes bien, requieren de una participación activa del Estado frente a los individuos, pues los poderes públicos ya no son vistos como amenazas, sino como entes comprometidos a su protección y realización, de lo que a su vez depende en mucho la legitimidad de los mismos.

1.2.1. EL ESTADO COMO GARANTE DEL DERECHO AL DESARROLLO

Los derechos sociales, entre ellos el derecho al desarrollo, necesitan de un cierto modelo de Estado para su adecuado desarrollo y protección, esto es, requieren de un Estado social. Sin embargo, éstos han sido vistos en general como simples declaraciones programáticas, es decir, como meros fines a realizar a mediano y largo plazo por el Estado, lo que implica que en nuestro contexto se ha tenido una concepción sesgada o a veces no tan precisa de la Constitución.

De ahí la importancia de dotar a estos derechos de fuerza normativa y, para ello la función jurisdiccional, en especial en el ámbito constitucional,

reviste un papel importante, que no fundamental. Se sostiene que el Estado social no ha logrado configurarse como un auténtico Estado de derecho por lo que es necesario que éste se adhiera a la organización política del Estado constitucional. Sólo en dicho modelo institucional puede lograrse una mayor eficacia de los derechos sociales (GÁNDARA, 1983, pág. 205).

NARANJO MESA, define el Estado social como: “el Estado que garantiza estándares mínimos de salario, alimentación, salud, habitación, educación, asegurados para todos los ciudadanos bajo la idea de derecho y no simplemente de caridad” (NARANJO, 2016, pág. 76). Es por ello, que el logro obtenido, de la evolución del Estado de Derecho al Estado Social de Derecho, permite que se evidencie un desarrollo económico, social y político, puesto que la población, puede acceder gratuitamente a los servicios públicos vitales, así como a la educación y la cultura, dejando así la posibilidad que el pueblo se eduque y pueda no solo prepararse sino que con ello, aspirar a una mejor calidad de vida a través de una superior oportunidad de empleo y así contribuir con un desarrollo monetario-social tanto para el país como al interior de su núcleo familiar.

Se tiene entonces que el Estado social de derecho es la forma como se organiza el Estado con el fin de combatir las graves situaciones a que diversos sectores o grupos poblacionales se ven abocados diariamente,

prestándoles ayuda y protección. Es decir, que lo que prima es el ser humano.

Sin embargo, en el ordenamiento jurídico internacional, en especial el español, la Constitución española de 1978, dio origen en el sistema jurídico-político, un nuevo modelo de organización que con el tiempo ha sido llamado Estado social de Derecho, que ha decir de la doctrina especializada, esta forma de estado, tiene impacto dentro de la administración pública⁸. El legislador constitucional español proyectó de esta manera una nueva legitimidad y un diseño del poder y de Derecho cuya plasmación en la realidad cotidiana necesitó importantes transformaciones, tanto de la mentalidad y la cultura jurídica, social, etc.⁹ El objetivo radical de este proceso de cambio no fue sino e impulso básico de un Estado orientado a la satisfacción de los derechos fundamentales de todo administrado (GARCÍA DE ENTERRÍA, 1980, pág. 184).

⁸ Se tiene entonces que la función pública a partir del estado social de derecho, tiene como fin buscar la perfecta armonía entre la administración pública y el Estado. El Estado Social de Derecho tiene como fines, que la administración pública sea la herramienta para llegar a cumplir los fines estatales. No obstante también la función pública definido como empleo público, tiene una gran influencia en el desarrollo del cumplimiento de los fines del Estado, ya que por medio del personal estatal, los administrados puede acceder a la justicia.

⁹ Así como de numerosas sentencias del Tribunal Constitucional, a través de las cuales se afirmaba la naturaleza, la superior fuerza normativa de la Constitución y sus efectos sobre el ordenamiento jurídico, desde el mismo momento en el que inició su régimen institucional.

Por tanto, en un Estado Social de derecho, se entiende que la administración pública debe satisfacer las demandas de la comunidad, es decir, el interés general sin excepción por mandato expreso, en el caso español de la constitución de 1978. (VON HAYEK, 2000, pág. 19) La cual, como ya se mencionó en párrafos anteriores, dio origen al Estado Social de Derecho, con principios que lo rigen y lo diferencian de un Estado de derecho, lo cual ha permitido, especialmente la concientización, por parte de la administración como de los administrados, acerca de lo que ello significa¹⁰.

Lo anterior quiere decir, que el Estado no solo puede dejar la prestación de un servicio público en un concepto jurídico, sino también ha de ponerlo en práctica y solo se verifica en la medida que se evidencie la satisfacción efectiva de una necesidad de interés general. Por lo tanto cuando se quiere establecer si la actividad prestadora de servicios públicos

¹⁰ Aunque se debe tener en cuenta que una parte de la doctrina española considera que existe imprecisión y la bruma teórica que ha envuelto tradicionalmente a los derechos sociales proviene de las mismas posiciones teóricas que cuestionan el Estado de bienestar orientado a lo social. De ellos se afirma que los derechos que se protegen en un Estado social, no son auténticos derechos fundamentales, son principios programáticos que no crean obligaciones concretas en los poderes públicos; son incompatibles con los derechos civiles; su realización, en ocasiones, rompe el principio de división de poderes; son caros, no imponen deberes claros sobre sujetos determinados; son inviables; no son justiciables y no son universales.

es efectiva, se remite a la realidad, el caso concreto, si la satisfacción de la necesidad del interés general fue suplida.

Por tanto, considero que el Estado se legitima por medio del cumplimiento total de sus fines. Por tanto el estado social de derecho, obliga a la administración a realizar en forma efectiva sus deberes sociales, entre ellos los servicios públicos. Un Estado ineficiente y que no realiza sus fines esenciales pierde legitimidad.

Todo su actuar del Estado, se debe encaminar a proteger el desarrollo de la persona humana, por ende la dignidad de la persona humana. Tal, es así que desde la ilustración del proceso histórico de los derechos humanos, refieren con insistencia el concepto de la dignidad humana como supuesto esencial de su existencia. Desde esa perspectiva conviene para el objetivo del estudio que se emprende, desentrañar el sentido de la dignidad humana, de la dignidad del hombre, de la dignidad del ser humano (BALDASSARRE, 2001, págs. 139-145).

1.3. LA DIGNIDAD HUMANA FRENTE A LA LIBERTAD COMO MANIFESTACIÓN DEL DERECHO AL DESARROLLO

La libertad del ser humano se asimila al concepto de dignidad humana, por ende lleva intrincado el derecho al desarrollo, reflejado, como una esfera particularizada de los individuos aislados en una sociedad, y que desde la

antigüedad se ha concebido como derechos del hombre o libertades fundamentales que han existido fuera de todo orden político y jurídico; tienen sus raíces en una filosofía enmarcada en leyes naturales como la razón, la igualdad y la dignidad del hombre, considerados como valores que están por encima de todo orden y fuera de su alcance.

Las libertades fundamentales tienen su origen no únicamente en un concepto natural, sino también tienen otra raíz de tipo religioso, ético o moral, que realizaron formulaciones convincentes y dominaron el pensamiento individual. También las libertades fundamentales tuvieron un significado filosófico derivado de las ideas, no solo del derecho natural, sino también del contrato social, para colocar entre las libertades individuales como centro de protección, a la propiedad y resulta de la historicidad de las libertades fundamentales que se definen en una trilogía clásica que cubrió las creencias religiosas, las necesidades económicas y los objetivos políticos; correspondiendo a la libertad religiosa el deseo del individuo de liberarse de la tutela clerical y de la coacción sobre su conciencia¹¹.

¹¹ La Declaración sobre el Derecho al Desarrollo vuelve a destacar la necesaria interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos al implementar el derecho al desarrollo, como refleja el párrafo 1 del artículo 9, “todos los aspectos del derecho al desarrollo enunciados en la presente Declaración son indivisibles e interdependientes y cada uno debe ser interpretado en el contexto del conjunto de ellos”, en consonancia con lo que establece el Preámbulo, “Todos los derechos humanos y libertades fundamentales son indivisibles e interdependientes y que, a fin de fomentar el desarrollo, debería

La concepción del derecho de propiedad y la libertad de contratar legitimaron el orden económico de "dejar hacer" protegiéndolo contra la intervención de todo orden superior de tipo mercantilista o colectivista; y la libertad política, mostró ser en todas sus manifestaciones condicionadas por la épocas, un arma útil contra las repercusiones latentes de los privilegios feudales y de la prerrogativa real, así como defensa contra los grupos, lo que significa que la esfera de libertad del individuo es ilimitada frente al concepto de limitación de facultades estamentales y lleva inmerso el significado de una declaración de la existencia de tales derechos humanos y por consiguiente esa declaración solemne, es la expresión natural de la conciencia de que en un momento decisivo, se da una propia dirección a la vida humana y se conciben como derechos fundamentales solo aquellos que pueden valer como anteriores y superiores a cualquier estructura estatal, determinando que esos derechos o libertades fundamentales son según su sustancia, no jurídicos, sino esferas de la libertad de la que resultan derechos que son el comienzo de un reconocimiento a la libertad, la igualdad y la resistencia individual contra todo aquello que lo molesta, lo

examinarse con la misma atención y urgencia la aplicación, promoción y protección de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, y que, en consecuencia, la promoción, el respeto y el disfrute de ciertos derechos humanos y libertades fundamentales no pueden justificar la denegación de otros derechos humanos y libertades fundamentales”

perturba, lo limita, destacando el principio de distribución como el instrumento más eficaz de la libertad humana concebida como esencia del hombre individual libre y que por naturaleza tiene derechos que le permitan resistirse ante el estado, lo que supone que el hombre por virtud de su propio derecho natural, entra en juego frente al estado que habrá de limitar y estructurar los derechos libertarios, libertades públicas o derechos fundamentales¹².

El principio de distribución de la libertad a que se refiere CARL SCHMITT no desecha la idea de que el ser humano tiene libertades fundamentales anteriores y superiores al estado concebidas como individuales pero que en su devenir histórico adquieren una connotación social al no considerar al individuo en forma concreta, sino como formando parte de lo social, en la que manifiesta su pensamiento como forma de libertad, y es la asociación con sus semejantes a la que enfrenta esa libertad como dignidad propia, de lo que se deduce que no solo tiene un significado como posibilidad de actuación ¡limitado del

¹² La igualdad y la libertad de los individuos da sentido normativo a la democracia como régimen de vida colectiva contra quienes cometen excesos y producen desigualdades. Esto a pesar de que se conciba a la democracia como el sistema de gobernabilidad más conveniente para la resolución de conflictos y diferencias entre los diferentes actores económicos, políticos y sociales en un marco que privilegia la libertad individual. Así las nuevas formas democráticas se expresan fuera del dominio del Estado y se manifiestan en forma más espontánea en la sociedad que ejercita la política como orden. Esto permite repensar la democracia como formas de expresión de la acción colectiva orientada a satisfacer las demandas de igualdad y libertad.

individuo, sino como una concepción de libre aprovechamiento de la fuerza social, de la que emerge la complejidad de los derechos libertarios en todas sus expresiones (Carré de Malberg, 1948, pág. 84).

1.3.1. INTELIGENCIA Y VOLUNTAD; ANÁLISIS DESDE UNA ÓPTICA

FILOSÓFICA PARA EL DESARROLLO HUMANO

La inteligencia y la voluntad, son medios que constituyen el ser biológico y lo convierten en persona; ser hombre es de origen natural y tiene un destino que realizar que es su propia libertad y cumplir todos los quehaceres que le permitan alcanzar lo que desea, y siente la necesidad de que lo que es suyo, lo que le pertenece, sea respetado y por sí mismo construye una resistencia respecto del otro, para que por medio de su libertad pueda lograr todo lo que es suyo.

La libertad humana es trascendente porque concibe principios inmutables que tienen su existencia en reglas de origen divino, que le permite constituir su propia regla que tiene su fundamento en una idea del derecho como facultad de hacer, de obrar y exigir; en principios éticos que conforman su dignidad y en principios políticos que le permiten entrar en comunicación con sus semejantes, y la idea de lo inmutable e imperecedero, invulnerable, se fundamenta en lo que es bueno y lo que es justo y el hombre como ser humano plantea en el tiempo y en un momento dado, la necesidad de que se garantice una forma de ser basada en el bien,

aunque no constituya propiamente una ley, sino un producto de la razón (De La Válgoma M., 2000).

La vida humana se desenvuelve en el estado de naturaleza en base a la razón que tiene un sustento en una ley considerada como divina, que es eterna, inmutable, santa, celestial y para estimar lo justo debe derivarse de lo eterno.

El pensamiento cristiano se difundió a través de la Biblia, y las libertades de derecho natural están inscritas en la conciencia humana, por lo que se considera que la ley es eterna y es la voluntad divina la que ordena y dirige todo el universo y es inmutable porque subordina el estado natural y de la vida humana, a la ley eterna. La ley divina es algo fuera de lo humano y el temor que infunde lo religioso, hace construir la idea de la ley natural que supone su obligatoriedad, y el ser humano siente la necesidad de su obediencia por lo que el pensamiento cristiano se ubica en la cúspide de la concepción de las libertades humanas y dan fundamento y validez para su realización, y las ideas de consideran al derecho natural como una prolongación de las ideas cristianas (De La Válgoma M. , 2000, p. 57)

El concepto de las pasiones humanas que fueron expuestos por (Hobbs, Locke y Rousseu), así como las de (Püfendorf y Wolf), fundamentan al derecho natural en la razón y conjuntan los principios de la ley natural o de la razón, ley divina o eterna y el de la pasión humana como

inmutables, y tienen como fin, alcanzar la felicidad y con los mismos se concibe la idea de libertad e igualdad. Grocio estimó que la naturaleza misma del hombre, lo compelió a vivir en sociedad y señaló como fuente mediata a Dios al conciliar la vigencia de la razón humana como naturaleza social, señalando lo bueno como esencial; Hobbs entendió el derecho natural como libertad ilimitada y la utilización de todos los medios necesarios para salvaguardar la existencia del ser humano ante los múltiples peligros que lo asediaban, y conforme a su pensamiento todo era permitido para protegerse el hombre mismo, valiéndose de sus fuerzas y por ello tenía una vida de guerra poniendo en juego una ley natural que mostraba la necesidad de la paz, la felicidad y conservar la vida, y destaca la razón como medio natural para mantener la paz en una convivencia social; Püffendorf concibió a la razón como medio por el cual se podía deducir una ley natural y que se lograba mediante la contemplación de la naturaleza humana, tomando en cuenta que el hombre necesita vivir en sociedad, ya que Dios le concedió una naturaleza social y plasmó como fundamento del derecho natural, el amor a Dios y al prójimo (Peces Barba, 2002, p. 12).

Las formas de pensamiento que se relacionan como una idea cristiana, como pasión de la humanidad y como razón natural del propio hombre, se concilian con las ideas de (Wolff y de Hegel) al establecer que el derecho natural tiende a determinar el perfeccionamiento del hombre y de la sociedad, entendiéndolo como ordenador para realizar obras que tiendan a su superación y

la de los demás, señalándolo como universal e inmutable porque la existencia de un derecho originario postulado también por FICHT es el derecho a la libertad individual, y que solo puede realizarse en una comunidad humana (Carrillo Salcedo J. A., 1999, p. 79).

1.4. LA JUSTICIA COMO DERECHO INDIVIDUAL DE LIBERTAD E IGUALDAD

El derecho positivo es el derecho del legislador, es el derecho del estado que postula el deber, independientemente de que pueda considerarse justo o injusto y está provisto de un elemento externo que es la coacción para lograr su cumplimiento. Para Norberto Bobbio el derecho positivo como posición de la ciencia jurídica puede planificarse como una teoría, una ideología o como un modo de acercarse a la ciencia del derecho (Bobbio N. , 2005).

Como teoría, es la formulación de un sistema jurídico por el poder del estado que es capaz de ejercitar la coacción. Como ideología, el positivismo jurídico no debe entenderse únicamente como una voluntad dominante de ser justo, o bien como conjunto de reglas impuestas por el poder y que el elemento de fuerza sea el que le dé existencia, sino que debe entenderse como reglas que tienen fines deseables como el orden, la paz, la certeza y en general la justicia legal, partiendo de la base que para su obediencia llevan implícito un deber moral como obligación interna o de conciencia, que es debida al respeto a la ley y no por

temor a una sanción como forma de acercarse a la ciencia jurídica (Bobbio N. , 2005).

El mismo autor, concibe al derecho, como una actitud que contempla elementos finalistas como son la obtención del bien común, la actuación de la justicia, la protección de los derechos-de libertad, la promoción del bienestar y con ello integrar, mediante interpretaciones que hacen los jueces y los juristas, todas las normas que emanen de los órganos provistas de coacción.

Los derechos humanos no son producto de un orden jurídico, no los crea ni los establece, solo los reconoce pues son persistentes a todo orden social y la constitución simplemente los supone; no los enumera, sino que en base a una relación sociológica varía su desarrollo y se ejercen por la persona en el seno de una comunidad y va conforme a ese desarrollo, estableciendo garantías para su libre ejercicio (García Maynez, 2009, p. 206).

Los derechos desde la época primitiva hasta nuestro tiempo no han sido ni más ni menos en número, ni más o menos extensos, sino que son inmutables, inalienables conforme al proceso histórico de la existencia y reconocimiento de los derechos del hombre.

José María Lozano clasifica a los derechos humanos en muy pocas palabras: libertad, seguridad, propiedad e igualdad. La libertad consiste en la falta de traba o de presión, que nos deja enteramente dueños de nuestros propios actos; en un sentido general es la facultad de hacer o de no hacer aquello que en voluntad nos venga; entre esos derechos se pueden referir el libre tránsito,

enseñanza, libertad de trabajo, manifestación de las ideas, el de petición, el derecho de asociación (Lozano, 1988, pp. 84-85).

La igualdad no es por si una garantía y su importancia depende de la relación que guarde con la ley; la igualdad es general y común en todos los hombres indistintamente; es el derecho de todo ser humano a ser juzgado por unas mismas leyes que constituyan el derecho fundado, sobre reglas generales y no de privilegios y consiste en la admisibilidad de todos salvo, diferencias a que natural y necesariamente han de dar lugar, las de los talentos y virtudes personales (De La Válgoma M. , 2000, p. 206).

El constitucionalismo de la era moderna permite apreciaciones de valores éticos y morales que han demostrado las aspiraciones de la ilustración, para que se garanticen a todas las personas el firme goce de sus derechos naturales y civiles, por ser indispensables que los derechos del hombre sean regulados como garantías.

La constitución es el orden jurídico superior que organiza el orden político y a los derechos humanos, que reconoce las libertades fundamentales de toda persona. Ese orden jurídico contiene limitaciones al ejercicio del poder político y además garantiza mediante prácticas jurídicas el disfrute de los derechos humanos y procura que toda persona se desarrolle y logre su engrandecimiento en libertad, con seguridad e igualdad, que le propicien el bien común, la justicia y la fraternidad.

La nueva dimensión de todo orden jurídico constitucional comprende las circunstancias que la vida social y económica requieren y destaca entre las garantías jurídicas, no solo el reconocimiento de los derechos fundamentales del individuo que se mencionan anteriormente, sino que abre la posibilidad para que dejen su posición individualista y enderecen sus contenidos hacia el mundo de la plenitud jurídica y de la dimensión del hombre.

La justicia es entonces un derecho individual de libertad que permite a cada persona exigir lo que le corresponde y es un deber de dar a cada quien lo que merece; también es un derecho de igualdad según la posición en que se encuentre, frente a otra persona, frente a la comunidad o bien ante los órganos del estado (Carrillo Salcedo J. A., 1999, pp. 66-75). Por tanto es el resultado del ejercicio de esos derechos que conjuntamente actúan en la sociedad y habrá de reconocerse en todo orden jurídico, no solo como un valor, sino como un principio fundamental de la ciencia jurídica, pues de no admitirse en su plenitud, se estará negando la convivencia armónica a que toda persona aspira y que solo puede lograrse por el derecho y garantizarse por el estado.

1.4.1. LA JUSTICIA COMO FORMA DE DESARROLLO

El derecho a la justicia no puede contemplarse como uno puramente individual que tiende a exigir por cada persona lo que es suyo, sino como una necesidad, como deber de dar lo que es debido, lo que la otra vale, lo que merece, por lo que su estructura emerge del ejercicio de la libertad como un derecho de hacer lo que nos parezca más aceptable y del de la igualdad como un derecho de toda persona

para ser tratado como igual por los iguales y desigual por los desiguales y de ser juzgado por una misma ley que se sustente en reglas generales, sin prejuicios, salvo las diferencias, a que necesariamente se den lugar y con ello cobra vida el derecho de exigir, de los órganos del estado que se dé lo que le corresponde como suyo a toda persona, y a la vez que se le imponga por aquél como sanción, el dar lo que debe, lo que merece cada quien, al conjunto de la sociedad en que se desarrolla.

Desde esa posición, se entremezcla el derecho natural y el derecho positivo como fundantes de los derechos del individuo y en opinión de Mauricio Fiorovanti existen tres modelos que fundamentan las libertades en el plano teórico doctrinal: El historicista que sitúa las libertades en la historia y las sustrae de las posibles intromisiones arbitrarias de los poderes constituidos (Fiorovanti, 2009, pp. 76-77).

El individualista que fija la relación de una persona frente a otra, lo que hace suponer una dualidad de libertades; y: El modelo estatista en el que destaca que el estado es algo más que un instrumento necesario de tutela: es la condición necesaria para que las libertades y los derechos nazcan y sean alumbradas como auténticas situaciones jurídicas subjetivas de los individuos.

En ese modelo se comprenden los llamados derechos sustantivos o materiales que generan un control interno de tipo horizontal no sólo por el orden jurídico, sino de los poderes y órganos que la misma constitución prevé; y otros derechos fundamentales que considera secundarios, entre los que hace notar el derecho a la justicia, como es el de acudir a los tribunales para que mediante una

justicia procesal implementada por mecanismos y procedimientos lleguen a ser efectivos los derechos sustantivos o materiales.

El modelo historicista da cuenta de que existen derechos fundamentales que son la máxima expresión de los valores consagrados por una organización jurídica política y por la constitución, y de éstos se toma como un valor en un orden metodológico de segundo grado el derecho a la justicia como condición para realizar los derechos sustanciales o materiales, como la libertad y la igualdad (García Amado, Teorías del sistema jurídico y concepto de derecho, 1985, pp. 99-105).

Así de la trilogía de Robert Alexy, derechos y justicia se advierte la importancia de ésta última como valor supremo y como garante de la ley y de su efectividad. El derecho a la justicia no es simplemente un derecho que implica la posibilidad de obtener de los demás y de los órganos del estado lo que le corresponde, sino que es un deber de toda persona de dar lo que es debido, así como es para los órganos de autoridad un deber, deber supremo de hacer cumplir, de proteger y dar efectividad a un derecho individual (Robert Alexy, Tres escritos sobre los derechos fundamentales y la teoría de los principios, 2003, pp. 93-123).

El deber de dar justicia encomendado por el orden jurídico a los órganos del estado que tienen a su cargo la aplicación de la ley, no debe contemplarse como una fija abstracción, sino como una infinita multiplicidad de modos de realizarse porque se presta a ser adecuada a las características propias de los casos a decidir y atender a una multiplicidad de connotaciones que los caracterizan

concretamente y ese deber exige que esos principios aplicados a la justicia, sean abiertos a la comprensión de sus-especificaciones.

Se quiere decir que la justicia no puede ser medida solo por una norma positiva, ejercida a través de juicios de equidad y mediatos, sino que debe ir hacia una norma ubicada hacia arriba, es decir encauzada a los principios de la justicia, como también debe ir en pos de la igualdad, ir a los hechos en su efectividad y elevar como motivo de validez o invalidez, a la norma jurídica que es una condicionante de su alcance.

Esta concepción de la justicia plantea que un órgano del estado sea el encargado de dar justicia (Garzón Valdés, Algo más sobre la relación entre derecho y justicia publicado en Derecho y Moral. , 1998, p. 146); el que va a juzgar la legitimidad de la ley en base a parámetros externos al ordenamiento existente y que le corresponde a través de una interpretación renovadora y evolutiva, juzgar las certezas normativo positivista en los cuales se quiera reconocer ese valor supremo que es la justicia.

Federico Hegel, al referirse a la existencia de la ley dice: "Este reconocimiento y ésta realización del derecho en el caso particular, sin el sentimiento subjetivo del interés particular, concierne a un poder público, al Magistrado la administración de la justicia se debe mantener tanto como un deber, cuando como un derecho del poder público, el derecho encuentra su satisfacción en la confianza de la subjetividad de los que resuelven; esta confianza se funda

especialmente sobre la igualdad de las partes ante aquéllas, según su particularidad, su clase (Hegel, 2007, p. 207).

El tema de la justicia debe tener una concepción renovada que surge de la necesidad de garantizar el pleno ejercicio de los derechos de toda persona y comienza a ser tratada como un derecho fundamental para exigir lo que a cada quien corresponda y substancialmente la justicia se refiere a la aplicación de la ley por los tribunales y al ejercicio de los derechos procesales como derechos básicos que sustentan una noción filosófica de la justicia en su aplicación y en su modo de ser, protegiendo al ser humano en sus valores fundamentales reconocidos en el orden jurídico supremo, para reafirmar el carácter protector de la norma constitucional con el acento de los tiempos modernos-que son las libertades individuales (Robert Alexy, El concepto y la validez del derecho y otros ensayos. Colección Estudios Alemanes, 1997, pp. 147-158).

El derecho a la justicia se descompone a la vez en diversas garantías como normas principio que regulan la prontitud, gratuidad, especialidades de tribunales, no retroactividad de la ley, y elimina toda posibilidad de venganza privada y tiende a que la justicia sea completa, que su realidad se conforme con la interpretación que los jueces hagan de la legalidad judicial, conforme a la lectura de la ley y a su interpretación, o bien atenerse a los principios generales de derecho que se contemplan en todo orden jurídico entre los que predomina como valor supremo la justicia, no solo como un ideal, ético y moral, sino como concepción estrictamente jurídica (Dworkin, 2002, pp. 139- 152).

El derecho de la justicia como derecho de libertad de exigir y de dar y de igualdad de ocurrir a los tribunales, fue concebido tradicionalmente como un derecho individual, pero la tendencia a la socialización del derecho no como una teoría, sino como un modo de acercarse a la ciencia jurídica que está presente en nuestro tiempo, ha dado una protección a la justicia con un contenido social, para que efectivamente se lo que la justicia natural o real y no únicamente la formal que postula una regla jurídica.

El derecho de acudir a la jurisdicción del estado se ha convertido en un verdadero derecho a la justicia entendida como un valor social en el que deben de contribuir como fundamento de su realización, la libertad del individuo y la igualdad, como presupuestos razonables de su eficacia.

El derecho a la justicia como un valor social exige de la jurisdicción del estado como presupuesto indispensable, un proceder de dar por los órganos encargados de aplicar la ley y éste proceder de dar del estado es un deber que el orden jurídico constitucional le impone con características de especialidad y de prontitud, como condiciones razonables que logre el equilibrio que debe existir entre lo deseable y el tiempo suficiente para que toda persona logre su bienestar.

Otra condición de la justicia como deber de los órganos del estado es su independencia que tiene su fundamento en el principio de la división del ejercicio de los poderes que garantiza la actitud leal de que los jueces actúen sin injerencias indebidas de otros órganos de autoridad.

También los jueces tienen deberes como condiciones de la justicia, como el de actuar con imparcialidad lo que tiene un alto significado de carácter subjetivo, un modo de actuar de la voluntad de una persona sin sujeción a influencias externas y que le permiten determinar lo que es dado a cada quien y lo debido por cada persona. Ese conjunto de condiciones como meros deberes estructuran el derecho de la justicia para ser impartida por la jurisdicción estatal fundamentada en los derechos de libertad y de igualdad (García Amado, Teorías del sistema jurídico y concepto de derecho, 1985, pp. 198-215).

1.4.2. LA JUSTICIA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA FRENTE AL DERECHO AL DESARROLLO

Para entrar a un análisis del derecho al desarrollo, en su relación con el acceso a la justicia y la seguridad ciudadana, interesa una de las peculiaridades del Estado, que es el único de los componentes del sistema que puede establecer leyes y políticas específicas para el tratamiento del problema de la seguridad, pero en una sociedad compleja, como la nuestra, el Estado ya no está en condiciones de resolver todos los problemas, ni todas sus dimensiones o manifestaciones, las cuales atentan con el derecho al desarrollo, más aun cuando el Estado no garantiza el derecho al acceso a la justicia y la seguridad ciudadana.

Muchos enfoques recientes relacionados con la Seguridad Ciudadana colocan a la comunidad en el centro del desarrollo de posibles soluciones, con lo cual la temática de la participación comunitaria y la capacidad de los vecinos para enfrentar problemas de delincuencia y otros peligros en el nivel de los hábitats

residenciales se tornan especialmente relevantes; es decir que la sociedad en su conjunto, busque las herramientas que hagan posible que se viva en clima de tranquilidad (Carrillo Salcedo J. A., 1999, pp. 45-57).

Esta tendencia no sólo deriva de la concreción de los valores relacionados con la democracia y la participación social, sino que también de la necesidad de hacer frente a la inseguridad en los lugares se experimenta, asumiéndose que mediante la incorporación de las potencialidades de las personas organizadas se podría incrementar los niveles de control social, generando así una disminución de las actividades antisociales en el interior de barrios y sectores residenciales.

Ahora bien, entiéndase por seguridad ciudadana como la acción integrada que desarrolla el Estado, con la colaboración de la ciudadanía, destinada a asegurar su convivencia pacífica, la erradicación de la violencia y la utilización pacífica de las vías y espacios públicos. Del mismo modo, contribuir a la prevención de la comisión de delitos y faltas”. En ese sentido se ha pronunciado, haciendo una interpretación a la constitución, en una sentencia el Tribunal Constitucional Peruano, al establecer que: se considera a la seguridad ciudadana como un estado de protección que brinda el Estado y en cuya consolidación colabora la sociedad a fin de que determinados derechos pertenecientes a los ciudadanos puedan ser preservados frente a situaciones de peligro o amenaza o reparados en caso de vulneración o desconocimiento¹³.

¹³ Suprema Corte de Justicia: Consultado el día 18/07/2017. Disponible en: <http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2005/00041-2004-AI.html>

Podemos observar que estos dos conceptos resaltan el hecho que el combate contra inseguridad no se reduce a la atención oportuna de los actos delictivos, sino que por tener un conjunto complejo de factores que la originan (que van desde los problemas económicos, sociales, culturales, de desigualdades, hasta los de urbanismo, ambientales, entre otros) los órganos de Seguridad Ciudadana deben poner énfasis en las acciones preventivas, algunas de ellas del tipo intersectoriales (siendo precisamente por ello que en su composición confluyen un conjunto de actores relacionados al tema).

1.4.3. PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE SEGURIDAD CIUDADANA

La construcción de una política pública de seguridad ciudadana es un proceso que parte de la identificación del problema de la violencia, en tanto fenómeno de magnitud creciente y grave impacto en la sociedad. En este caso, la violencia tiene, ante todo, una naturaleza delincuencia, que impacta en la sociedad, en especial en el derecho al desarrollo, lo que genera una generalizada percepción de inseguridad.

Frente a ello, se construye socialmente la necesidad de dar respuesta y se perfila una demanda de intervención del Estado, entidad que debe controlar la delincuencia, dar seguridad al conjunto de la sociedad y bajar al mínimo soportable los índices de afectación a la convivencia pacífica. El proceso de construcción de una política pública de seguridad ciudadana se consolida mediante la participación social y el empoderamiento de la norma.

En la sociedad civil hay avances significativos evidenciados en la reflexión académica profunda sobre la violencia y la inseguridad, en la realización de importantes foros ciudadanos sobre el tema, en la ejecución de investigaciones aterrizadas en temas concretos, y en la acogida positiva dada por los principales medios de comunicación a un tratamiento serio y responsable de la violencia.

En este contexto, el documento de políticas de seguridad ciudadana que se presenta es la manifestación fehaciente de la necesidad socialmente construida de formular estrategias que apunten a dar soluciones al problema de la violencia, especialmente de aquella derivada del incremento de la acción delincuencial.

En resumen, las acciones de política de seguridad ciudadana son coherentes dentro de una visión sistémica, donde intervienen procesos de cambio estructural, reformas institucionales y organizacionales, cambios tecnológicos, valores cívicos y morales revitalizados, y corresponsabilidad ciudadana mediante la participación y el control social.

La mayor parte de la sociedad aún cree que ante el auge de la violencia y la delincuencia, el Estado, es el llamado a redoblar acciones de control y represión a los actores directos de tales hechos, sin asumir una actitud proactiva y corresponsable. En consecuencia, uno de los esfuerzos mayores de los promotores de la construcción de políticas públicas de seguridad ciudadana es la construcción de un discurso con enfoque de participación ciudadana, en concordancia con los organismos de seguridad pública y otras instancias

institucionales, en función de las acciones de prevención y control de la delincuencia.

La sociedad en su conjunto ha evolucionado desde una visión excluyente a otra, que define al problema de la violencia y la inseguridad como un asunto público, es decir, un tema de la agenda ciudadana, que involucra derechos y deberes a ser vividos cotidianamente por los actores, tanto sociales como institucionales. La implementación de soluciones involucra necesariamente a la familia, a los espacios educativos, a la comunidad, entre otras instancias sociales donde se forman valores que sustentan una cultura de paz, una vida social civilizada y solidaria, y roles corresponsable con la solución de los problemas de la violencia.

En México se vive un momento clave de este proceso, que implica el agregar fuerzas sociales y capacidades institucionales para la construcción de una política pública de seguridad ciudadana. En este momento se debe convertir la percepción de inseguridad en necesidad de seguridad, y ésta en demanda que genere participación ciudadana. Este momento estratégico del proceso se requiere mayor participación ciudadana pues la ley implica empoderamiento social, a partir de allí surgen los retos de la construcción de la representación legítima de la ciudadanía en espacios de intervención focalizados territorialmente (CEFP, 2012).

Poner en agenda la seguridad como política de Estado implica tres objetivos básicos: Promover la participación ciudadana. Incorporar la demanda en

la agenda institucional. Sostener la misma en plazos largos en los que se producen los cambios que deben ser evaluados y sometidos al control social. Estamos frente al reto de la implementación de políticas concretas en esta materia, lo que supone voluntad política, actitudes favorables al proceso, liderazgo institucional, desarrollo de capacidades, cambios organizacionales, inversión social en seguridad ciudadana, entre las principales condiciones para el éxito práctico de este reto. Desde la sociedad civil, se debe construir alianzas estratégicas que se expresen a través de redes organizadas de seguridad ciudadana que transformen las políticas públicas en hechos efectivos.

La prevención social pretende intervenir en los factores de riesgo que se han identificado como precursores del comportamiento violento o delictivo. Aun cuando se reconoce ampliamente que la mera presencia de ciertos factores de riesgo no predice necesariamente la participación en hechos antisociales, la investigación ha establecido que la copresencia de diversos factores puede elevar la probabilidad de que una persona desarrolle comportamientos violentos o delictivos. Debido a lo anterior, la prevención social tiene como objetivo intervenir estratégicamente sobre las variables identificadas por la investigación empírica como factor de riesgo para el desarrollo del comportamiento delictivo, tales como la deserción escolar, el desempleo, la violencia en la familia, el consumo problemático de alcohol y el consumo de drogas, entre otros. En síntesis, la

prevención social pretende lograr que los niños, niñas y jóvenes del país tengan la oportunidad de alcanzar su pleno desarrollo en entornos sanos y seguros¹⁴.

De igual forma, la prevención social también comprende las iniciativas que mitigan dichos factores de riesgo en personas ya en contacto con el sistema judicial y que permiten una mayor reinserción social y laboral de personas que estén cumpliendo sanciones en libertad o en el medio cerrado o que hayan cumplido alguna condena de reclusión. Debido a las instituciones involucradas, no obstante, éstas están descritas en el subsistema de control.

Por otra parte, existen una serie de otras causas de la delincuencia que no necesariamente tienen relación con factores de riesgo como los recién descritos, sino que más bien con determinadas condiciones socio-culturales, pero cuya intervención también es considerada aquí como prevención social. Por ejemplo, algunas formas de violencia o delincuencia tienen relación con el aprendizaje de tales conductas en la familia, la escuela o la comunidad, situación que no necesariamente es captada por el enfoque de factores de riesgo (Castillo González, 2012, pp. 188-202).

¹⁴ Cabe destacar que aun cuando en varios países la prevención temprana, es decir, aquella dirigida a los niños desde antes de su nacimiento hasta la edad de la pubertad, es considerada de forma específica, en este esquema analítico forma parte de la prevención social. *“Política Nacional de Seguridad Ciudadana”*, chile-octubre, 2004.

Como subsistema, los indicadores de resultados de la prevención social tienen relación con la reducción del conjunto de personas involucradas en el delito, pudiendo medirse a través de indicadores relativos a la proporción de personas que tienen contacto por primera vez con el sistema policial-judicial y las tasas de reincidencia de las personas que han sido condenadas por un delito. Una menor proporción de personas sin antecedentes previos aprehendida o enjuiciada indicaría mayores niveles de éxito en la intervención en los factores que causan la comisión de ilícitos, al igual que menores tasas de reincidencia indicarían una mayor efectividad de las tareas de rehabilitación y reinserción (González De La Vega, 2001, pp. 173-176).

Una de las primeras tareas en materia de prevención social es la realización de mayor investigación empírica (se adquiere a través del saber cotidiano y se adquiere a través de la evolución y vida cotidiana del individuo)¹⁵ sobre factores de riesgo de comportamiento delictivo y su prevención. Por tanto para estar frente a una verdadera política a favor de una tranquilidad que envuelva el libre desarrollo, es necesario que se tomen en cuenta algunos puntos cruciales:

- Debe existir una política que impacte en la reducción de la violencia intrafamiliar y el maltrato. En el caso de la violencia intrafamiliar y el maltrato, se debe tomar en cuentas, que estas limitaciones son importantes debido a que los cambios legales realizados y las

¹⁵ Accesible en internet: <http://www.definicion.org/conocimiento-empirico>. Consultado el día 10/06/17

acciones emprendidas para fomentar la denuncia, probablemente, han hecho disminuir la cifra negra en los últimos años. En este contexto, es necesario medir adecuadamente el fenómeno con instrumentos desarrollados específicamente para este fin (encuestas autoadministradas) y realizar los análisis cuantitativos y cualitativos requeridos para orientar la acción en este campo.

- Así también, se debe implementar políticas para reducir la violencia escolar. La ausencia de violencia y la resolución pacífica de conflictos en los establecimientos educacionales es una condición necesaria para lograr altos niveles de aprendizaje de los alumnos. Aun cuando la violencia en estos lugares tiene naturalmente relación con condiciones socioculturales y de su entorno, los establecimientos educacionales tienen un claro rol en la prevención de la violencia escolar y constituyen una instancia de socialización de suma relevancia.

La tarea en este ámbito consiste en generar las condiciones necesarias para que se masifiquen programas diseñados para estos fines. Lo anterior requiere un diagnóstico más acabado de estas situaciones, la evaluación de programas existentes, el desarrollo y difusión de metodologías de trabajo y el desarrollo de redes de trabajo en el ámbito local. Esta línea de acción debe ser impulsada, mediante programas en curso.

Prevenir el consumo problemático de alcohol y el consumo de drogas; existen antecedentes que permiten plantear que el consumo problemático de alcohol y el consumo de drogas son factores de riesgo tanto para el que lo realiza como para su familia, y que precipita la comisión de hechos violentos o delictivos.

CAPITULO II

ALCANCES E IMPLICANCIAS DEL DERECHO AL DESARROLLO EN LA ACTUALIDAD

2.1. ALCANCES GENERALES

Se ha mencionado que el derecho al desarrollo, es un derecho de reciente aparición. Muchos autores, posición que asumimos, consideran que éste derecho es parte de los derechos humanos de tercera generación. Por tanto, o constituye un derecho de muy reciente aparición, se calcula que data de los años setenta, de la mano del surgimiento de los derechos humanos de la tercera generación, también denominados derechos de la solidaridad¹⁶. Este derecho, junto con el derecho a la paz, el derecho al medio ambiente, el derecho a disfrutar del patrimonio común de la humanidad o el derecho a la asistencia humanitaria, cierra, por el momento, el proceso de evolución de los derechos humanos iniciado con la Revolución Francesa (Angulo Sánchez, 2005, p. 233).

¹⁶ Los llamados derechos de la solidaridad constituyen una tercera generación que se concreta en la segunda mitad del siglo xx. Se crean de este modo declaraciones sectoriales que protegen los derechos de colectivos discriminados, grupos de edad, minorías étnicas o religiosas, países del Tercer Mundo y en general todos aquellos que resultan afectados por alguna de las múltiples manifestaciones que cobra la discriminación socioeconómica, como son el respeto y la conservación de la diversidad cultural, la protección del medio ambiente y la conservación del patrimonio cultural de la humanidad. Qué son los Derechos Humanos? Comisión Nacional de Derechos Humanos. Disponible en: <http://www.cndh.org.mx/> consultado. Consulta: 27/02/2015

Los derechos humanos, sin importar a la generación que pertenezcan, siempre tienen como ingrediente esencial, que en palabras de Oszlak, es la dignidad humana, la cual se ha convertido en la piedra angular de todo el sistema jurídico de un país. En estas líneas de ideas considero que las políticas públicas empleadas por cualquier Estado, en defensa de los derechos humanos de tercera generación, en especial las que van encaminadas a la protección del desarrollo, deben tener en cuenta el respeto irrestricto a esta institución. Siendo ésta la esencia de la actividad estatal, reflejada en los resultados y expresadas en las capacidades del Estado (Oszlak, 2012)

En merito a lo antes mencionado para que no se quede en simple declaración retórica, se necesitan de instrumentos a fin de materializar el actuar del Estado y hacer frente de a las diversos problemas sociales. Motivo por el cual, aquellas características que adquieran dichos instrumentos habilitarán a las diversas instancias estatales para atender las demandas sociales; en otras palabras, los instrumentos de la política pública deben dotar al Estado de las capacidades necesarias para intervenir eficazmente en la sociedad.

Los instrumentos de política, son aquellos medios o condiciones básicas y estratégicas sin las cuales el Estado renuncia a la posibilidad de concretar los objetivos propuestos y, por lo tanto, a resolver los problemas sociales que enfrentan. Estos instrumentos deben ser diferenciados en tres grupos: un dispositivo normativo que structure y oriente sus actividades, un dispositivo de gestión que las sostenga y concrete, y un conjunto de recursos básicos que las

torne viables (Isuani, Las Capacidades Estatales, contenido en “Gestión Públicas: Balances y perspectivas”, 2012, p. 33).

Es importante tener en cuenta que más allá de la evaluación que pueda realizarse con respecto a la efectividad que demuestre los instrumentos determinados, en gran medida se encuentra condicionado por el proceso mediante el cual el mismo fue configurado. En este contraste, los instrumentos adquieren un carácter político; es decir, no surgen de la creencia de que constituyen los mejores medios para alcanzar determinados resultados, tal como podría sugerir una mirada efectivista.

JOAQUÍN TÁMARA, nos define señalando que el derecho al desarrollo: “es el derecho de toda persona a elegir libremente su sistema económico y social sin interferencias externas o constricciones de ninguna clase, y determinar con igual libertad su propio modelo de desarrollo” (TÁMARA, 2000). Es importante recordar que el concepto de desarrollo que tiene mayor aceptación en la actualidad es el elaborado por el Premio Nobel de Economía AMARTYA SEN quien considera que la superación de problemas como la pobreza, las necesidades básicas insatisfechas, las hambrunas, la privación de las libertades políticas elementales, así como de libertades básicas y el incremento de las amenazas sobre nuestro medio ambiente constituyen una parte fundamental del ejercicio del desarrollo (Amartya Sen, Desarrollo y Libertad, 2002, p. 22). Cada comunidad tiene implementado un modelo de desarrollo diferente y por esa razón es fundamental respetar la libre autodeterminación de los pueblos en cuanto a los fines que buscan para mejorar sus condiciones de vida.

La Conferencia Mundial de Derechos Humanos celebrada en Viena en junio de 1993 supone un importante y decisivo eslabón en la cadena que representa la génesis del derecho al desarrollo. Tanto en los debates preparatorios de la Conferencia como en su Documento Final, el derecho al desarrollo ocupó un lugar preeminente. Así, la Declaración de Viena, tras subrayar en su párrafo 8 que "la democracia, el desarrollo y el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales son conceptos interdependientes que se refuerzan mutuamente", dedica por entero el párrafo 10 al derecho al desarrollo. En este párrafo, del que tan solo citamos una parte, "la Conferencia Mundial de Derechos Humanos reafirma el derecho al desarrollo, según se proclama en la Declaración sobre el derecho al desarrollo, como derecho universal e inalienable y como parte integrante de los derechos humanos fundamentales"¹⁷.

2.2. ORIGEN Y EVOLUCIÓN DEL DERECHO AL DESARROLLO

De forma reiterada se ha manifestado en esta investigación, que el surgimiento, como categoría, del derecho al desarrollo se ubica en la denominada ola de derechos humanos de "tercera generación" y, concretamente dentro de los llamados derechos solidarios en la década de los años 60, como resultado del proceso de descolonización de algunos países que reclamaban para sí reparaciones de sus antiguas metrópolis.

Gómez Isa (AÑO), afirma que los autores procedentes del tercer mundo, fundamentalmente de África, fueron los que impulsaron la elaboración doctrinal del

¹⁷ Declaración y Programa de Acción de Viena, A/CONF.157/23, de 12 de julio de 1993.

derecho al desarrollo como derecho humano. Expresa, además, que fue el senegalés Keba M'Baye el primer jurista que elaboró una definición sobre el derecho al desarrollo en la conferencia que pronunció en la sesión inaugural del curso de Derechos Humanos en Estrasburgo en 1972. Muy pronto el tema del derecho al desarrollo pasó a formar parte de la agenda de las Naciones Unidas (Isa Gómez, 2007)

Sin embargo, es sólo en 1978 con la presentación del informe del Secretario General a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en donde se hace referencia a lo que se llamó derecho al desarrollo. Este informe se fundamentaba en cinco principios, a saber (Angulo Sánchez, 2005, p. 211):

1. El deber de solidaridad internacional en la promoción del desarrollo económico y social;
2. El respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales¹⁸;
3. La justicia social internacional;

¹⁸ Lo que significa que el Estado debe emprender el análisis de los diversos temas de los derechos humanos de última generación, verificando que no se violenten, de acuerdo al artículo 1° del capítulo I de los derechos humanos y sus garantías, en los Estados Unidos Mexicanos “todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta institución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece”, por lo que la tarea de proteger los derechos humanos representa para el Estado la exigencia de proveer y mantener las condiciones necesarias para que, dentro de una situación de justicia, paz y libertad, las personas puedan gozar realmente de todos sus derechos.

4. La interdependencia económica del mundo y el mantenimiento de la paz y seguridad internacional;
5. El deber moral de reparación de los países ricos a los países subdesarrollados.

Su formulación normativa se llevó a cabo por la Asamblea General de las Naciones Unidas a través de la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo en 1986. En su artículo primero consagra: “El derecho al desarrollo es un derecho humano inalienable en virtud del cual todo ser humano y todos los pueblos están facultados para participar en un desarrollo económico, social, cultural y político en el que puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales, a contribuir a ese desarrollo y a disfrutar de él” (Oficina Del Alto Comisionado para Los Derechos Humanos, 1986)

Esta resolución se constituye en el principal instrumento jurídico sobre la materia ya que confirma la existencia del derecho al desarrollo como derecho humano en toda su dimensión y precisa los principios que deberían orientar las relaciones internacionales igualdad y respeto mutuo con el propósito de obtener su plena realización. Vale la pena señalar que la resolución contó con el voto en contra de Estados Unidos y con la abstención de importantes países como Dinamarca, Alemania, Reino Unido, Finlandia, Islandia, Suecia, Japón e Israel. Los votos favorables ascendieron a 146 Estados (Kirchmeier, 2006).

Posteriormente, la Declaración de Río, conclusión de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, celebrada en 1992,

proclamó nuevamente el derecho al desarrollo, vinculándolo con la protección al medio ambiente. Efectivamente, se observa que el principio número 3º de la Declaración establece: “El derecho al desarrollo debe ejercerse de manera tal que responda equitativamente a las necesidades de desarrollo y ambientales de las generaciones presentes y futuras” (NACIONES UNIDAS, 1992) fundamentales. Como se dice en la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, la persona humana es el sujeto central del desarrollo (...).”

Una última cita internacional, la Cumbre sobre Desarrollo Social, celebrada en Copenhague del 6 al 12 de marzo de 1.995, ha señalado que para avanzar en el camino del desarrollo social se debe promover el respeto universal, la observancia y la protección de todos los derechos humanos y libertades fundamentales para todos. Se debe entender que se encuentra incorporado el derecho al desarrollo. En todo caso, interesa preguntar cuál es el nivel de avance o de desarrollo normativo jurídico internacional que se ha alcanzado en cuanto al derecho al desarrollo. Ello, por cuanto sólo la Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos 1981 y las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, han consagrado expresamente este derecho (Isa Gómez, 2007).

Encontramos, en este aspecto, tres grupos de opiniones: En primer lugar, están los autores como Ángel Chueca, citado por Gómez Isa, que afirman que, a pesar de no haberse reconocido convencionalmente su existencia de manera expresa, ella se evidencia en los diversos instrumentos internacionales de naturaleza convencional, como la Carta de Naciones Unidas y los pactos internacionales de los derechos humanos. En este sentido, aseveran, el derecho

al desarrollo se encuentra consolidado y por esta razón se está frente a un derecho formulado jurídicamente, regulado por el derecho internacional y que, por tanto, obliga no sólo a los Estados, sino también a las organizaciones internacionales y a los individuos (Isa Gómez, 2007).

En segundo lugar, se presentan las opiniones de autores que no admiten la positivización del derecho al desarrollo y, por el contrario, expresan que si se llegara a reconocer este derecho se causaría un enorme daño a los demás derechos humanos porque difuminarían sus efectos dejando de lado los derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y culturales. Entre estos últimos encontramos a Donnelly Jack, autor citado por la investigadora Laura Victoria García de la Universidad del Rosario (García Matamoros, 2007).

Finalmente, una gran mayoría de autores consideran que el derecho al desarrollo se encuentra en proceso de evolución y positivización (Ernesto, 2001, p. 86).

Estas posiciones, tan diversas, nos colocan frente a una situación y es la de conocer el verdadero alcance del derecho al desarrollo. Esto, porque la efectividad de su alcance estará determinada, en gran medida, por su fuerza vinculante. LOSAGNO, escribe que “el valor del derecho al desarrollo, a la hora de efectuar un análisis realista, queda altamente cuestionado precisamente por no considerarse una norma jurídica vinculante y porque los mecanismos jurídicos internacionales destinados a garantizarlo no permiten equipararlo en la práctica al resto de los derechos humanos” (Losagno, 2008, p. 152).

No obstante lo anterior, este autor señala que el valor normativo del derecho al desarrollo lo encontramos en su naturaleza consuetudinaria y en el conocimiento de que son los Estados quienes tienen una mayor obligación moral de cooperar en el ámbito del desarrollo generando una serie de políticas dirigidas a la consecución del mismo.

De otro lado, no se puede dejar pasar por alto que tanto el derecho al desarrollo como los demás derechos humanos se sustentan y tienen como común denominador la dignidad humana. Así las cosas, de poco sirve la proclamación, por ejemplo, del derecho a la vida, si ésta no está garantizada suficientemente, no solo en términos de seguridad personal, sino también en términos de procura existencial. Los individuos requieren para su plena realización la salvaguarda de un orden social favorable a la dignidad humana, a su seguridad y al mismo tiempo al progreso social.

Díaz Muller coincide con el profesor Gómez Isa, al considerar que el derecho al desarrollo es un derecho síntesis, esto es, un derecho que integra el conjunto de los derechos humanos (Díaz Müller, 2004). Este derecho refuerza la indivisibilidad e interdependencia de todos los derechos humanos. Agrega que este derecho surge con una vocación omnicomprensiva e integradora, pues el párrafo segundo del preámbulo de la Declaración del Derecho al Desarrollo señala que el desarrollo es un proceso global económico, social, cultural y político, que tiende a la mejora constante del bienestar de toda la población y de todos los individuos sustentados en su activa participación (Contreras Nieto, 2001, pp. 67-75).

Una lectura cuidadosa de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 nos lleva a afirmar que el derecho al desarrollo se encuentra implícito en muchos derechos consagrados en la Declaración porque de ellos se nutre. Pero también, todos esos derechos son parte integrante del derecho al desarrollo en su concepción teórica.

Los sujetos titulares del derecho al desarrollo son tanto las personas individuales como los pueblos y los Estados. Por esta razón se puede afirmar que el derecho al desarrollo incorpora un derecho individual y también un derecho colectivo (SALCEDO, 1972). La creación de condiciones nacionales e internacionales propicias para un real desarrollo es una responsabilidad de los Estados, la comunidad internacional y todos los pueblos, individuos y grupos. El profesor DÍAZ MÜLLER analizando el artículo 3º de la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo y las características de la misma señala que la titularidad de este derecho la ostentan tanto el Estado como los individuos (Díaz Müller, 2004, pp. 85-97).

2.3. EL DERECHO AL DESARROLLO COMO PARTE DE LOS DERECHOS HUMANOS DE TERCERA GENERACIÓN

Todo individuo debe estar en condiciones de poder desarrollar al máximo sus capacidades y sentirse libre y digno de sí mismo. Por esta razón, la meta final consiste en lograr el máximo bienestar humano y hacer realidad la dignidad para todos, sin discriminación, y no sólo para unos pocos privilegiados. En este sentido,

el desarrollo es un derecho humano¹⁹ que engloba el conjunto de los derechos humanos y pone de manifiesto la universalidad, interdependencia e indivisibilidad de dichos derechos. Esta interpretación está en consonancia con lo dispuesto en los preámbulos de los Pactos Internacionales de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y de los Derechos Civiles y Políticos, adoptados en el marco de las Naciones Unidas en 1966.

Asimismo, los poderes públicos y privados deben ser controlables y fiscalizables por medios democráticos y deben rendir cuentas de sus actividades de manera transparente, de modo que pueda verificarse si se han ajustado o no a la ley, facilitando así la lucha contra la corrupción y la criminalidad. También puede considerarse como objetivo del desarrollo el logro de una paz justa en la que se respeten y protejan todos los derechos humanos para todos, pues de lo contrario sería una paz aparente que oculta una situación de opresión y violencia ejercida desde los poderes dominantes. Ésta es la mejor garantía de la seguridad para todos, a la cual debe unirse un desarme progresivo que disminuya la capacidad de amenazar y destruir, y que libere recursos económicos y humanos para actividades pacíficas. Además, el desarrollo debe ser sostenible, es decir, las generaciones futuras deberían heredar y disfrutar de nuestro planeta en las

¹⁹ Entre los objetivos de un derecho al desarrollo, así concebido, figura el mejorar el bienestar, la dignidad y la calidad de vida de todos los seres humanos, así como lograr una mayor igualdad económica y social, atendiendo especialmente a las necesidades de los individuos y grupos más vulnerables, y respetando la diversidad cultural. Para ello, debe erradicarse la pobreza, en tanto que objetivo primordial, y todos los Estados deben ratificar todos los tratados relativos a los derechos humanos sin reservas.

mismas condiciones que las generaciones presentes y, si es posible, aún mejor y más equitativamente (Butler, 2009, pp. 36-44)

Las fuerzas y poderes hegemónicos presentan la actual globalización como un fenómeno irresistible, irreversible y, lo que es peor, sin posible alternativa, como si se tratara de una verdad revelada e indiscutible. Por ello, pretenden justificar en nombre de tal globalización políticas económicas denominadas de "austeridad" o de "ajuste estructural" en los países del tercer mundo, las cuales contribuyen a perpetuar un sistema de dominación económica y política mediante un intercambio económico y comercial enormemente desequilibrado, desigual e injusto. Son los denominados "programas de ajuste estructural" promovidos por las instituciones financieras internacionales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), e impulsados por los Estados de los países más ricos e industrializados y las empresas transnacionales (Vandana Shiva, 2009, pp. 47-55)

Dichos programas de ajuste estructural, rebautizados con el nombre de "estrategias de lucha contra la pobreza", confían en que el mero crecimiento económico aportará por sí solo el desarrollo. Dicho crecimiento económico, si se da tal y como lo proponen las instituciones financieras internacionales mencionadas, beneficia sobre todo a las capas más privilegiadas de la sociedad y aumenta aún más la dependencia de los países del tercer mundo, lo cual se refleja, por ejemplo, en el aumento continuo de la deuda externa de estos países. Los intereses por el pago de esta deuda constituyen la base del paradójico fenómeno consistente en que el flujo de capitales es, hoy en día, predominantemente del "sur" o "periferia", cada vez más pobre y endeudado,

hacia el "Norte" o "Centro", rico e industrializado, y no al revés, como debería suceder si se quiere invertir este proceso de pauperización global en que está degenerando la actual mundialización del mercado.

A ello se añade que la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) de los Estados de los países más ricos e industrializados hacia los países del tercer mundo no sólo no aumenta, sino que disminuye. Y, si bien en esta ayuda oficial no todo es "trigo limpio", las corrientes de capital privado no han logrado ni mucho menos suplir esta tendencia decreciente no sólo en cuanto a la cantidad, sino también en cuanto a la "calidad" de la ayuda. (Gobierno De La República, 2008) El capital privado, por su propia naturaleza, se inclina más por la mera rentabilidad económica y la obtención de beneficios a corto plazo, así como por la garantía de que estos beneficios puedan ser repatriados por las instituciones financieras y bancarias de donde procede dicho capital privado, en vez de reinvertirse en los lugares donde se han obtenido tales beneficios, y favorecer así su desarrollo. Todos estos aspectos deben ser considerados como obstáculos a la realización del derecho al desarrollo (Atkinson, 2005, pp. 125-140)

Todo esto pone de relieve que los derechos humanos y el desarrollo humano y sostenible deben realizarse en un mundo cada vez más mercantilizado, es decir, donde el comercio ocupa un lugar primordial. Comercio y desarrollo son actividades que deben compatibilizarse, pero teniendo en cuenta que el comercio es un instrumento y el desarrollo y los derechos humanos el fin, y no al revés.

Frente a lo que afirma e impone la Organización Mundial del Comercio²⁰, es el comercio el que debe subordinarse a los individuos y a los grupos humanos: los seres humanos e incluso muchos recursos naturales no son reductibles a mera mercancía vendible en el mercado mediante un precio. Además, los beneficios de la actividad comercial deberían ser equitativamente repartidos entre todos los individuos y grupos humanos, atendiendo especialmente las necesidades de los individuos y grupos más vulnerables. En definitiva, la idea que debe orientar este enfoque debe ser clara: tras la concepción de un derecho al desarrollo humano y sostenible como derecho humano figura la aspiración de que la libertad y la dignidad deben estar al alcance de todos los seres humanos y no sólo de unos pocos privilegiados (Milanovic, 2012, pp. 103-112).

Gerardo Esquivel sostiene que, México ha experimentado un crecimiento de la desigualdad extrema mientras la economía se ha estancado. El crecimiento económico es magro, los salarios promedios no crecen, la pobreza persiste pero la fortuna de unos cuantos sigue expandiéndose (Esquivel Hernández, 2015, pp. 87-89)

Nuestro país está inmerso en un ciclo vicioso de desigualdad, falta de crecimiento económico y pobreza. Siendo la decimocuarta economía del mundo, hay 53.3 millones de personas viviendo la pobreza. La desigualdad ha frenado el

²⁰ La Organización Mundial del Comercio (OMC) es la única organización internacional que se ocupa de las normas que rigen el comercio entre los países. Los pilares sobre los que descansa son los Acuerdos de la OMC, que han sido negociados y firmados por la mayoría de los países que participan en el comercio mundial y ratificados por sus respectivos Parlamentos. El objetivo es garantizar que los intercambios comerciales se realicen de la forma más fluida, previsible y libre posible.

potencial del capital físico, social y humano de México; haciendo que en un país rico sigan persistiendo millones de pobres. ¿En dónde está esa riqueza mexicana? En términos de renta y capital, se encuentra concentrada en un grupo selecto de personas que se han beneficiado del poco crecimiento económico del que ha gozado México en las últimas dos décadas. Así, mientras el PIB per cápita crece a menos del 1% anual, la fortuna de los 16 mexicanos más ricos se multiplica por cinco. Vemos con preocupación la excesiva e indebida influencia de los poderes económicos y privados en la política pública y la interferencia que esto implica para el ejercicio de los derechos ciudadanos. Las personas más afectadas por esto son las personas más pobres. La lucha que debemos emprender es por esas personas, que se han quedado excluidas, sin voz, sin capacidad de participar en las decisiones que afectan sus vidas y las de sus hijos. La desigualdad limita el desarrollo del capital físico, social y humano necesario para mejorar las condiciones de vida y el bienestar de las personas. Por lo tanto, combatir la desigualdad para reducir la pobreza es una tarea que nos implica a todos y nos beneficia a todos. Este es el primer reporte en el marco de la campaña IGUALES de Oxfam México. Sin embargo, sabemos que otras dimensiones de la desigualdad como la raza, el género, la geografía están interconectadas y difícilmente se pueden separar del todo de la economía (Angulo Sánchez, 2005).

2.4. DIFICULTADES POLÍTICAS Y JURÍDICAS DEL DERECHO AL DESARROLLO

La primera condición del estado fuerte es la fe del pueblo en la justicia". Según el más reciente Informe sobre Desarrollo Humano de las Naciones Unidas, el

número de personas malnutridas en el mundo, que era de 850 millones en 1980, asciende hoy a aproximadamente 1,000 millones. A pesar de más de treinta años de progreso tecnológico y explotación cada vez intensa de los recursos naturales, 150 millones de personas más sufren hoy de malnutrición. (Desarrollo Humano, 2016)

La pobreza endémica y las marcadas desigualdades existentes, dentro de los países, son un recordatorio constante de que, la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, los principios fundamentales de la normativa internacional sobre los derechos humanos que esa Declaración inspiró e incluso la Declaración sobre el derecho al desarrollo de 1986. Siguen siendo letra muerta para demasiadas personas, especialmente para las que pertenecen a grupos marginados. (CONEVAL, 2014)

Nacida al final de la era colonial, la Declaración sobre el derecho al desarrollo sigue siendo perfectamente válida en el mundo de hoy. El derecho al desarrollo encarna los principios de derechos humanos relativos a la igualdad, la no discriminación, la participación, la transparencia y la rendición de cuentas, así como la cooperación internacional. Esos principios, junto con los requisitos fundamentales de la declaración pueden orientar nuestras respuestas a una serie de temas y retos contemporáneos, como el cambio climático y la búsqueda de un desarrollo sostenible, la estancada Ronda de Desarrollo de Doha de negociaciones comerciales, la cooperación para el desarrollo, la Ayuda para el Comercio, la transferencia de tecnología, la inversión extranjera directa, el déficit democrático, la mala gobernanza, los Objetivos de Desarrollo del Milenio y la

necesidad de reformar las instituciones financieras internacionales. (Declaración Sobre el Derecho al Desarrollo, 2005)

El derecho al desarrollo no se realiza con beneficencia, sino con habilitación y empoderamiento. La Declaración señala los obstáculos al desarrollo, confiere poderes a las personas y los pueblos, exhorta al establecimiento a nivel nacional e internacional de un entorno propicio y una buena gobernanza y aumenta la rendición de cuentas de los responsables del ejercicio de los derechos, como los gobiernos, los donantes y los beneficiarios, las organizaciones internacionales, las empresas transnacionales y la sociedad civil (Declaración Sobre el Derecho al Desarrollo, 2005)

El derecho al desarrollo es un derecho humano inalienable en virtud del cual todo ser humano y todos los pueblos están facultados para participar en un desarrollo económico, social, cultural y político en el que puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales, a contribuir a ese desarrollo y a disfrutar de él. (Angulo Sánchez, 2005)

Por otra parte, la globalización que se está imponiendo en la actualidad se caracteriza por una visión marcadamente individualista y mercantil de la realidad humana, sin preocuparse por las enormes desigualdades económicas y sociales existentes, y lo que es peor: agravándolas y aumentándolas aún más. Las fuerzas hegemónicas en lo económico, lo político, lo social y lo cultural, y que controlan asimismo los grandes medios de comunicación, han logrado poner de moda los términos "globalización" o "mundialización" como paradigma de la sociedad del futuro. Sin embargo, el modelo que estas fuerzas están imponiendo, en realidad, se limita en gran medida a una mundialización del mercado capitalista, junto con

sus valores e intereses, en su versión más ultraliberal ("neoliberalismo" de mercado). Por este motivo, las críticas hacia este modelo se centran principalmente en la marginación de lo humano, lo social y lo cultural, frente a la preponderancia de lo económico, lo financiero y lo comercial. (CONEVAL, 2014)

En este contexto, una de las principales causas del subdesarrollo reside en un intercambio comercial desorbitadamente injusto y desequilibrado entre los países industrializados del centro y los países del tercer mundo o periferia. El hecho de que no se haya conseguido instaurar un nuevo orden económico internacional, tal y como reivindicaban los pueblos del tercer mundo recién descolonizados en los años sesenta y setenta del pasado siglo, quienes veían y siguen viendo el actual sistema comercial como una manera de perpetuar su situación de dependencia, dominación y pobreza respecto de las antiguas potencias coloniales, no significa que dicha reivindicación no siga estando justificada, sino más bien los hechos prueban todo lo contrario.

Ante este panorama, el derecho al desarrollo resulta ser un derecho de difícil aceptación y elaboración si nos ceñimos a los esquemas y conceptos tradicionales de los derechos, de marcado carácter individualista, patrimonialista y burgués²¹. Otros derechos humanos, como es el caso de buena parte de los

²¹ El derecho al desarrollo posee tanto una dimensión individual como colectiva, poniendo en entredicho la supuesta incompatibilidad entre ambas dimensiones y, en efecto, es un derecho reivindicable por parte de los individuos y de los pueblos más pobres y oprimidos frente a los más ricos e industrializados.

derechos económicos, sociales y culturales, así como de algunos derechos civiles y políticos, sufren el mismo tipo de dificultades.

En primer lugar, se debe señalar el déficit democrático en la formulación de políticas económicas a nivel local, estatal y mundial. En este grupo llama la atención los altos índices de corrupción que permean todos los niveles y ámbitos de la organización de los Estados y el deficiente grado de participación de la comunidad en los procesos de toma de decisiones, no sólo en los asuntos económicos internos que los afectan, también, en aquellos relativos a las políticas macroeconómicas de alcance mundial.

En segundo lugar, la ausencia de un sistema de gobierno unificado y una autoridad supraestatal, con fuerza ejecutiva que se encargue de aplicar o hacer aplicar las medidas necesarias para propender por el derecho al desarrollo. Lo anterior constituye una preocupación constante por parte de los distintos agentes del desarrollo, porque consideran que el esquema actual, basado en acuerdos bilaterales o multilaterales, no es suficiente puesto que no incluye la totalidad de la población mundial y carece de fuerza vinculante. La mayoría de las veces estos acuerdos quedan sesgados por los agentes con mayor poder y capacidad de presión en los procesos de negociación o por los países con mayor fuerza económica o política.

Esto no garantiza lógicamente ni el orden público internacional y mucho menos la realización efectiva del desarrollo. Constituye, sin lugar a dudas, otro obstáculo el hecho de la reducción de la autonomía de los Estados, que se ven

limitados en sus políticas nacionales por las nuevas normas comerciales a escala mundial, toda vez que éstas regulan intereses supranacionales. Finalmente, los mecanismos de solución de controversias adoptados por la Organización Mundial del Comercio (OMC), que generalmente busca que prevalezca el acceso al mercado y los intereses comerciales sobre la protección de las libertades y derechos humanos fundamentales incluidos los medioambientales constituyen claramente otra limitación al derecho al desarrollo (Gómez Isa, 1999, pp. 106-117).

2.5. LA CONSTITUCIÓN FRENTE A LA PROTECCIÓN DEL DERECHO AL DESARROLLO

Como señala Pérez Royo, “La teoría de la Constitución tiene por objeto el tipo de las Constituciones democráticas, tal como se han implantado en el mundo libre, y no sólo en el occidental; sus contenidos y procedimientos esenciales, pero no en la profundidad de sus manifestaciones particulares, y su evolución en el curso de la historia, así como en el espacio planetario, al menos desde el “annus mirabilis” de 1989. Este tipo de Constitución, se compone de elementos ideales y reales — referidos al Estado y a la sociedad— los cuales no se han alcanzado al mismo tiempo en prácticamente ningún Estado constitucional, pero que apuntan tanto a una situación óptima de lo que debe ser como a una situación posible de lo que es”. (Pérez Royo, 2000)

Así mismo siguiendo al mismo autor, menciona que esta descripción esquemática pretende poner en claro que este tipo, en sus elementos centrales, es una conquista cultural de la civilización occidental. Es resultado y aportación de

procesos culturales, del mismo modo como se transmite y es apropiado renovadamente el “patrimonio cultural” de los textos clásicos. Sin embargo, también plantea hacia el futuro la pretensión de que el nivel cultural alcanzado por el Estado constitucional ya no se pierda, sino que se conserve y que incluso se acreciente (en la medida en que los “enanos” encaramados a hombros de gigantes son capaces de ver más lejos).

Toda teoría de la Constitución debe intentar capturar algo del “espíritu de las Constituciones”; tendría que orientarse por “El espíritu de las leyes” de Montesquieu, si tal pretensión no fuera tan inmodesta. Sin embargo, algo del “espíritu de las Constituciones” resulta palpable en los textos constitucionales, sobre todo en su “evolución”, concebida contemporánea e históricamente como proceso de etapas textuales. Este “espíritu” actúa también en los con-textos culturales que debe desentrañar la ciencia cultural, para lo cual debe distinguirse entre dos planos: hay un “espíritu de las Constituciones” (del Estado constitucional) general y orientado al tipo, y existe un “espíritu”, de configuración muy individual, de los diversos “pueblos” que viven en, conforme a y “bajo” las Constituciones. Estos planos no se encuentran desvinculados entre sí; por el contrario, existen múltiples contactos e interacciones entre la nación constituida concretamente y el tipo general del “Estado constitucional”. Estos contactos e interacciones solamente pueden mostrarse en relación con problemáticas particulares y en términos por lo general muy fragmentarios. En la medida en que es universal el tipo del “Estado constitucional”, en esa misma medida es individual

su respectiva configuración nacional, al punto que no serían capaces de describirla ni un equipo enciclopédico de estudiosos ni una computadora universal.

Prescindiendo de otros elementos dignos de comentario, permítaseme avanzar al segundo de los paradigmas que deseo bosquejar para comprender el fenómeno que analizo. Me refiero a la irrupción de la dignidad de la persona y de los derechos inalienables que fluyen de ella. La densidad del cambio que involucra el nuevo paradigma puede ser sintetizada afirmando que, si por siglos se padeció la impronta del legalismo formal, en los últimos decenios se ha ido imponiendo el paradigma del Estado constitucional de derecho. Imperativo es observar que este nuevo parámetro de legitimidad no se limita a rectificar el paradigma precedente, porque humaniza la letra, hasta entonces inerte, del ordenamiento jurídico, llenándola de valores y principios de los cuales no puede prescindir el intérprete que obra de buena fe.

En nuestra época, llamada posmodernidad se ha planteado, como lugar común, la crisis del Estado, de la soberanía y de la ley con el carácter de rasgos matrices del proceso que vivimos. Éste es el momento propicio para declarar mi coincidencia con esa aseveración, adhesión que no significa, sin embargo, propugnar la supresión de tal forma política, ni de la soberanía, como tampoco de la legislación en cuanto instrumento de configuración de la convivencia legítima.

Pues bien, ¿cuáles son las características matrices del nuevo paradigma? Consciente de que estamos aún en curso de alumbramiento, sobre todo en nuestro país, que tardíamente se incorporó al proceso, pienso que entre esas

características se encuentra, en primer lugar, la revalorización de la persona humana, de su dignidad y derechos inalienables.

Agrego que de esa premisa capital fluye la nueva legitimidad que debe singularizar al derecho en la democracia, esto es, el ejercicio del gobierno con sujeción a la Constitución, cuya parte dogmática, abarcando las garantías jurisdiccionales, es anterior y superior al instrumento de gobierno.

Según Arteaga la característica del nuevo paradigma es también la supremacía, sustantiva y formal, del Código Político, secuela de lo cual es la fuerza normativa, propia y directa, de los valores, principios y normas incluidos en su texto y en el bloque de constitucionalidad. Por consiguiente, ya no se requiere la intermediación, previa ni ulterior, de la ley para que las disposiciones constitucionales pasen del libro a la vida. La Constitución, evocando a Herman Heller, vive hoy porque es vivida, en el sentido que se aplica, realmente y en los más variados asuntos de la convivencia, sometiéndose a ella los gobernantes igual que los gobernados. (Arteaga Nava, 2002)

El rasgo más notorio del Derecho Público actual no es la sustitución radical de las categorías tradicionales, sino su pérdida de la posición central, lo que es una novedad de absoluta importancia, porque comporta una consecuencia capital; al faltar un punto unificador tomado como axioma, la ciencia del derecho público no puede formular, proponer y perfeccionar sus propias categorías, pero éstas no pueden encerrar y reflejar en sí un significado concreto definible a priori, como

sucedía cuando la orientación venía desde la soberanía del estado (Hernández Valle, 1994).

Hoy en día el significado del derecho constitucional debe ser construido para poder servir como criterio de acción o de juicio para la praxis y encontrar una combinación que ya no deriva del dato indiscutible de un sector de ordenación. Las sociedades pluralistas marcadas por una diversidad de grupos sociales con intereses, ideologías y proyectos diferentes, debe ser el material en una constitución democrática y esto constituye una propuesta de soluciones y coexistencias posibles, un compromiso de las posibilidades y no un proyecto rígidamente ordenado que pueda asumirse como un a priori de la política con fuerza propia, de arriba hacia abajo, sino que se tendrá una constitución abierta que permita dentro de sus límites, tanto la espontaneidad de la vida social, como la competición para asumir la dirección política, como condiciones para la supervivencia de una sociedad pluralista y democrática.

La aspiración de las nuevas constituciones podría describirse en los muchos principios o valores que conforman la convivencia colectiva, entre otros como²²:

²² Puede decirse que en términos generales el constitucionalismo de los últimos tiempos se ha venido caracterizando por hacer un mayor reconocimiento y una mayor aceptación del orden jurídico internacional, y de la jurisdicción de organismos supranacionales. Así la era del nacionalismo a ultranza antes imperante, ha ido cediendo poco a poco para dar paso a una etapa internacionalista. En fechas recientes hemos sido testigos del surgimiento del modelo de Estado posnacional, caracterizado por el llamado “patriotismo constitucional” consistente en una identidad colectiva distinta de la nacional, con la

- La libertad de la sociedad, pero también las reformas sociales.
- La igualdad ante la ley y por lo tanto la generalidad del trato jurídico; también la igualdad y a la especialidad de las reglas jurídicas.
- El reconocimiento de los derechos de los individuos, pero también los derechos de la sociedad.
- La valoración de las capacidades materiales y espirituales de los individuos, pero también la protección de los bienes colectivos frente a la fuerza destructora de aquéllos.
- El rigor en la aplicación de la ley, pero también la piedad ante sus consecuencias más rígidas.
- La responsabilidad individual en la determinación de la propia existencia, pero también la intervención colectiva para el apoyo a los más débiles (Barroso, 2008, p. 40).

El siglo XX se ha distinguido como el siglo de un legislador motorizado en todos los sectores del ordenamiento jurídico sin exclusión de ninguno, y como consecuencia, el derecho se ha mecanizado y tecnificado y las constituciones contemporáneas intentan poner remedio a éstos efectos distintivos del orden jurídico, mediante la previsión de un derecho más alto, dotado de fuerza obligatoria, incluso para el legislador y su objetivo es contener y orientar las

constitución como referente del patriotismo y por una nueva idea de ciudadanía sin aferrarse a particularismos, con miras a constituir una “cosmocidadanía” de carácter multicultural. Un ejemplo de tal situación puede percibirse en lo que ocurre en los Estados miembros de la Unión Europea y el concepto de ciudadanía europea.

contradicciones de la producción del derecho, generadas por la heterogeneidad y ocasionalidad de las presiones sociales que se ejercen sobre el mismo.

La premisa es obtener una noción del derecho más profunda, que aquella a la que el positivismo legislativo ha reducido. Se da entonces la oportunidad de cifrar dicha novedad en un conjunto de principios y valores constitucionales superiores, sobre los que, a pesar de todo, existe un consenso social suficientemente amplio

El pluralismo no degenera en anarquía normativa siempre que, pese a la diferencia de estrategias particulares de los grupos sociales, halle una conveniencia, general sobre algunos aspectos estructurales de la convivencia política y social, que puedan así, quedar fuera de toda discusión y ser consagradas en un texto disponible para los ocasionales señores de la ley y de las fuentes concurrentes con ella.

La ley es la medida exclusiva de todas las cosas en el campo del derecho y cede así el paso a la constitución y se convierte ella misma, en objeto de mediación. Además la ley es destronada en favor de una instancia más alta y ésta asume ahora la importantísima función de mantener en unidad y en paz, a sociedades enteras divididas en su interior y concurrenciales, que era inexistente en otro tiempo, cuando la sociedad política estaba y se presuponía que era en sí misma, unida y pacífica y en la nueva situación, el principio de la

constitucionalidad, es el que debe asegurar la consecución de este objetivo de unidad²³.

La teoría de los derechos públicos subjetivos tiene un significado histórico que quedó plasmado por una parte en la Declaración de Independencia Norteamericana que fundamentó la soberanía de los derechos por encima de la constitución y la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre que postuló a los derechos como simple pretensión y su desarrollo se haría conforme a lo establecido por la ley.

Las concepciones de los derechos corresponden históricamente con las tres corrientes del pensamiento político moderno: el liberalismo, el socialismo y el Cristianismo social. Todos los derechos del hombre se sitúan en dos grandes horizontes de la vida colectiva; ambos bastantes exigentes y no fácilmente dispuestos a ceder para dejar su sitio, horizontes que han de tenerse en cuenta para comprender esas declaraciones de derechos, pues existe un sector del derecho constitucional, donde el análisis exclusiva mente juspositivista resulta estéril; ese es precisamente el de los derechos.

²³ La Constitución de los países, ha adquirido una vital importancia, no solo por ser la base en la cual se erigen los Estados o porque sea la norma suprema en base a la cual se edifica todo un sistema jurídico, sino porque a través de los diversos cambios que se ha tenido en la humanidad, cada vez ha ido acogiendo a mayores y mayores derechos que amparan y protejan a las personas, en ese sentido, es que con la presente monografías, trataremos de rescatar la importancia de la Constitución como norma de mayor jerarquía, así como la verdadera y real importancia de que su aplicación sea con el verdadero espíritu de la Constitución.

Han predominado en la determinación de los derechos, dos grandes corrientes del pensamiento político el humanismo laico que preconiza los derechos en base a la-autoridad del estado y la subordinación de los mismos a la-ley; y el humanismo cristiano que vincula la existencia de los derechos como esencia natural del hombre, antes de la existencia del estado y como consecuencia de la ley.

Debe tomarse en cuenta también las aportaciones del manifiesto del partido comunista en el cual, el derecho y los derechos no podrán ser otra cosa que elementos-secundarios de la lucha de clases y en ese aspecto el derecho constitucional tiene una concepción fiduciaria.

Las tres corrientes del pensamiento político ponen a los derechos en relación con dos valores que aparecen inevitablemente vinculados a ellas, pero cuya coexistencia está lejos de ser pacífica: la libertad y la justicia. Ambas concepciones pueden hablar en nombre de la dignidad del hombre, pero mientras para la primera la naturaleza digna consiste en la libertad, para la segunda consiste en la justicia.

Los derechos orientados a la libertad tienen límites específicos que se determinan por la libertad de los demás, lo que se sostiene tanto en la Declaración Norteamericana de 1777 como en la Declaración Francesa de 1789, estableciendo que la ley no tiene atribuida otra competencia más que la de establecer los confines entre los distintos grupos de derechos de cada sujeto político (Hernández Valle, 1994).

Los derechos a la justicia no son definidos con precisión y contrariamente a lo que se piensa, son los más desarrollados en la actualidad ya que se enderezan a un orden positivo verdadero y justo, como la defensa de la naturaleza frente al consumo incontrolado de sus recursos o la defensa de la vida en su estado natural frente a las manipulaciones de la ingeniería genética.

El discurso debe centrarse directamente sobre la justicia, es decir, sobre los principios que determina el orden objetivo, para concebir que en las constituciones se fundamenten nuevas aspiraciones para definir otros parámetros de justicia en las relaciones humanas, como por ejemplo el derecho a la paz, el derecho al desarrollo, el derecho al medio ambiente, los que no están definidos con precisión y si a ello se agrega la carente efectividad de los tribunales de justicia ante el reconocimiento de posibles derechos de ese tipo, se deriva una falta de planificación pública en sectores estratégicos para la vida y los intereses colectivos, como la política energética, la adopción de medidas para la determinación de residuos u otras similares.

Si se destaca como primer rasgo característico del constitucionalismo de nuestro tiempo a las declaraciones de los derechos, además fija a las normas constitucionales, principios de justicia material destinados a informar todo el ordenamiento jurídico y esto daría una nueva concepción del estado de derecho.

Los principios de justicia material están previstos en la constitución como objetivos que los poderes públicos deben perseguir, no como un cuadro estático con vista al pasado, sino dinámico y abierto al futuro. El estado no está llamado

solo a impedir, sino también a promover, empeñando positivamente para este fin sus propias fuerzas y la de los sujetos privados.

Los principios de justicia material son un conjunto de condiciones en las que necesariamente deben moverse las actividades públicas y privadas para la salvaguardia de intereses materiales no disponibles. Es un orden objetivo previsto para limitar la inestabilidad de las voluntades.

Esta nueva concepción de la justicia material reenvía al sujeto humano, a sus condiciones espirituales y materiales, lo que encuentra dos grupos: Uno: La valoración de la legitimidad del estado, que se traduce en una acción propiamente política dirigida al cumplimiento de una obligación jurídica. El otro: Determina la imposibilidad de reducir el orden justo a los derechos, pues el postulado de la justicia pertenece a un "etnos" dominado por deberes, no por los derechos individuales, por lo que no puede pretenderse a la justicia y pensar en construirla solo sobre los derechos rechazando los deberes, ya que quienes han pensado en la constitución como ordenamiento de la justicia y no como ordenamiento de la libertad, no han invocado una decía ración de derechos, sino una declaración de deberes constitucionales .

La aspiración constitucional a un orden justo hace que la dominación del deber, de ser simple reflejo o la otra cara de los derechos, pase a convertirse en un elemento autónomo propiamente constitucional y de esa manera la vida colectiva desde el punto de vista del derecho constitucional actual, no es solo el conjunto de los derechos individuales y de los actos que constituyen su ejercicio,

sino que es también un orden objetivo que corresponde a ideas objetivas de justicia, que imponen deberes, lo que lleva a una reducción de la justicia a la ley (RAWLS, 2000, pág. 106).

Cuando todos los componentes de la sociedad puedan participar en la elaboración de la constitución, se reduce la posibilidad de que el fundamento de la justicia del orden jurídico, sea una cuestión prejurídica, carente de relevancia propia desde el punto vista interno del derecho vigente.

La separación de los derechos y la separación de la justicia es de gran relevancia para hacer una distinción estructural de las normas jurídicas entendidas como algo que debe ser o producirse, algo que el hombre debe comportarse de determinada manera y debe hacerse una diferenciación del concepto de regla y el de principio, para hacer una distinción entre la regla como norma, y la norma como principio.

Las normas legislativas son prevalentemente reglas, mientras que las normas constitucionales sobre derechos y sobre la justicia son prevalentemente principios, por ello distinguir los principios de las reglas, implica distinguir la constitución de la ley.

La distinción se presenta como sigue: Las reglas nos proporcionan el criterio de nuestras acciones, nos dicen cómo debemos, no debemos, podemos actuar en determinada situación específica prevista por la regla.

Los principios nos proporcionan criterios para tomar posición ante situaciones concretas pero que aparecen indeterminadas; generan actitudes

favorables o contrarias de adhesión y apoyo, o de disenso y repulsa, hacia todo lo que puede estar implicado en su salvaguarda en cada caso concreto.

Por lo anterior considero que el actual proceso de constitucionalización del derecho hunde sus raíces más profundas en la propia etapa de formación del Estado de derecho, basado en el principio de legalidad y del rol jerárquico de la ley en el ordenamiento jurídico.

En ese momento en el desarrollo y configuración del Estado de derecho, la Constitución no era entendida sino como una mera norma política carente de contenido jurídico vinculante y compuesta únicamente por una serie de disposiciones regulatorias de la labor de los poderes públicos. Desde entonces, el concepto de Constitución ha transitado hasta un momento en el que ya no cabe duda de que la Constitución es la norma jurídica suprema del ordenamiento normativo nacional.

Esta transición solo ha sido posible a partir de dos procesos sucesivos. El primero de ellos tiene lugar cuando los derechos públicos subjetivos del Estado liberal se transforman en derechos fundamentales e incorporan valores, principios constitucionales y derechos socioeconómicos en el Estado social de derecho, a partir de la segunda posguerra. Este hecho obligó sobre todo a los jueces y tribunales a la aplicación directa de la Constitución ya no solo dentro de lo jurídicamente debido, sino también dentro de lo constitucionalmente posible.

CAPITULO III

SALUD, POBREZA Y EDUCACIÓN; FACTORES DE PRIMORDIAL IMPORTANCIA EN EL DESARROLLO HUMANO

3.1. DIGNIDAD HUMANA; PIEDRA ANGULAR DEL DERECHO AL DESARROLLO

El artículo 25 de la constitución, ha establecido, que “Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución²⁴ (El subrayado es nuestro). Para el profesor, Fernández Sessarego, haciendo una interpretación a este artículo, establece que la dignidad humana, es el eje sobre el cual gira la interpretación de las normas de este cuerpo legal, así como de todas aquellas otras que integran el ordenamiento jurídico de país (Fernández Sessarego, 2007, p. 7). La defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad constituyen la razón de ser del Derecho. En realidad, con más precisión, cabe expresar que la persona humana, considerada en sí misma, es el fin supremo de la sociedad y del Estado, de donde se deriva la obligación de la sociedad y del Estado de defenderla y respetarla.

²⁴ Continúa el Artículo antes citado “La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo”.

El concepto de derechos fundamentales comprende: “tanto los presupuestos éticos como los componentes jurídicos, significando la relevancia moral de una idea que compromete la dignidad humana y sus objetivos de autonomía moral, y también la relevancia jurídica que convierte a los derechos en norma básica material del Ordenamiento, y es instrumento necesario para que el individuo desarrolle en la sociedad todas sus potencialidades. Los derechos fundamentales expresan tanto una moralidad básica como una juridicidad básica (Chanamé Orbe, 2011, p. 137).

Consecuentemente, si bien el reconocimiento positivo de los derechos fundamentales es presupuesto de su exigibilidad como límite al accionar del Estado y de los propios particulares, también lo es su connotación ética y axiológica, en tanto manifiestas concreciones positivas del principio-derecho de dignidad humana, preexistente al orden estatal y proyectado en él como fin

En ese sentido, la persona humana y su dignidad son lo más importante y que debe ser protegido no sólo por la sociedad en su conjunto, sino que el Estado debe promover su protección en todos los ámbitos. De lo antes señalado, se observa que dicha protección abarca distintos aspectos, morales, axiológicos, físicos, psíquicos, etc. (Garzón Valdés, ¿Cuál es la relevancia moral del concepto de dignidad humana? , 2006, pp. 36-45). Para de esa manera, y teniendo como primicia a la persona humana, se logre un desarrollo humano equitativo y sin distinción.

3.2. LA SALUD COMO DERECHO EN LA CONSTITUCIÓN MEXICANA

La Constitución Política de los Estados Mexicanos, en su artículo 4 primer inciso, ha establecido que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución²⁵.

Tal como observamos nuestro ordenamiento jurídico ha regulado a la salud como un derecho constitucional, y también se expresa en los citados artículo que el Estado es quien determina la política de salud y el encargado de garantizar su libre acceso en las instituciones dedicadas para tal fin.

Empero, dentro del articulado de nuestra Constitución también existen otros artículos que si bien regulan otros derechos, éstos guardan una relación estrecha con el derecho a la salud, tal es el caso, del derecho a la *vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar*. Es por ello, que incluso la Organización Mundial de la Salud (en adelante, OMS) entiende que el contenido de bienestar aparece también en la definición de salud, en al definir los alcances de dicho concepto precisó que comprendía, además de la salud entendida en su sentido tradicional de carencia de enfermedad, otras varias aspiraciones de la persona que conforme al contenido del amplio concepto de bienestar. Un sector de la doctrina considera la noción de bienestar como equivalente a la de salud integral. (Organización Mundial de la Salud, 2010)

²⁵ Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Como vimos, la Constitución Política, defiende la dignidad humana como eje central de las políticas públicas y del derecho, por ello, el Estado está obligado a protegerla. El cumplimiento de este valor supremo supone la vigencia irrestricta del derecho a la vida, pues este derecho constituye su proyección; resulta el de mayor connotación y se erige en el presupuesto ontológico para el goce de los demás derechos, ya que el ejercicio de cualquier derecho, prerrogativa, facultad o poder no tiene sentido o deviene inútil ante la inexistencia de vida física de un titular al cual puedan serle reconocidos.

Siendo así, corresponde dilucidar algunas definiciones a este derecho, y, según la OMS define a al Derecho a la Salud como: *“como un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”*. (Organización Mundial de la Salud, 2010)

El Tribunal Constitucional Colombiano, en jurisprudencia sobre este tema, estableció: ha señalado que el derecho a la salud *“comprende la facultad que tiene todo ser humano de mantener la normalidad orgánica funcional, tanto física como mental, y de restablecerse cuando se presente una perturbación en la estabilidad orgánica y funcional de su ser, lo que implica, por tanto, una acción de conservación y otra de restablecimiento...”*²⁶. Continúa el Tribunal señalando que *“La salud puede ser entendida como el funcionamiento armónico del organismo, tanto en el aspecto físico como psicológico del ser humano. Es evidente que, como tal, constituye una condición indispensable para el desarrollo y un medio fundamental para alcanzar el bienestar individual y colectivo.”*.

²⁶ EXP. N.º 2016-2004-AA/TC, Colombia.

Es por ello, que la OMS sostiene que el derecho a la salud significa que los gobiernos deben crear las condiciones que permitan a todas las personas vivir lo más saludablemente posible. Esas condiciones incluyen las disponibilidades garantizadas de servicios de salud, condiciones de trabajo saludables y seguras, vivienda adecuada y alimentos nutritivos. El derecho a la salud no sólo debe entenderse como el derecho a estar sano. Sino como una de los factores principales para que la persona humana obtenga un nivel de vida aceptable, esencia del desarrollo humano (OMS, 2014).

3.3. IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN EN EL SISTEMA DE SALUD MEXICANO ORIENTADO HACIA EL DERECHO AL DESARROLLO

Nuestra cultura se caracteriza por un rechazo a lo diferente y por una negación sistemática de derechos a quienes no se sujetan a los valores y pautas de comportamiento de la mayoría, abrigando fuertes componentes de misoginia, racismo, xenofobia y homofobia, que parecen normales y hasta naturales, pues tienen el peso de la costumbre al ser transmitidos y afianzados por la familia, la escuela, las asociaciones y comunidades, las normas legales, los medios de comunicación y hasta por las políticas públicas, dicho de otra manera, lo que como sociedad creemos que debe ser está ampliamente influenciado por esquemas culturales que nos han formado como sujetos morales y sociales.

Debido a esto, hasta hace poco tiempo los derechos a la igualdad²⁷ y a la no discriminación²⁸ ni siquiera estaban en la agenda nacional ni aparecían como

²⁷ La igualdad, según la teoría de los derechos humanos, exige tratamiento no discriminatorio, es decir, exige un tratamiento que redunde en el goce pleno de los

un problema a resolver por parte de los grupos políticos y sociales. La exclusión y discriminación sistemática de grupos sociales completos que constituyen la mayoría de nuestra población (mujeres, indígenas, afro descendientes, personas con discapacidad, minorías sexuales, minorías religiosas, personas adultas mayores, niñas, niños, jóvenes, pobres e inmigrantes) eran hasta hace poco tiempo invisibles, y por ello parecían no existir. Incluso hoy día pareciera que los derechos a la igualdad y a la no discriminación es un asunto que sólo interesa a los intelectuales o a los grupos civiles militantes, sin darnos cuenta que la desigualdad y la discriminación son problemas fundamentales que inciden en el desarrollo económico, político y social de nuestro país. (Álvarez del Castillo, 1982)

derechos humanos por ambos géneros, de todas las edades, origen étnico, nacionalidad, etc. Para poder cumplir con ello, el principio de igualdad requiere que a veces se les dé un tratamiento idéntico a hombres y mujeres, y a veces un tratamiento distinto.

²⁸ El artículo 1 de la Convención Interamericana contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia, proporciona una definición del referido concepto, al preverlo de la siguiente forma: Discriminación es cualquier distinción, exclusión, restricción o preferencia, en cualquier ámbito público o privado, que tenga el objetivo o el efecto de anular o limitar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de uno o más derechos humanos o libertades fundamentales consagrados en los instrumentos internacionales aplicables a los Estados Partes. La discriminación puede estar basada en motivos de nacionalidad, edad, sexo, orientación sexual, identidad y expresión de género, idioma, religión, identidad cultural, opiniones políticas o de cualquier otra naturaleza, origen social, posición socioeconómica, nivel de educación, condición migratoria, de refugiado, repatriado, apátrida o desplazado interno, discapacidad, característica genética, condición de salud mental o física, incluyendo infectocontagiosa, psíquica incapacitante o cualquier otra.

La lucha contra la falta de igualdad y la no discriminación no sólo se expresa en las estructuras, las instituciones y las normas formales, sino que también supone un cambio cultural y educativo que debe desplegarse en las familias, las escuelas, las instituciones públicas y privadas y en el resto de los contextos en que se forman las opiniones y valores de los ciudadanos, capaz de transformar los referentes, las costumbres, las tradiciones y las pautas culturales cotidianas que provocan, en su conjunto, la permanencia de la marginación y la discriminación (Ramírez López, 2003).

Existen diferentes formas de discriminación que se presentan en la sociedad, puede ser a los vecinos, compañeros de trabajo o escuela, maestros, incluso dentro de las familias. Pero también se da en ámbitos más amplios, en las instituciones privadas como son colegios, hospitales, aseguradoras, empresas, instituciones públicas, gobiernos federales y estatales, etc. Todos estos ámbitos al formar parte del Estado mexicano, están obligados a respetar y garantizar el principio de igualdad y la no discriminación y, en caso de incumplimiento, pueden ser sujetos de demandas nacionales e incluso internacionales.

Nuestra actualidad está marcada por la constante presencia de los derechos humanos, todos los días podemos encontrar referencias a éstos en noticieros, discursos políticos, programas y políticas públicas. Pero comprender qué son y cuáles son sus implicaciones para la vida en sociedad, no es sencillo.

Los derechos humanos se asientan sobre el principio de igualdad y no discriminación, que se conforma por dos conceptos complementarios, uno positivo

y otro negativo. La igualdad, que enfatiza la forma en la que las personas deben acceder al goce y ejercicio de derechos. La no discriminación, que acentúa la necesidad de proteger a las personas de distinciones arbitrarias. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que hay un vínculo indisoluble entre el respeto de los derechos humanos y el principio de igualdad y no discriminación, esto se debe a que no es posible suponer que en una sociedad se respetan y protegen los derechos humanos, si solamente sucede en el caso de algunos grupos privilegiados y no en el caso de personas sujetas a tratos diferenciados injustificados basados en sus características identitarias. Esto implicaría que realmente no se respetan y protegen los derechos humanos (García Ricci & Sepúlveda Iguíniz, 2012).

A pesar de que entre los diferentes derechos humanos no existe una relación jerárquica sino de integralidad, el derecho a la igualdad y a la no discriminación es un derecho que se coloca como principio fundamental de todos los derechos humanos, pues garantiza que se acceda a éstos sin distinciones o restricciones injustificadas. El principio de igualdad y no discriminación es aplicable a todos los estados, independientemente de que se hayan suscrito o no a cierto tratado, pues forman parte del derecho internacional general. Además, tiene un carácter imperativo que implica obligaciones para todos ellos. Dicho en palabras más simples, la igualdad y la no discriminación son condiciones tan básicas e indispensables que no se requiere adherencia a ningún instrumento internacional para estar obligado a tomar medidas concretas para evitar la discriminación que evidentemente afecta a la igualdad.

Guillermo Soberón Acevedo dice: La salud es un ámbito predilecto de la sociedad igualitaria. Poca importancia tiene la disminución de otras desigualdades sociales, si no se manifiesta en una vida sana y de mejor calidad (Soberón Acevedo, 1987).

La necesidad de que exista una intervención estatal en el ámbito de la salubridad no es otro que el de superar la desigualdad existente entre los miembros de una sociedad y que impide a muchos un tratamiento médico adecuado, entre otros aspectos que este derecho contiene.

El principio de igualdad entre los hombres, entendido como tratamiento en función a las capacidades de cada individuo, se concretiza en el derecho a la protección de la salud, al garantizar el Estado la superación de las necesidades de cada persona mediante el mantenimiento y funcionamiento de los servicios necesarios para la atención de la salud.

3.4. ACCESIBILIDAD EN EL DERECHO A LA SALUD

Hablemos ahora de la accesibilidad; según la OMS este término en relación con el derecho a la salud se refiere a que, los establecimientos, bienes y servicios de salud deben ser accesibles para todos. En esta sección se ubican los indicadores relacionados con las posibilidades que tienen los diversos sectores de la población para acceder a la atención médica de primer, segundo o tercer nivel²⁹.

²⁹ CONSTITUCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. La Constitución fue adoptada por la Conferencia Sanitaria Internacional, celebrada en Nueva York del 19

El acceso a los servicios de salud es un elemento primordial del nivel de vida que brinda las bases necesarias para el mantenimiento de la existencia humana y su adecuado funcionamiento físico y mental. Cuando las personas carecen de un acceso a los servicios de salud oportuno y efectivo, el costo de la atención de una enfermedad o accidente puede vulnerar el patrimonio familiar o, incluso, su integridad física, puntos esenciales del derecho al desarrollo.

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el derecho a la salud se ubica dentro de los derechos humanos y sus garantías y establece, en su artículo 4º, párrafo tercero, vigente desde el 3 de febrero de 1983, lo siguiente:

“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.”³⁰

El artículo 12 del Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece la obligación de los Estados Parte de reconocer el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud³¹. Si bien la Convención Americana sobre Derechos Humanos no hace referencia directa al

de junio al 22 de julio de 1946, firmada el 22 de julio de 1946 por los representantes de 61 Estados y entró en vigor el 7 de abril de 1948.

³⁰ Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

³¹ Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales

derecho a la salud, el artículo 26³² contempla que el compromiso de los Estados Parte para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos derivados de la Carta de la Organización de Estados Americanos. El artículo 34 de este instrumento internacional también recoge el compromiso que adquieren los Estados de dedicar sus esfuerzos para alcanzar varias metas, entre las que destacan la defensa del potencial humano mediante la extensión y aplicación de los modernos conocimientos de la ciencia médica³³.

En este orden de ideas, el Comité Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha puesto de manifiesto que la salud es un derecho indispensable para el ejercicio de los demás derechos fundamentales y que todo ser humano debe poder disfrutar del más alto nivel de salud que le permita vivir dignamente.

Con base en lo anterior, es claro que el derecho a la salud es un derecho fundamental reconocido tanto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como por los diversos Tratados Internacionales arriba mencionados, el cual no sólo involucra a la salud física sino a la salud mental, comprendiendo diversas etapas desde la prevención de enfermedades hasta el tratamiento o curación de afectaciones.

³² Convención Americana sobre Derechos Humanos, Capítulo III, Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Artículo 26. Desarrollo Progresivo

³³ Organización de Estados Americanos. artículo 34, apartado; i)

El derecho a la salud es concebido como un derecho humano de segunda generación, de los nombrados derechos humanos sociales que, a diferencia de los civiles, guarda una estrecha vinculación con la política económica financiera del Estado, ya que depende de las erogaciones públicas de éste para asegurar su efectividad.

3.5. DERECHO A LA SALUD EN MÉXICO

Garantizar el Derecho a la Salud en México es un gran reto por resolver. Si bien, la salud de la población depende de muchos factores (económicos, políticos, sociales, científicos, tecnológicos y culturales) que requieren de coordinación, inversión económica, leyes, acciones y políticas para perfilar la salud de la población de manera estable, progresiva y duradera. También requiere de decisión política, es decir, que los encargados de decidir las políticas nacionales, estén convencidos que la salud de la población, es un factor indispensable para el desarrollo de la nación y que, lejos de ser un gasto público es una inversión.

Un primer elemento que sirve como parámetro inicial para percibir la situación del Derecho a la Salud y que, en cierto sentido, refleja el nivel de prioridad que ocupa el tema en la agenda política mexicana, es el porcentaje del PIB que se destina a este rubro. En México, sólo se invierte el 2.8%, lo cual es menor que el que destinan diversos países latinoamericanos de desarrollo económico semejante o menor que México (Costa Rica 4.9%, Argentina 5.1%, Cuba 6.2%, Panamá 4.8%, Brasil 3.2%). Este pequeño porcentaje, es insuficiente para cubrir y enfrentar las diversas necesidades de salud de la población.

Además, los habitantes de México no se encuentran en condiciones económicas para resolver sus propios problemas de salud, ya que si tomamos en cuenta que cerca del 65% de la población percibe entre 2 y 4 salarios mínimos (en promedio \$3,128 al mes, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2008) nos es evidente que la mayoría de la población tiene grandes rezagos en sus necesidades básicas, lo cual afecta de manera directa a la condición de su salud. Por otro lado, un factor que dificulta la implementación de soluciones a los problemas de salud, es la fuerte desigualdad económica que existe en nuestro país, factor que tiene una fuerte relación con los tipos de enfermedades que cada grupo social de la población enfrenta.

Otros retos importantes que se desprenden, en gran medida, de las presiones sociales a las que se enfrenta la población mexicana son las adicciones, el maltrato, los accidentes, las muertes violentas, los suicidios y los problemas de salud mental. Estos problemas si bien, no son nuevos, están cobrando mayor relevancia por los años de vida saludable que restan a los afectados, los altos gastos de rehabilitación que ocasionan y el grado de afectación que traen a la sociedad en general. La contaminación del medio ambiente, es otro tema que no debe ser descartado como un gran desafío en materia de salud. (Secretaría de Salud, 2003)

Ante este panorama de la situación de la salud en México, podemos considerar a la salud como un derecho humano, se puede decir que aunque el Estado Mexicano contempla en su constitución a la salud como un derecho social, en la práctica, este derecho no se ve reflejado ni en la existencia de mecanismos

para hacerlos exigibles, ni en una situación social que permita avalar que el Derecho a la Salud es una realidad (Gérvás, 2004, p. 132). Por lo que se considera que, en la teoría, el Estado mexicano parte de una concepción igualitaria, aunque en la práctica, podría ser una concepción desigual, factor que ataca al derecho al desarrollo, debido a que no hay igualdad en el acceso a la salud, por tanto no hay un derecho al desarrollo equitativo y justo.

3.6. LA ECONOMÍA COMO PIEDRA ANGULAR Y GARANTE DEL DERECHO AL DESARROLLO

En primer lugar se señala la escasez de los recursos como excusa para llevar a cabo el desarrollo. Debido a la alta incidencia del derecho al desarrollo en las actividades y relaciones económicas, sucede, con bastante frecuencia, que los derechos económicos, sociales y culturales se configuran y positivizan a través de normas o planes y programas que pretenden dar efectividad a una política determinada.

Sin embargo, ocurre que los gobiernos terminan supeditando la realización de esos planes y programas a la disponibilidad de los recursos económicos, que por su definición son escasos. Este argumento es muy utilizado cuando se trata de justificar políticas económicas contrarias o poco interesadas en dar cumplimiento a las demandas de los derechos humanos.

Es importante la anotación del profesor del Programa de Derechos Fundamentales, (Angulo Sánchez, 2005) en el Simposio sobre “Desarrollo

Humano y Derechos Humanos”, donde se discutió la necesidad de conceder mayor prioridad a determinados derechos humanos sobre otros. Consideraba el profesor que desde el punto de vista jurídico y moral todos los derechos humanos son inalienables y de igual categoría, y que por esta razón no es posible establecer prioridades o jerarquías entre ellos. Explica que estas últimas se deben llevar a cabo debido a la escasez de los recursos puestos a disposición del logro de la efectividad del desarrollo y de los derechos humanos (Angulo Sánchez, 2005, p. 32).

Por otra parte, se encuentra el comercio injusto y la mundialización de la economía de mercado. Existe actualmente una contradicción entre el propósito de obtener mercados globales y abiertos a la competitividad y el propósito de lograr la plena efectividad de los derechos humanos (Martínez de Bringas, 2001, p. 55). El primero se centra exclusivamente en la maximización de la productividad, la eficiencia y los beneficios a cualquier costo. Por el contrario, una política fundamentada en la plena efectividad de los derechos humanos debe centrarse en fortalecer las capacidades de los individuos y en aumentar el número de oportunidades a las que puede optar, lo cual requiere como prerrequisito la satisfacción de las necesidades básicas.

Abellán 2000, citada por el profesor Angulo Sánchez (2005), dice que existe para estos casos una transferencia inversa de conocimiento, esto es, el éxodo de intelectuales y científicos desde los países en desarrollo a los países industrializados (Angulo Sánchez, 2005, p. 67).

Siguiendo al mismo autor también advierte que los países industrializados no orientan la producción de bienes de consumo masivo con la finalidad de satisfacer necesidades de la mayoría de la población sino, por el contrario, al establecimiento de industria extractivas de materias primas o productoras de bienes manufacturados destinados a una minoría privilegiada del respectivo país (Angulo Sánchez, 2005, pp. 107-109).

Así mismo, también debe mencionarse como otra dificultad para la efectividad del derecho al desarrollo el hecho de que a la hora de hablar de liberalizar plenamente los mercados, se observa que los países en vía de desarrollo son los más expuestos al libre mercado y a la competitividad más agresiva, cuando debieran ser estos países los que recibieran ciertas ventajas y favorabilidades de los países industrializados por hallarse en condiciones de inferioridad frente a las poderosas multinacionales.

Otro aspecto a considerar es la deuda externa que generalmente los países han contraído por los créditos recibidos desde los países desarrollados para financiar proyectos de desarrollo en forma de inversión. La dinámica de este proceso se ha ido agravando por el deterioro de los términos de intercambio comercial y la caída y persistencia de los precios bajos de los productos exportados por estos países. También se manifiesta la desigualdad a través de las múltiples barreras proteccionistas frente a los productos procedentes de los países en desarrollo existentes en los países más desarrollados.

Por último, los países en desarrollo han exigido a los países en desarrollo programas de ajuste estructural, que surgieron a partir de la década de los 80, a través de los organismos de cooperación internacional (Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, etc.) como condición para recibir los créditos. Estos ajustes han tenido unos efectos muy negativos en el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales por parte de la población más vulnerable de los países porque se exige precisamente una reducción en el gasto público, lo cual incide negativamente en los procesos de democratización de esos países (Nieves, 1999, p. 45). Y en efecto, influye negativamente con la desigualdad económica, en ocasiones extrema lo cual afecta directamente el desarrollo humano, ya que como se explicaba en párrafos anteriores, la salud y ahora profundizando en el tema de la economía, amplían el panorama para exteriorizar la esencialidad de ambos aspectos fundamentales para alcanzar un nivel de vida aceptable.

3.6.1. LA IMPLICANCIA DE LA ESCASES DE RECURSOS ECONÓMICOS EN EL DERECHO AL DESARROLLO

No hay una característica más evidente del subdesarrollo que la pobreza, pues es el resultado de una desigualdad tras otra, además de bajo consumo e ingreso inadecuado, la pobreza trae consigo analfabetismo, desnutrición y mala salud, destruyendo la confianza en sí mismos y acabando con sus esperanzas para el futuro. (Spaemann R. , 1988, p. 67)

Para Amartya Sen existen necesidades básicas que el hombre debe cubrir, como nutrirse, escapar de enfermedades curables, protegerse del medio ambiente; si alguna de ellas no está cubierta, el individuo sufre de pobreza absoluta (Amartya Sen, 2010, p. 136)

La pobreza implica componentes que dependen de cuestiones geográficas, culturales, y de otra índole. Es por ello que el problema de la pobreza es complejo debido a que si realmente se desea conocer cuáles son los elementos de la pobreza, se necesita saber no sólo el poco dinero que poseen las personas que se definen como pobres, sino también si son capaces de realizar sus vidas con plenitud. A este respecto, Sen (1999) enfatiza la importancia de las capacidades que tiene un individuo para determinar su propia vida, y el control de sus ingresos es solo un aspecto. (Amartya Sen, El desarrollo humano, 2010)

En la actualidad, la mayoría de los economistas consideran el PIB per cápita como una medida incompleta para medir el bienestar de la población, sin embargo, es ampliamente usado para realizar políticas públicas. La importancia de medir la pobreza en una sociedad se fundamenta en la necesidad de dar soluciones a las carencias que están enfrentando los que la sufren. Al encontrar la forma de medir la pobreza es posible dar estas soluciones pues se contará con la información de cuántos pobres hay y en dónde se encuentran, para después comprender por qué son pobres. (Aspe, 2009, p. 87)

Para obtener una medición adecuada de pobreza, es necesario determinar las dimensiones que la afectan, por ello es necesario conocer sobre las personas

denominadas como pobres: la salud y los servicios médicos a los que pudieran tener acceso y cómo tienen acceso a ellos; conocer su educación, la disponibilidad y la calidad de esta, debido a que cursar educación básica en regiones marginadas en los estados más pobres del país no implica el mismo aprovechamiento y calidad que en una zona urbana con todos los servicios necesarios, aun así no hay garantía que la segunda sea de mejor calidad. También es necesario conocer acerca de si su trabajo es satisfactorio o monótono, si los trabajadores disfrutan de alguna medida de dignidad y control y si las relaciones entre los patrones y la mano de obra es humana o denigrante; comenzando porque cuando hay problemas macroeconómicos los primeros en ser despedidos son aquellos trabajadores con pocas habilidades (no calificados) ensanchando la pobreza social. Para Lefranc Weegan, los riesgos de mercado de trabajo para la gente pobre incluye el desempleo común, caída de los salarios y la necesidad de aceptar trabajos precarios y de baja calidad en el sector informal, además de tener que elegir trabajos que ponen en riesgo su integridad física. (Lefranc Weegan, 2011, p. 50)

Es necesario saber qué privilegios legales y políticos disfrutan los ciudadanos, qué libertades tienen para conducir sus relaciones sociales y personales, debido a que generalmente son personas marginadas que aunque la ley les otorgue derechos, estos no se respetan, tales pueden ser atención médica, derecho al voto, etc. Otro elemento importante es saber cómo están estructuradas sus relaciones familiares y las relaciones entre los géneros, y la forma en que estas estructuras promueven o dificultan otros aspectos de la actividad humana.

Dentro de las familias existe desigualdad, incluso entre la pobreza. Los adultos mayores por un lado presentan el riesgo de no tener una dieta adecuada, sufrir enfermedades, abandono social, incapacidad para trabajar e incertidumbre sobre si las transferencias por pensiones les proporcionarán una vida adecuada. Por otro lado existe desigualdad hacia el sexo femenino, especialmente en los países en desarrollo, pues por un lado, la remuneración es menor que al realizar las actividades una persona del sexo opuesto y por otro lado en los hogares, pues la mujer, debe permanecer en el hogar realizando labores domésticas sin recibir salario alguno o debe realizar actividades laborales además de las que lleva a cabo en el hogar y repartir su salario.

Para Sen, lo más importante es “saber la forma en que la sociedad permite a las personas imaginar, maravillarse, sentir emociones como la gratitud, que presuponen que la vida es más que un conjunto de relaciones comerciales y que el ser humano es un ser insondable que no puede expresarse completamente en forma tabular”.³⁴

Estos elementos dan pie a considerar pesos diferentes a las dimensiones elegidas para elaborar el índice de pobreza y realiza el análisis que permita desarrollar propuestas de política pública, pues, es indispensable eliminar la

³⁴ El análisis de Sen sobre el problema de la igualdad es una preocupación constante a lo largo de su obra, pues ya en 1973 había realizado un estudio sobre la desigualdad económica. Prueba de ello es su libro *On Economic Inequality*, reeditado en 1997 con una ampliación junto a James Foster. Incluso una de las obras de mayor relevancia escritas en el seno de la filosofía política sobre la problemática de la desigualdad es *Inequality Reexamined* (1992).

pobreza, desde el punto de vista funcional de la economía, no sólo por las implicaciones en el bienestar individual, sino porque ello desata el potencial no explotado en el crecimiento económico y el desarrollo humano individual o como colectividad

3.7. AMPLIACIÓN Y CONCEPTUALIZACIÓN DE LA POBREZA CON ORIENTACIÓN DEL DERECHO AL DESARROLLO

El primer concepto de pobreza lo delimitó el Presidente del Banco Mundial en 1973 al mencionar que: ...unas condiciones de vida tan degradadas por la enfermedad, el analfabetismo, la desnutrición y la miseria que niegan a sus víctimas las necesidades humanas fundamentales; unas condiciones de vida tan limitadas que impiden la realización del potencial de los genes con que se nace; unas condiciones de vida tan degradantes que insultan a la dignidad humana

Para conceptualizar la pobreza se requiere definir quiénes son los pobres. Para Amartya Sen, un primer paso es definir una línea de pobreza, entonces, los pobres serán aquellos cuyos niveles de consumo caen por debajo de estas normas, o cuyos ingresos están por debajo de esa línea (Amartya Sen, Elección, Bienestar y Medición, 1982, p. 106). Sin embargo, Ravallion, considera que primero se deben cuantificar los entes, característica o situación, para ello es imprescindible tener claro el concepto a medir, por lo que es necesario elegir el concepto de pobreza, pues ello condicionará el enfoque con el que se trabajará. (Ravallion, 1998, p. 166)

Para realizar una medición de pobreza, Spaemann, menciona que cualquier línea de pobreza estará influenciada por los modelos de vida usuales y estaría

solo definida con relación al patrón de vida de una sociedad particular (Spaemann, 1980), o como sugiere Amartya Sen, la línea de pobreza es tal que presenta justificación por sí misma y es aquella bajo la que no se puede participar adecuadamente en las actividades comunes, o estar libre de la vergüenza pública por no satisfacer las necesidades.

La pobreza relativa se refiere a permanecer por debajo de un umbral o la línea de pobreza determinado en la sociedad de estudio, de tal manera que la pobreza relativa de un país desarrollado no es la misma que en un país en desarrollo, es decir, mientras una familia definida como pobre en Alemania podría tener acceso a ciertos niveles de educación básica y alimentación necesaria para su subsistencia, en un país como Somalia, una familia pobre no puede obtener los recursos necesarios para alimentarse provocando una alta tasa de mortalidad infantil. (Aparicio, Villarespe, & Urzúa, 2009, p. 42) El individuo del país desarrollado se puede considerar pobre aun poseyendo algunos bienes materiales que el pobre de un país subdesarrollado nunca podría obtener en sus circunstancias habituales. Esto puede causar confusiones de lo que implica ser pobre.

Por su parte, la perspectiva subjetiva consiste en preguntarle a la población sobre sus niveles de pobreza, basado en preguntas de ingreso mínimo como lo sugieren, Pradhan y Ravallion (1998), a esta perspectiva. Las personas cuyo ingreso reportado esté por debajo del que ellas mismas consideraron como mínimo serán consideradas como pobres. De lo contrario, serán clasificadas como no pobres. (Ravallion, 1998, p. 56).

Los economistas establecen un umbral de pobreza, el cual, es un nivel mínimo aceptable de recursos monetarios que permitan a los individuos adquirir bienes y servicios indispensables para vivir, garantizando con esto un desarrollo humano digno, justo y equitativo.

3.7.1. LA POBREZA EN MÉXICO

La economía mexicana ha tenido diversos momentos de estabilidad y crecimiento, sin embargo, el último periodo de crecimiento sostenido fue hasta 1982 cuando la tasa era del siete por ciento. El cambio de modelo económico trajo consigo una parálisis de ese crecimiento, para que en promedio hasta los últimos años fuera del orden de 0.5%, lo que afecta los ingresos de la sociedad. Investigaciones del Consejo Nacional de la Población desde ahora CONAPO, encuentran que durante las últimas tres décadas, la participación en el ingreso sólo ha incrementado para los hogares más ricos. (Consejo Nacional de Población, 2011)

Durante la mitad del siglo pasado, la pobreza disminuyó notoriamente, desde 1950 hasta 1984, época en la que el Estado lideraba la economía, incrementando posteriormente y en 2004 comenzó a revertirse; sin embargo, en 2009 se volvió a incrementar.

CONEVAL encontró que el salario mínimo legal creció sostenidamente a una tasa anual promedio de 4.8% de 1960 a 1977, reduciéndose de 1977 a 1980 en una tasa promedio de 3.3%. Sin embargo, para el periodo 1981-1992, el salario mínimo perdió 68.1% de su poder adquisitivo, consecuencia de implementar

programas de estabilización, los cuales tenían entre sus objetivos, contener el consumo para evitar alzas inflacionarias. (Consejo Nacional de Evaluación, 2007) Estas circunstancias ayudaron a asentar la pobreza; no obstante, los gobiernos elaboraron programas sociales con la intención de revertir sus efectos, incrementando el gasto en dichos programas y en el combate a la pobreza, obteniendo resultados positivos en algunos periodos. Durante el periodo de gobierno de Carlos Salinas (1988-1994), su Programa Nacional de Solidaridad (pronasol) aportó 7.1% del PIB en desarrollo social y 0.8% en alivio a la pobreza.

Durante el gobierno de Ernesto Zedillo (1994-2000), su programa progreso aportó 8.9% y 1.1% del PIB respectivamente. Durante el periodo 2001-2006, el programa Oportunidades ejerció para los mismos rubros, 10.1 y 1.4% respectivamente. En el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012), se erogó 11.3% para programas sociales y 1.8% para combatir la pobreza. (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, 2008).

El Banco Mundial considera pobres a las personas que viven con menos de dos dólares al día, mientras que los que viven con menos de 1.25 viven en pobreza extrema. Por su parte, para CONEVAL una persona se encuentra en situación de Pobreza Moderada cuando tiene al menos una carencia social (en los seis indicadores de rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación) y su ingreso es insuficiente para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades alimentarias y no

alimentarias. La Pobreza Extrema se da si la persona tiene tres o más carencias de las seis posibles mencionados anteriormente.

En México, a pesar del incremento que ha tenido el gasto en combate a la pobreza, esta aumentó entre los años 2008-2010, al pasar de 44.5% a 46.2% de la población. Para el año 2010 la estructura de la población con respecto a la pobreza se encontraba conformada de la siguiente manera: La población en situación de pobreza que equivale al 46.2% del total de la población está conformada por 10.4% de población en situación de pobreza extrema y 35.8% en situación de pobreza moderada (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares , 2008).

En México la pobreza es un fenómeno multidimensional que incluye, además de la pobreza de ingreso, la carencia de capital humano, social y financiero. Adicionalmente, existen otras condiciones que la caracterizan (Molina, 2010), como son:

- La falta de acceso a oportunidades de empleo e generación de ingresos
- La inseguridad y mala calidad de servicios y vivienda
- Violencia e insalubridad
- La carencia de mecanismos de protección social
- El acceso limitado a servicios de salud y educativos.

3.8. LA EDUCACIÓN COMO VÍA FUNDAMENTAL PARA MITIGAR LA POBREZA Y GARANTE DEL DERECHO AL DESARROLLO

Desde el punto de vista teórico hay ciertas teorías disponibles que sustentan la afirmación que la educación es parte fundamental en el combate a la pobreza. Son teorías “producto”, es decir, marcos conceptuales que interpretan el papel de la educación en su relación con la pobreza, la desigualdad, la equidad y la marginalidad indistintamente. Son usadas desde el Estado para legitimar, significar y organizar la política educativa y sus estrategias, y desde luego, constituyen puntos de referencia teórica de los investigadores, pero no son teorías usadas para responder empíricamente a la cuestión. Una de ellas es la teoría del capital humano, esta teoría, muy divulgada y usada para organizar y evaluar la educación en México, tiene su matriz en la filosofía liberal. Los educadores y políticos liberales sostienen que los sistemas educativos tienen tres funciones: socialización; adquisición de habilidades, destrezas y entrenamiento; certificación. Tales funciones contribuyen a la asignación racional de recursos según las necesidades sociales, y generan movilidad social (Molina, 2010). De este supuesto deriva la teoría del capital humano: mayor educación proporciona más “capital humano” (socialización, conocimientos y certificados) a los miembros de la sociedad para competir por los puestos y los ingresos.

El supuesto sugiere que los sistemas educacionales cumplen una función distributiva, pues preparan para los diferentes roles de la división social del trabajo y asignan el talento de manera eficiente con base en la competencia de los más hábiles. Mayor educación genera mayor productividad, potencial de la fuerza de

trabajo, y como consecuencia, mayores ingresos potenciales para los trabajadores. (Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, ¿Avance o retrocede la calidad educativa?, 2008).

Esta teoría, dicho de modo simple, considera a la pobreza como un fenómeno que ocurre porque las personas no han adquirido las habilidades cognitivas básicas para ser exitosas en el mundo. Por tanto, basta con educarlas, darles acceso a la escuela o proporcionarles compensaciones educacionales, y así se disminuirán al mínimo las probabilidades de “recaer” en la pobreza.

3.9. TEORÍA DE LA ELECCIÓN RACIONAL

Esta teoría se basa en la crítica del “estado de bienestar” proveedor de educación para todos. No modifica los supuestos liberales acerca de la educación como mecanismo de superación de la pobreza, pero traslada el peso de la acción al individuo y plantea un giro en la política educativa. El centro es ahora que los ciudadanos elijan cómo gastar sus impuestos en educación. (Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, ¿Avance o retrocede la calidad educativa?, 2008)

La argumentación puede visualizarse así: la pobreza es una cuestión individual. El estado no tiene por qué tratar de solucionar las carencias individuales, especialmente en materia educativa, que supone la acción y el deseo individual. Póngase entonces a disposición de los individuos el ingreso necesario para que elijan dónde y cómo usarlo para educarse.

Inevitablemente, los fundamentos anteriores llevan a proponer que la educación sea dejada al libre juego del mercado, privatizada para desplazar el costo hacia los usuarios directamente.

La clave está, según esta teoría, en tener tantas oportunidades de financiamiento de la educación como demandantes individuales haya de la misma. Los usuarios deciden qué educación “compran”, o supervisan, pues pagan por ella, y la adecuan a las necesidades del mercado del trabajo y de la productividad, pues nadie se interesará en una educación irrelevante o ineficaz.

La teoría de la elección racional nos indica la idea de resolver sustancialmente la pobreza con la educación, pero ahora es la educación que los individuos estén dispuestos a adquirir, en vista de su competencia en un mercado que discrimina “hacia arriba” a los talentosos. No más la educación pública de poca calidad, costosa, e ineficiente. (Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, Aprendizaje y desigualdad social en México: Implicaciones de política educativa en el nivel básico, 2009)

3.10 LA TEORÍA MARXISTA

El marxismo ha inspirado, especialmente en los años posteriores a 1968, estudios de la educación desde una sociología coherente con los supuestos del materialismo. Un punto clave es la consideración de la educación como una actividad dirigida a mantener la estructura social de clases y de poder. La educación está al servicio y en función de la clase en el poder, para reproducir la

estructura dominante que garantiza a dicha clase mantenerse en el poder (Fernández Enguita, 2010, p. 232). Estos fundamentos generaron una variante en la cual se concedía cierta capacidad de la educación para la transformación social, siempre y cuando se efectuara con autonomía del Estado y se desarrollara para concientizar, para emancipar, o incluso para organizar la lucha contra-hegemónica. Este enfoque sustentó en el pasado investigaciones empíricas dirigidas a demostrar cómo el Estado “reproducía” desde el aparato educativo la estructura de clases sociales y económicas por la vía de preparar sujetos diferenciados cuyas opciones de inserción en el trabajo eran, precisamente, diferenciadas: sólo accedían a “las alturas” quienes ya vivían en ese nivel. Y, salvo alguna excepción, quienes vivían en el nivel medio o bajo ahí se quedaban, sin importar qué educación hubieran recibido.

Basándose en estos planteamientos surge la “necesidad” de ofrecer educación “alternativa” desde actores sociales no estatales, independientes, para formar actores “emergentes” capaces de preparar y realizar el cambio social.

La posición de esta teoría es simple: la pobreza se acabará cuando se acabe el sistema social que la produce. La educación no resolverá la pobreza, por tanto, sólo es relevante la educación cuando prepara el cambio social, o mejor aun, una vez realizado el cambio. Paradójicamente, los autores de esta corriente insisten en que hay que educar, pero no desde el Estado, ni siquiera desde la escuela, sino desde una posición alterna, y como en el caso de la teoría anterior, con la finalidad de “educar para poder” que “desmonte” la ideología dominante (concebida según su connotación marxista) mediante un proceso de

resignificación del sentido social y político de la acción social de los grupos marginados y/o pobres.

Dos críticas importantes se han hecho a las teorías de inspiración marxista, especialmente a las tesis “reproduccionistas”. Una se refiere al hecho, dicho con sencillez, de que quienes hacen la crítica son precisamente los más beneficiados por el sistema. El argumento es que no debe ser tan malo el sistema educacional, puesto que da lugar a investigadores bien formados cuyos trabajos muestran el rezago con claridad y explican las causas. (Giroux, 1999, p. 173) Por lo tanto, el problema no es de reproducción, sino, la calidad, eficiencia y cobertura.

3.11 LA EDUCACIÓN EN MÉXICO

El sistema educativo mexicano es sumamente complejo, se trata de un amplio conjunto de instituciones y subsistemas que se han ido creando y modificando a lo largo del tiempo con la finalidad de responder a un entorno social cambiante y que, de la mano de políticas públicas, han desarrollado poco a poco el contenido de diversos proyectos educativos. Es en los últimos años de los 90 cuando, obligada a responder a la vorágine de la revolución tecnológica y los cambios producto de la globalización, la educación sufre una profunda transformación de fondo. En el caso particular de México, el lento abandono de las condiciones de inestabilidad política dieron paso a una política de desarrollo que situaba a la educación como un derecho social fundamental, capaz de marcar la diferencia en el desarrollo y acceso a capacidades de los individuos. Tras diversos periodos históricos y distintos enfoques de atención, el sistema educativo enfrenta el reto de

convertirse en uno competitivo, capaz de dotar a las y los estudiantes de las herramientas necesarias para acceder a mejores condiciones de vida y resultar más provechosos para sus comunidades. Factores como la igualdad de oportunidades, la inclusión y la calidad educativa son hoy los grandes temas de la educación mexicana, bases para un desarrollo humano justo.

En México la política pública sigue dominada por el “capital humano”, y el estado nacional aun no renuncia a la obligación de proveer educación para todos, desde esta óptica, un derecho a la educación justo, sin discriminación, y homogéneo, constituye las bases esenciales para garantizar un desarrollo humano equitativo.

CAPÍTULO IV

EL ACCESO A LA JUSTICIA COMO DERECHO CONSTITUCIONAL Y BASE PARA EL DESARROLLO HUMANO

4.1. ACCESO A LA JUSTICIA COMO FORMA DE DESARROLLO

Necesariamente debemos admitir que no se puede estar frente a un derecho al desarrollo en su integridad en un estado de derecho y a la vez democrático, sino se garantiza el derecho a la justicia, el cual debe ser alcanzado por toda la sociedad en su conjunto. Esa necesidad ha hecho que en los últimos años se han dedicado importantes esfuerzos al debate del acceso a la justicia en ámbitos nacionales, regionales e internacionales, con distintos alcances y propósitos³⁵.

Para garantizar al acceso a la justicia, se han discutido acciones, estrategias, métodos, procedimientos e instituciones tan diversas como la creación de un servicio público a cargo del Estado, la educación de la población con respecto a los derechos que la ley reconoce a sus ciudadanos/as, la

³⁵ En el ámbito regional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (dependiente de la Organización de Estados Americanos) publicó recientemente informes vinculados con problemáticas específicas de acceso a la justicia, tales como el informe Acceso a la Justicia para las mujeres víctimas de violencia en las Américas, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, OEA/Ser.L/V/II. Doc 68; Acceso a la justicia: llave para la gobernabilidad democrática, OEA Secretaria General, Washington DC, junio de 2007 y El acceso a la justicia como garantía de los derechos económicos, sociales y culturales. Estudio de los estándares fijados por el sistema interamericano de derechos humanos. OEA/Ser.L/V/II.129 Doc. 4. 7 septiembre 2007. También organismos multilaterales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo tomaron el tema de acceso a la justicia entre sus preocupaciones.

concientización de la población acerca de la existencia de derechos y las formas de protegerlos, la responsabilidad social de la corporación de abogados que generalmente tiene el monopolio del acceso a los tribunales, métodos para sobrellevar obstáculos y dificultades propias de ciertos grupos a través de la creación de agencias especializadas.

Las reformas de la justicia, que implica la misma institución del poder judicial y de las normas que regulan el desarrollo de los procesos judiciales también se cuentan entre las estrategias desplegadas con el objetivo de mejorar el acceso a la justicia de una determinada comunidad (Fucito, 2003, p. 287). La confrontación entre las expectativas que surgen de la ley, teóricamente aplicable por igual a toda la ciudadanía, que puede recurrir a los tribunales de justicia para hacer valer sus derechos, y las dificultades que se desprenden de las condiciones reales de acceso a los tribunales y de la supuesta defensa de sus derechos, genera una impostergable preocupación por el acceso a la justicia respecto de grandes colectivos de personas en nuestra sociedad.

Las desiguales oportunidades para hacer valer esos derechos, entre otros, a través del litigio, llevan a interrogarse acerca de los alcances y potencialidades de la garantía del acceso a la justicia como derecho fundamental para asegurar el ejercicio de los restantes derechos y libertades. Al respecto, en su clásico trabajo, Cappeletti y Garth reconocen dos dimensiones del concepto de acceso a la justicia. En primer lugar, una dimensión normativa referida al derecho igualitario de todos los ciudadanos a hacer valer sus derechos legalmente reconocidos. En segundo lugar, una dimensión fáctica que se refiere a los aspectos vinculados con

los procedimientos tendientes a asegurar el ejercicio del acceso a la justicia. Desde este punto de vista, el acceso a la justicia comprende el derecho a reclamar por medio de los mecanismos institucionales existentes en una comunidad la protección de un derecho legalmente reconocido (Bobbio N. , 1991, pp. 207-210).

Esto implica el acceso a las instituciones administrativas y judiciales competentes para resolver las cuestiones que se presentan en la vida cotidiana de las personas. Acceder a la justicia, por lo tanto, implica la posibilidad de convertir una circunstancia que puede o no ser percibida inicialmente como un problema, en un cuestionamiento jurídico. Esta posibilidad requiere de varias etapas (Larrandart, 1992, p. 183): En primer lugar, requiere reconocer la existencia de un problema. En segundo lugar, es necesario identificar ese problema como uno de naturaleza jurídica. En tercer lugar, es necesario identificar la persona (pública o privada) responsable de haber causado el problema o que hubiera incumplido su obligación de resolverlo. Luego, es necesario convertir el problema en una demanda o reclamo ya sea judicial o administrativo y sostener el proceso que fue consecuencia de la judicialización del problema con todo lo que ello implica: en su caso, seguir, instar, monitorear el proceso con la ayuda profesional necesaria. Por último, una vez lograda la decisión judicial o administrativa perseguida, corresponderá intentar hacer efectiva la resolución judicial o administrativa.

El acceso de la justicia, entonces, puede ser considerado desde tres aspectos diferenciados aunque complementarios entre sí: el acceso propiamente dicho, es decir, la posibilidad de llegar al sistema judicial; de lograr un buen servicio de justicia, es decir, no sólo llegar al sistema sino que este brinde la

posibilidad de lograr un pronunciamiento judicial justo en un tiempo prudencial; y por último, complementario necesariamente, es el conocimiento de los derechos por parte de los ciudadanos, de los medios para poder ejercer y hacer reconocer esos derechos y específicamente la conciencia del acceso a la justicia como un derecho y la consiguiente obligación del Estado de brindarlo y promoverlo (Pérez Perdomo, 1987, pp. 233-240).

El reconocimiento de la existencia de un problema y su identificación como una cuestión justiciable representa uno de los mayores obstáculos a superar. Hace falta un grado importante de alfabetización jurídica y de conciencia de la existencia de derechos en la sociedad para identificar el componente jurídico o legal de un problema. Las evidencias indican que la discriminación en el acceso a la justicia no es solo económica, sino sociocultural y que, por ese motivo, las condiciones que eventualmente permitirán su modificación exceden los recursos disponibles en una sociedad capitalista para tales fines (Amartya Sen, 2000, pp. 102-114).

Entonces el acceso a la justicia está relacionado con la existencia de un problema que tenga connotaciones jurídicas ¿Qué pasa si el Estado no garantiza el acceso a la justicia, estaríamos acaso ante una lesión eminente del derecho al desarrollo? Debido a que el derecho al desarrollo, también abarca la protección por parte del Estado; de ahí la necesidad que en apartados posteriores se estudie los que conciernen el acceso a la justicia.

4.2. LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA

En nuestros días, ante la presencia de un conflicto, en todo Estado Constitucional (de derecho, democrático y social) virtualmente ha desaparecido la posibilidad de autotutela o autodefensa (“justicia por mano propia”), que dando la autocomposición y la heterocomposición como mecanismos válidos y pacíficamente admitidos para solucionar los actualmente desde el propio Estado se alienta la autocomposición del conflicto, en el entendido que la solución adoptada por los propios actores es mejor que la decidida por un tercero, y se reserva a las personas que acudan a los órganos jurisdiccionales del Estado, generalmente en última instancia, para resolver un conflicto de intereses o eliminar una incertidumbre, ambas con relevancia jurídica.

Sin embargo, pese a la modernidad de los ordenamientos procesales, el servicio de justicia nuestro todavía no goza de aceptación social mayoritaria, lo que nos lleva a concluir que es necesario continuar con la búsqueda, creación y regulación legal de nuevas herramientas procesales que coadyuven a mejorar el servicio, y esencialmente sirvan para dar tutela efectiva a los ciudadanos.

El mantenimiento de la paz social en justicia no se consigue haciendo que el Estado sea depositario de la exclusividad de la función jurisdiccional, o que prohíba o sancione punitivamente el ejercicio de la autodefensa, es necesario y fundamental que el Estado sea capaz de crear instrumentos adecuados y eficaces para satisfacer las pretensiones de los justiciables que se formulan ante los órganos jurisdiccionales.

En la moderna perspectiva constitucional de promover los medios pacíficos de solución de conflictos para evitar la “justicia por propia mano”, el reconocimiento del derecho a la tutela jurisdiccional supone no desatender la efectividad de los derechos que sus textos reconocen. La justa paz de la sociedad únicamente será posible en la medida en que el Estado sea capaz de crear instrumentos adecuados y efectivos de defensa jurídica para satisfacer las pretensiones que ante él se formulan.

4.3. DERECHO DE TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA Y SU IMPLICANCIA EN EL DESARROLLO HUMANO

El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva es aquél por el cual toda persona, como integrante de una sociedad, puede acceder a los órganos jurisdiccionales para el ejercicio o defensa de sus derechos o intereses, con sujeción a que sea atendida a través de un proceso que le ofrezca las garantías mínimas para su efectiva realización. El calificativo de efectiva que se da le añade una connotación de realidad a la tutela jurisdiccional, llenándola de contenido.

El derecho a la tutela jurisdiccional “es el derecho de toda persona a que se le haga justicia; a que cuando pretenda algo de otra, esta pretensión sea atendida por un órgano jurisdiccional, a través de un proceso con garantías mínimas” (Gonzales Pérez, 2006, p. 27). De Bernardis define la tutela jurisdiccional efectiva como “la manifestación constitucional de un conjunto de instituciones de origen eminentemente procesal, cuyo propósito consiste en cautelar el libre, real e

irrestricto acceso de todos los justiciables a la prestación jurisdiccional a cargo del Estado, a través de un debido proceso que revista los elementos necesarios para hacer posible la eficacia del derecho contenido en las normas jurídicas vigentes o la creación de nuevas situaciones jurídicas, que culmine con una resolución final ajustada a derecho y con un contenido mínimo de justicia, susceptible de ser ejecutada coercitivamente y que permita la consecución de los valores fundamentales sobre los que se cimienta el orden jurídico en su integridad” (De Bernardis, 1985, pp. 55-57).

Sin embargo, no es suficiente que un derecho esté reconocido expresamente en los textos constitucionales, pues la verdadera garantía de los derechos de la persona consiste en su protección, para lo que es preciso distinguir entre los derechos y las garantías de tales derechos, que no son otras que los medios o mecanismos a través de los cuales es posible su realización y eficacia. Es por ello que, muchas veces, se reclaman nuevas formas procesales que aseguren, fundamentalmente, una tutela jurisdiccional pronta y eficiente, por lo que efectivizando éstos derechos, es decir el derecho a una justicia en pleno derecho, también se asegura el derecho al desarrollo.

El panorama doctrinario relacionado con el Derecho Procesal Civil se caracteriza, actualmente, por la exaltación de las bondades de la eficacia en el proceso, situándola en lugar preferencial al punto que algunos hablan del “eficientismo procesal”. Así, Vargas expresó que “el principio de efectividad no es apenas una directiva para el legislador, sino también “un principio hermenéutico del Derecho vigente”. Precisamente este valor tiene una función

instrumental respecto de otro valor de innegable jerarquía que es la “justicia”.
(Vargas, 1999)

Morello a su turno señala que “la efectividad de las técnicas (acciones y remedios) y de los resultados jurisdiccionales es la meta que en estas horas finiseculares signa la eficiencia en concreto de la actividad jurisdiccional, ese propósito es notorio y cobra novedosa presencia como exigencia perentoria del Estado de Derecho, en el clásico brocárdico: *ubi remed ium ibi ius*”, que “la exigencia de efectividad (...) representa el común denominador de cualquier sistema de garantías. Es que la sola efectividad, en último análisis , permite medir y verificar el grado variable de la protección concreta que reviste la garantía tanto desde el punto de vista formal (o extrínseco) cuanto de contenido (intrínseco) que es capaz de asegurar a la situación subjetiva que abstractamente la norma procura proteger”, y finaliza: “Nosotros, abarcativamente, predicamos la efectividad en un doble plan o concurrente. Por una parte la idoneidad específica del remedio técnico (garantía) a utilizar, y, en segundo lugar, la materialización que, a través de la jurisdicción, se debería alcanzar como manifestación de concreción de la tutela recabada” (Morello, 1994).

En cuanto a su naturaleza, el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva es de carácter público y subjetivo, por cuanto toda persona (sea natural o jurídica, nacional o extranjera, capaz o incapaz, de derecho público o privado; aún el concebido tiene capacidad de goce), por el sólo hecho de serlo, tiene la facultad para dirigirse al Estado, a través de sus órganos jurisdiccionales competentes, y

exigirle la tutela jurídica plena de sus intereses. Este derecho se manifiesta procesalmente de dos maneras : el derecho de acción y el derecho de contradicción.

Actualmente se sostiene que el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva comprende: Acceso a la justicia: La posibilidad de acceder a los órganos jurisdiccionales, ya sea como demandante o demandado, con el propósito de que se reconozca un interés legítimo. El derecho a un proceso con todas las garantías mínimas: Que sería, precisamente, el derecho al debido proceso. Sentencia de fondo: Los jueces deben dictar, por regla general, una sentencia sobre el fondo de asunto materia del petitorio para solucionar el conflicto intersubjetivo de intereses o eliminar la incertidumbre, ambas con relevancia jurídica; empero, en el caso de no poder entrar al fondo, porque no concurren los presupuestos procesales y las condiciones de la acción, dictarán una resolución fundada en derecho. Doble instancia: Es la posibilidad que tienen las partes de impugnar la sentencia que consideren contraria a derecho, con el propósito de que sea exhaustivamente revisada por el superior jerárquico y, de ser el caso, se expida una nueva sentencia adecuada. Ejecución: Es el derecho a solicitar y obtener el cumplimiento material efectivo de la sentencia definitiva, pues resulta insuficiente la declaración de que la pretensión es fundada o infundada (aun cuando se sustente en sólidos fundamentos doctrinarios). La efectividad de las sentencias exige, también, que esta se cumpla (pese a la negativa del obligado) y que quien recurre sea repuesto en su derecho violado y compensado, si hubiera lugar a ello, por los daños y perjuicios irrogados; de lo contrario, las sentencias, y el

reconocimiento de los derechos que ellas comportan a favor de alguna de las partes, se convertirían en mera declaración de intenciones.

En este sentido, González Pérez ha señalado que: “El derecho a la tutela jurisdiccional despliega sus efectos en tres momentos distintos: primero, en el acceso a la justicia, segundo, una vez en ella, que sea posible la defensa y poder obtener solución en un plazo razonable, y tercero, una vez dictada la sentencia, la plena efectividad de sus pronunciamientos. Acceso a la jurisdicción, proceso debido y eficacia de la sentencia” (Gonzales Pérez, 2006)

El acceso a la justicia reconocido mundialmente como Derecho Constitucional. Por ello, las Constituciones modernas consagran el derecho a la tutela jurisdiccional “efectiva” como derecho constitucional, al que antes se conocía como derecho a la jurisdicción, y científicamente hablando como derecho, facultad, poder de la acción.

El artículo 24º de la Constitución Política Española de 1978 consagra y reconoce este derecho constitucional a todas las personas y no solo a los españoles, en los siguientes términos: 1) Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los Jueces y Tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión. 2) Asimismo, todos tiene derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismo, a no confesarse culpables y a la

presunción de inocencia. La ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de secreto profesional, no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos. (Vargas, 1999).

Ávalos Rodríguez, refiere que: personalmente utiliza y de manera frecuente , la denominación nueva del clásico y viejo derecho a la jurisdicción, no porque antes dejáramos de asignarle a éste el contenido amplio que se tiende desde el acceso a la justicia hasta la sentencia última, sino porque se expresa mejor en una fórmula clarísima cuál es el sentido que debemos atribuir a la jurisdicción, a la acción, al proceso en todas sus etapas , a su duración, y a la de cisión que le pone término (Ávalos Rodríguez, 2013).

La Constitución Política Mexicana, acorde con lo expuesto, consagrarla “tute la jurisdiccional” en su Artículo 17, que a la letra dice:

Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.

El Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones colectivas. Tales leyes determinarán las materias de aplicación, los procedimientos judiciales y los mecanismos de reparación del daño. Los jueces federales conocerán de forma exclusiva sobre estos procedimientos y mecanismos. Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de

controversias. En la materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial.

Es sumamente importante lo que enseña Gonzáles Pérez en cuanto a la tutela jurisdiccional (Gonzales Pérez, 2006): “El derecho a la efectividad de la tutela jurisdiccional no constituye en modo alguno una conquista del Estado Social de Derecho, ni siquiera del estado de Derecho. La organización del poder público de modo que quede garantizada la justicia le viene impuesto a todo Estado por principios superiores que el Derecho positivo no puede desconocer. El derecho a la justicia existe con independencia a que figure en las Declaraciones de Derechos Humanos y Pactos Internacionales, Constituciones y leyes de cada Estado. Como los demás derechos humanos es un derecho que los seres humanos tienen por el hecho de ser hombres. Los ordenamientos positivos se limitan a recogerle, como recogen otros principios del Derecho Natural, al lado de los principios políticos y tradicionales “.

Con lo dicho tenemos que el soporte de la tutela jurisdiccional está en el Derecho Natural, cuyas normas tienen validez moral y jurídica, al margen de su recepción en norma alguna. Por ello, y acorde con la dignidad humana, al ser la persona un fin en sí mismo, es titular de derechos que le son innatos, anteriores al propio Estado y que por tanto son inalienables.

4.4. IMPACTO DE LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA EN EL PROCESO JUDICIAL COMO MECANISMOS DE DEFENSA DE LOS DERECHOS DE TODA PERSONA

El derecho a la tutela jurisdiccional, en tanto derecho público y subjetivo, tiene dos planos de existencia. Usando las categorías aristotélicas de potencia y acto, nos parece factible ubicar el derecho a la tutela jurisdiccional antes y durante el proceso, respectivamente.

A) En el primer caso, el derecho a la tutela jurisdiccional antes del proceso consiste en aquel derecho que tiene toda persona, en tanto es sujeto de derechos, de exigir al Estado provea a la sociedad de los requisitos o presupuestos materiales y jurídicos indispensables para solventar un proceso judicial en condiciones satisfactorias. Resulta absolutamente irrelevante si esa estructura material y jurídica que debe sostener el Estado va a ser usada o no. Lo trascendente es, única y exclusivamente, que ese andamiaje destinado a solucionar conflictos aplicando el derecho que corresponde al caso concreto debe estar siempre en aptitud de conceder a los ciudadanos la posibilidad de un tratamiento certero, eficaz y homogéneo a su exigencia de justicia.

Horacio D. Rosatti, profesor argentino que ha estudiado esta temática, expresa al respecto: El derecho a la jurisdicción antes del proceso es el derecho a exigir del Estado, monopolizador del servicio de administración de justicia, el cumplimiento de los presupuestos jurídicos y fácticos necesarios para satisfacer el cometido jurisdiccional ante la eventualidad de una litis concreta (Rosatti, 1984, pp. 104-111). Es de opinión similar el apreciado constitucionalista Abregú Martín:

El derecho a la jurisdicción es un supuesto de la actividad procesal que, en su primera etapa, aparece como previo al proceso, pero que, no agotándose con el acceso al órgano judicial se desenvuelve al hilo del proceso hasta la sentencia firme (Abregú, 1994, pp. 133-150). Como se advierte, el deber estatal de asegurar tutela jurídica a sus ciudadanos tiene exigencias que son previas al inicio de un proceso en concreto. Así, es imprescindible la existencia de un órgano estatal, autónomo, capaz y objetivo, encargado con exclusividad de la resolución de conflictos. Asimismo, es deber del Estado contar con pautas reguladoras de la actividad a realizarse al interior de un eventual proceso, es decir, debe proveer con anticipación la vigencia de normas procesales que aseguren un tratamiento social sencillo, didáctico y expeditivo del eventual conflicto que se pueda producir. Igualmente, el Estado debe proveer a la comunidad de una infraestructura adecuada a fin de que el servicio de justicia sea brindado en condiciones satisfactorias, cuando sea requerido.

Se trata, para expresarlo de otra manera, de que el Estado se comporte como lo haría una empresa de seguros respecto de sus asegurados. Es decir, teniendo y manteniendo las condiciones necesarias para dar atención inmediata al asegurado en el caso de que lo requiera, prescindiendo absolutamente de si el supuesto material generador de la atención, el siniestro, pudiera jamás presentarse. Resulta irrelevante si todas o ciertas personas van a litigar alguna vez, el derecho a la tutela jurisdiccional antes del proceso le impone al Estado el deber de proveer a la comunidad de los elementos indispensables para que su pretensión sea procesalizada de la manera más idónea.

B) El derecho a la tutela jurisdiccional durante el proceso, en cambio, contiene el haz de derechos esenciales que el Estado debe proveer a todo justiciable que participe en un proceso judicial. Este mismo derecho puede desdoblarse teniendo en cuenta su contenido y momento de exigibilidad en derecho al proceso y derecho en el proceso.

En cuanto a los antecedentes de esta institución, se puede decir guarda el 17 de junio de 1215 como la fecha en la que los barones ingleses arrancaron al Rey Juan sin Tierra en las praderas de Runnymede algunos derechos básicos que les aseguraran un juicio correcto.

Lejos estaban los barones de saber que los derechos que reivindicaron aquel día iban con el tiempo a desarrollarse y consolidarse como un grupo de derechos esenciales e inalienables que, en cualquier sociedad contemporánea, son el fundamento supremo y la razón esencial para que los derechos y la libertad de un individuo no sean agraviados en un proceso, sea por el Estado sea por cualquiera que pretenda hacer un uso abusivo de aquél (Chamorro Bernal, 1994).

Refiriéndose a la trascendencia de estos derechos, cuyo reconocimiento constitucional es la mejor expresión de su destacada importancia, la profesora Ada Peixegrini Grinover nos dice: El Estado de derecho solo puede asumir su real estructura a través de estos instrumentos procesales constitucionales que tutelan los derechos fundamentales del hombre. Se trata, siguiendo a Couture, de hacer que el derecho no quede a merced del proceso, ni que sucumba por ausencia o insuficiencia de este; ya que no hay libertades públicas sino cuando se dispone de

los medios jurídicos que imponen su respeto; y fundamentalmente, esos medios, sabemos, se ejercen a través de la función jurisdiccional. (Pellegrini Grinover, 1982, p. 4)

Este derecho al proceso empezó a manifestarse hace más de siete siglos en el episodio histórico que antes describimos y fue en principio el derecho de todo ciudadano a no ser condenado sin que medie un juicio previo. Durante siglos de constante y permanente evolución, este concepto se fue enriqueciendo. Así, de juicio previo pasó con el tiempo a ser previo juicio y, más adelante, lo que hoy conocemos con el nombre de debido proceso legal, concepto que implica no solo que nadie puede ser sorprendido con los resultado de un proceso que no conoció, sino también que debe proveérsele de un plexo de derechos esenciales durante el desarrollo de este.

Lo expresado al final del párrafo anterior es lo que denominamos derecho en el proceso. Una vez que un ciudadano empieza a involucrarse en un proceso, voluntaria u obligatoriamente, el Estado debe asegurarle que durante su tramitación no se encuentre en desventaja para expresar su posición jurídica, sea probando su derecho, alegando, impugnando y asegurando la ejecución de lo decidido en definitiva. Lo señalado es aplicable prescindiendo de la naturaleza de la materia jurídica (civil, penal, comercial, etc.). El Estado, asimismo, ha provisto anticipadamente, a los sujetos que participan en un conflicto, de un ordenamiento procesal compuesto por normas, regularmente imperativas, respecto de su

conducta al interior de un proceso judicial. Precisamente, su cumplimiento debe asegurar el derecho de participación de todos los sujetos en condiciones plenas.

El derecho en el proceso, llamado también debido proceso objetivo o garantía de defensa en juicio, es en realidad el derecho a recibir del Estado prestación de justicia al caso concreto. Para expresarlo de manera distinta, es el derecho a que un juez natural (competente) resuelva un conflicto con conocimiento, imparcialidad, aplicando el derecho que corresponda al caso concreto y cumpliendo con el procedimiento establecido.

Si a lo expresado sobre el derecho al proceso le agregamos lo descrito sobre el derecho en el proceso, nos encontramos con un conjunto de derechos esenciales a la persona humana, los que a su vez han configurado, luego de una lenta pero exitosa evolución histórica, una suerte de mega derecho que contemporáneamente recibió el nombre de debido proceso legal o *due process of law*³⁶. En nuestra opinión, entre el derecho a la tutela jurisdiccional y el derecho a

³⁶ «Es un derecho fundamental, natural o humano que tiene toda persona que le faculta a exigir del Estado un juzgamiento imparcial y justo, ante un juez responsable, competente e independiente; pues el Estado no sólo está obligado a proveer la prestación jurisdiccional (cuando se ejercitan los derechos de acción y contradicción) sino a proveerlas bajo determinadas garantías mínimas que le aseguren tal juzgamiento imparcial y justo; por consiguiente, es un derecho esencial que tiene no solamente un contenido procesal y constitucional, sino también un contenido humano de acceder libre y permanente a un sistema judicial imparcial».

Nota del Autor: Más adelante, en la misma obra, se enumeran los elementos que conforman el derecho a un debido proceso y se cita: Intervención de un Juez independiente, responsable y competente, la realización de un emplazamiento válido, el derecho a ser oído o derecho a audiencia, la oportunidad probatoria, la fundamentación del fallo, el control constitucional del proceso y la doble instancia. Por nuestra parte podríamos agregar: la defensa y asistencia de letrado, el derecho a ser informado de la acusación o la pretensión formulada, el uso del propio idioma, la publicidad del proceso, su duración razonable, entre otros.

un debido proceso, existe la misma relación que se presenta entre la anatomía y la fisiología cuando se estudia un órgano vivo, es decir, la diferencia sólo reside en la visión estática y dinámica de cada disciplina, respectivamente. El primero es el postulado, la abstracción; en cambio, el segundo es la manifestación concreta del primero, es su actuación, (Ticona Postigo, 1995).

4.5. TUTELA JURISDICCIONAL Y DERECHO AL DESARROLLO

Por tanto, estamos frente a una efectiva justicia y acceso a la misma, cuando El ejercicio de los derechos humanos contribuye al desarrollo no solamente por el valor instrumental que a estos efectos sin duda posee, en virtud de su utilidad para hacer sentir la voz de los excluidos o para reforzar reivindicaciones sociales, sino también porque el pleno disfrute de esos derechos constituye en sí mismo un elemento esencial y un fin del desarrollo (Abregú, 1994, p. 76).

Tanto en obras científicas, como en informes de organismos de las Naciones Unidas y de entes multilaterales destinados a la promoción del desarrollo, se admite cada vez más la interconexión entre los derechos humanos y el desarrollo, sobre todo en la medida en que tales derechos han sido asumidos en su integridad, considerando también los derechos económicos, sociales y culturales y su interdependencia con los derechos civiles y políticos.

Desde la perspectiva de los derechos humanos, la relación entre estos y la justicia ha sido reconocida ampliamente, y ha sido puesta de manifiesto en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena (1993) y en instrumentos como la Carta Democrática Interamericana.

Adicionalmente, la vertiente de la equidad que se traduce en una prohibición de la discriminación se hace presente en la propia proclamación internacional de los derechos humanos, los cuales deben ser asegurados sin discriminación.

Desde la óptica de la justicia como componente del desarrollo, la igualdad en el acceso a los bienes o servicios necesarios para gozar de una adecuada calidad de vida presupone el pleno reconocimiento de la condición de persona de cada ser humano y de su dignidad, la cual se expresa primordialmente en el conjunto de los derechos humanos. Derechos que han de operar como libertades reales, tangibles y accesibles para todos (Picó I Junoy, 1997, pp. 55-63).

La dimensión institucional del desarrollo humano comprende precisamente el elenco de organismos, sistemas, políticas y normas ligados a la gestión de lo público, ocupando aquí el Derecho un lugar central. Para ilustrar esta afirmación basta con subrayar la trascendencia del Estado de Derecho y de la separación de poderes en la sociedad contemporánea. El postulado del apego a la Constitución y a la ley; de la sujeción a normas preestablecidas generalmente por el Parlamento y no al criterio ocasional y subjetivo del funcionario en turno.

CAPÍTULO V

EL MEDIO AMBIENTE COMO FORMA DE DESARROLLO HUMANO

5.1. BASES TEÓRICAS PARA ANALIZAR EL MEDIO AMBIENTE

5.1.1. TEORÍA DE LA LÓGICA DE LA ACCIÓN COLECTIVA PLANTEADO POR OLSON

En esta teoría se analiza la conducta de cada uno de los individuos en un grupo social y verifica que los grupos se mueven en base a un interés. Los estudiosos de la ciencia política han percibido durante un tiempo determinado que en Estados Unidos, los ciudadanos tienden su comportamiento a un interés común político y se organizarán y lucharán a favor del mismo. Es decir, cada individuo de una población determinada estará en uno o dos grupos y ya está forma de interactuar, se encarga de explicar el resultado de cada proceso político, que resulta en el dictado en de normas y nuevas formas de comunicación, por ejemplo los trabajadores se unen con la finalidad de poder luchar por sus intereses y derechos haciendo que su actuación sea de forma conjunta y consecuente.

Según Bermudez el detalle de cada uno de los grupos sociales es que se encuentra orientado o relacionado a sus intereses, y su actuar radica en determinar un beneficio particular o colectivo generando así de esta forma una acción que genere una vinculación con la lógica del pensamiento y de esta forma con la lógica del actuar, haciendo que cada individuo forme parte de un proceso distinto y cada proceso forme parte de cada individuo distinto, esta teoría fue

acuñada en Estados Unidos donde se pueda analizar el comportamiento de los ciudadanos, y sus grados de involucramiento que tienen al momento de poder formar grupos de acción, movimientos, sociedades en las cuales comparten intereses comunes y que estos sean a su vez los lugares donde poder arribar las decisiones (Bermudez S, 2000)

Se entiende que cada individuo como empresas o grupos de individuos serán beneficiados por una acción, en un sentido general, asimismo reconoce que cada individuo o grupo carece de sentido voluntarios para acceder a una acción.

Una acción siempre va a depender de la forma que el incentivo conmueva en la actual, ya que si existen incentivos malos hará que se genere una costumbre mal estructurada, otorgar incentivos buenos o benéficos lograra que el actuar sea acorde con los objetivos planteados tanto de manera general como de manera particular.

5.1.2. TEORIA DE LA ACCIÓN COMUNICATIVA

5.1.2.1. ANTECEDENTES

En el transcurso de la obra de Häberle se puede observar una doble perspectiva en sus teorías, ya que se encarga de vincular la perspectiva filosófica con la sociológica, su mirada viene y se cimienta en la problemática social como principal argumento, buscando la razón o la verdad para concentrarse en el conocimiento general. (Häberle, 2008)

En este contexto aparece una teoría de la racionalidad que encuentra su origen entre la teoría del lenguaje y la comunicación, siendo necesaria la investigación sociológica para formar un modelo de sociedad que explique de manera completa y no aprofética, la constitución y reproducción del orden social. En este contexto, la sociedad modelo será participe y se creará en dos niveles para poder analizarla como el mundo de vida y el de sistemas (estos también se articulan para formarla), debiendo informar al mismo tiempo de los procesos de racionalización social y facilitar aquel diagnóstico de la modernidad.

En esta línea de pensamiento, y siguiendo a Fabra el logro de los objetivos planteados como el objetivo metodológico y metateórico de fundamentación de la ciencia social como del objetivo teórico de explicar cómo es posible el orden social, hizo que Habermas postulara dentro de sus teorías a la acción comunicativa, (Häberle, 2008).

Debe advertirse que la construcción de la teoría de la acción fue un arduo trabajo de cerca de 20 años, desde su libro La lógica de las ciencias sociales (1966-1967) hasta la Teoría de la Acción Comunicativa (1981) donde consolidó la vertiente filosófica de la teoría como de la vertiente sociológica.

Habermas, considera y sostiene que después de Hegel, la gran filosofía ha ido desapareciendo, esto habría sucedido a través de cuatro grandes cambios estructurales:

1. Ruptura de la unidad entre filosofía y ciencia, a partir de mediados del siglo XIX la filosofía dejó de afirmar su proceso en el ámbito del saber, y con el positivismo, la teoría del conocimiento limitó su posición para convertirse en teoría de la ciencia, es decir, una reconstrucción a posteriori del método científico.
2. Desconexión entre filosofía y tradición, mientras una abarca el estudio de la totalidad y que se encontraba en condiciones de aportar elementos para legitimación de ámbitos como la política y ética, la otra se separa de la naturaleza y la teoría del conocimiento y se convierte en teoría de la ciencia que consume el divorcio entre filosofía práctica y la filosofía teórica.
3. Transformación de la relaciones del pensamiento filosófico con la religión, este es el proceso con una ambivalencia interesante sobre lo que Habermas analiza la problemática de su legitimidad, ya que por un lado la filosofía abandona la pretensión y fundamento dogmático, haciendo entrar en crisis la idea de lo absoluto y correlativamente cualquier tipo de información teológica se convierte en carente o su fundamento quedas sin sentido. Pero por otra parte, la disociación mencionada de la filosofía práctica respecto de la teórica permite que determinados contenidos que basaban su interpretación en términos religioso, se trasladen a la teoría del conocimiento y encuentren sostenibilidad al interior del pensamiento filosófico.
4. La filosofía deja de ser una materia esotérica que se reserva a algunas élites cultas, gracias a que con la Ilustración se instauraron sistemas

educativos con carácter cada vez más general, la filosofía se puede extender y entender a capas más amplias de la sociedad, a más estratos sociales, la filosofía se convierte en última instancia en una influencia decisiva de los procesos de transformación social.

5.1.2.2. LA COMPRENSIÓN HERMENÉUTICA COMO MÉTODO PARA LA TEORÍA SOCIAL

Entre los años sesenta y setenta, y en consecuencia de los trabajos que buscaban la relación entre teoría y práctica, Habermas propone que no debía analizarse a la sociedad considerando solo un uso instrumental que le otorga la ciencia. Es así que en la lógica de las ciencias sociales se enfrenten los enfoques para analizar correctamente el panorama sociológico y todo ello con la finalidad de crear una teoría que se adecue más adelante a las ciencias sociales, asimismo permitió que Habermas sentara las bases de su propio método sociológico y criticara la dicotomía existente entre los métodos empíricos y hermenéuticos mencionando que no existe un fundamento sólido que le asegure la objetividad que toda ciencia debería tener, de una revisión superficial del libro antes mencionado podemos encontrar que el meollo del asunto se establece en una discusión en torno a la metodología de las teorías generales de la acción social y sobre la problemática de la comprensión del “sentido” de las ciencias de acción, y comentando lo que menciona Wellmer “ambas concepciones de las ciencias sociales poseen sólo una parte de la verdad” se genera la discusión en torno a la postura correcta para analizar las ciencias sociales. (Wellmer, 1990)

Para Habermas la acción social significa interacción, así como coordinación de la acción de dos o más sujetos, y un medio que facilita esta interacción es el lenguaje. De esta manera para él, el concepto de sentido sólo puede entenderse desde su enmarcación de la estructura lingüística. Entonces parte del supuesto que no existe algo así como intenciones puras o previas del hablante, ya que sentido tiene o encuentra siempre una expresión simbólica, las intenciones tienen que poder adoptar siempre una forma simbólica y poder ser expresadas o manifestadas (Häberle, 2008)

La reinterpretación en clave de pragmática lingüística del concepto sociológico del sentido de la acción es el que distingue también la propuesta de Habermas de otros planteamientos teóricos como la sociología comprensiva o el funcionalismo que también otorgan en principio al sentido de las acciones sociales un lugar central en su análisis.

Es así que, Habermas considera distanciado dicha concepción porque su perspectiva es desde el origen dialógica, en la medida que no tiene solamente al otro como un elemento más de la comunicación, sino como aquel que coopera constantemente a la hora de definir el marco de acción y por tanto es constitutivo para la acción.

Como puede observarse esta es una explicación funcional estructurada en términos de racionalidad. Por lo tanto, no debe causar extrañeza que una vez decidido sentido de la acción se cree el estado adecuado para garantizar entendimiento. Mientras que la acción instrumental se orienta por reglas

técnicas basadas en un saber empírico analítico, la acción comunicativa se orienta por normas que se encargan de definir efectivamente expectativas recíprocas de comportamiento, pero lo que importa es que hayan sido entendidas y aceptadas al menos por dos sujetos agentes.

En este contexto es necesario advertir que Habermas hizo un corte conceptual entre una acción teleológica y una acción comunicativa, siendo la primera la que se dirige hacia el éxito, hacia un logro de finalidades concretas mediante la aplicación de un saber técnico o mediante el ejercicio de influencia y la segunda su primer objetivo es alcanzar un acuerdo intersubjetivo entre los agentes.

En esta línea de ideas debemos entender que la teoría de la acción comunicativa es una reconstrucción de un propio proceso de aprendizaje.

5.1.2.3. CONCEPCIÓN PROCEDIMENTAL DE LA RACIONALIDAD

Habermas intenta mantener un lazo entre la teoría y la práctica social, dicho de otra forma, se encarga de desarrollar un pensamiento que ponga las bases para mantener una cierta unidad en las diferentes esferas de la razón. Debe advertirse que existe un sentido de integración y esta acción de unir en un todo coherente diversos elementos dispersos, otorgándole un valor agregado al sentido de saber porque se proyecta como un sistema integrador y la teoría de la acción comunicativa no se alimenta exclusivamente de los clásicos de la

teoría social. Por ello, recurre a disciplinas como la ciencia política, la filosofía teórica, la historia, la psicología evolutiva, la teoría del derecho, a la filosofía moral, entre otras. De un momento de extrema especialización de las diferentes ciencias y disciplinas con un proyecto que reúna estas características, pudiendo ser considerado como excesivamente ambicioso y en consecuencia poco factible, pero cuando observamos la coherencia y la potencialidad de los resultados se entiende porque saber más ocupó un lugar de privilegio en el panorama de la filosofía contemporánea.

En la concepción moderna, Habermas menciona que no existe filosofía y después de Hegel arriba a esta conclusión, cuando luego hace frente a la tarea de formular una teoría del derecho. El convencimiento de la competencia meramente de la filosofía y la necesidad de trabajar la forma reconstructiva tiene en cuenta los resultados de los demás áreas del saber, encontrándose reflejado en todos los escritos y tenía en sí misma la categoría de declaración de principios en un texto antiguo que se ha convertido emblemático a la hora de presentar la concepción que Habermas sostiene del quehacer filosófico, (Häberle, 2008).

En la concepción metodológica de la teoría se encarga de rehabilitar el método de la comprensión para acceder con algunas posibilidades de éxito al ámbito de las ciencias sociales poniendo las bases para que estas participen de transformación lingüística en la que Habermas asienta la teoría sociológica. Los términos de esta decisión metodológica habían sido ya preestablecidos por Max Weber al diseñar el marco de lo que él denominó una sociología

comprehensiva: posición contraria a la sociología positivista, su propuesta se centraba precisamente en considerar el sentido de las acciones sociales como un concepto sociológico básico, en su libro economía y sociedad en las primeras hojas dedicadas a los fundamentos metodológicos menciona que la tarea de la sociología es comprender interpretando las acciones orientadas por un sentido (Weber, 1964)

La transformación de la sociología en cable lingüística que se desprende de esta decisión metodológica viene determinada básicamente por dos motivos independientes: uno de orden filosófico y otro motivo de orden sociológico:

5.1.2.3.1. MOTIVO FILOSÓFICO

Al despertar de la Edad Moderna se había tenido un juego particular en la escena filosófica con el entrar de un nuevo paradigma, de una nueva forma de hacer filosofía colocaba como eje principal al pensamiento Solitario, siendo Descartes quien había instaurado este concepto y en el que le confería finales del siglo XVIII con el esfuerzo de críticas aquella grandeza que todavía hoy nos deja pasmados. Luego de las experiencias clave de la ilustración y la Revolución Francesa tendrían que ver con que se producía la disolución de este paradigma, es así que el pensamiento se dejó a la representación de la expresión más radical del Viejo paradigma mentalista, pero a su vez en él también encontramos planteadas la semilla de la disolución. Marx avanzará un poco más y defenderá la naturaleza como base del espíritu humano y lo hará mostrando las formas de reproducción social que tiene su reflejo en la conciencia, ya no debe entenderse solo, sino debe considerarse su sustrato práctico. Por otro lado tenemos que Darwin

reintroduce la naturaleza humana y prepara una contemplación inminente y funcionalista. Considerando que la interpretación de Habermas indica que esta crisis no significa el agotamiento del proyecto ilustrado ni tampoco debe suponer el fin de la filosofía, sino el final de un modelo clásico de hacer filosofía, que ponía demasiadas expectativas en las tareas que está destinado a poder cumplir, el callejón sin salida en el que desemboca a la filosofía de la conciencia debido a la desmesura de las ambiciones de instrumentalidad.

5.1.2.3.2. MOTIVOS SOCIOLÓGICOS

El esfuerzo empleado de tipo eminentemente filosófico se justifica por la necesidad de establecer algunas bases conceptuales y fundamentos bastante sólidos sobre y desde las cuales desarrollar una teoría de la sociedad, explicar los comportamientos y acciones sociales considera que el sentido de la teoría sociológica consiste en disponer de una teoría que permita dar respuestas a los comportamientos y acciones sociales.

Habermas considera que si Weber a pesar de su aporte significativo a la sociología no fue capaz de desarrollar una teoría de acción suficientemente fecunda, fue debido precisamente al hecho de haber enfocado el análisis de la acción a partir de un modelo monológico que parte de la intencionalidad del actor y que solo es capaz de entender el significado de las acciones a partir de una racionalidad meramente finalista. (Häberle, 2008)

5.1.2.4. EL TEORÍA DE LA ACCIÓN COMUNICATIVA

Como hemos dicho, la teoría de la acción comunicativa se encarga de recoger los resultados de más de 15 años de investigaciones realizadas sobre cuestiones metodológicas y de fundamentos organizados basados en una teoría de la sociedad que se considera lo suficientemente potente para volver con más seguridad a muchas de las cuestiones que habían precisado el motor de su reflexión y que desde el mismo principio bien llevado se convirtió en un programa de investigación vinculando a las cuestiones morales, éticas y políticas, de esta forma se encargaba de deslegitimar las perspectivas y tradiciones del pensamiento, las críticas por parte de los especialistas en cada una de las disciplinas o de los autores que tratan al respecto de la acción comunicativa no se hicieron esperar.

Habermas por su parte siempre he estado atento a las críticas y cuando estas estaban bien fundamentadas se ha visto en la necesidad apresurada de introducir correcciones que permitían evitar los problemas señalados por los comentaristas, siempre que eso no hubiese puesto en peligro o renunciado a ninguno de los aspectos o intereses centrales que encontrábamos en la teoría, esos trabajos llamados de reparación han tomado la forma de nuevos prólogos o introducciones en los que se intenta resituar las ideas contenidas en el libro en cuestión a la luz de los desarrollos teóricos posteriores. En otros casos, cuando se ha tratado de introducir correcciones importantes que iban más allá de la simple reparación, se centraba en elaborar trabajos más específicos, como artículos. En estos casos podemos apreciar las variaciones introducidas en la teoría de la

racionalidad y la teoría de la verdad, siendo estos trabajos recogidos y confrontados respectivamente en los años 90. Teniendo en cuenta la metodología de la teoría de la acción comunicativa, Habermas trato de revalorizar en el marco de la teoría, el papel de importancia que tenía el derecho en las sociedades modernas. (Häberle, 2008)

La teoría de la acción comunicativa, tuvo su aparición en el año 1981, y se convierte en un intento para enlazar de manera sistemática el desarrollo de un nuevo concepto de racionalidad con el entendimiento de la sociedad como un complejo articulado entre dos niveles: mundo de vida y mundo de sistemas con la finalidad de crear una teoría de la modernidad que se oriente a explicar las patologías de la sociedad moderna, sociedad desarrollada y contrarrestar la racionalización social. En el transcurso de su obra la Teoría de la Acción Comunicativa (1981) pueden observarse los perfiles de Habermas entrelazados, es decir, el perfil filosófico, el perfil teórico de la sociedad y el perfil crítico de la contemporaneidad.

La teoría de la acción comunicativa representa el intento por desarrollar una teoría de la sociedad que considera al entendimiento lingüístico, es decir también, racionalidad comunicativa, como el mecanismo fundamental de coordinación de las acciones sociales.

Se debe advertir que el objetivo planteado por la teoría de la acción comunicativa, no se centra solamente en explicar cómo una multiplicidad de actores diversos, con intereses y finalidades también diferentes, pueden coordinar

sus diversos planes de vida sino en averiguar cómo es posible que generen intersubjetividad, es decir, que sean capaces de crear unos marcos de acción en los que resulte posible aquella coordinación social.

Según Moreno, entiende que para conseguir establecer una comunicación eficaz, es necesario un concepto diferente de racionalidad y de acción. Ya en la lógica de las ciencias sociales consta el siguiente postulado “no existen, por lo que veo, investigaciones sociales o sociológicas que apelen expresamente a una fundamentación en términos de análisis lingüístico o de hermenéutica del lenguaje”. (Moreno & Cubero , 1990)

Este tipo de fundamentación hizo que Pérez Luño desarrollara la teoría de la acción comunicativa, pero para hacerlo tuvo de adoptar previamente una teoría que permita mostrar la potencialidad del lenguaje para generar intersubjetividad y coordinar la acción, de igual forma tuvo que identificar cuáles fueron las estructuras comunicativas que permitían a estos procesos resultados efectivos. (Pérez Luño, 1993)

Esta generación de nuevos conceptos y teorías, permitirán:

- Generalizar los resultados de manera que estos no reflejen simplemente estructuras o comportamientos lingüísticos ligados a contextos particulares, sino que descubran presuposiciones, esquemas y reglas universales, suficientemente formalizables y confiables.

- Dar razón a las relaciones pragmáticas en toda su amplitud; y
- Reconstruir adecuadamente el momento específico de comunidad que se esconde tras los fenómenos de la comprensión de significados idénticos a un reconocimiento de pretensiones de validez intersubjetivas.

Desde una concepción analítica – conceptual, esta teoría se desarrolla en dos estadios o en dos momentos:

- En un primer momento, el maestro Habermas llega al convencimiento que contra la unificación de las ciencias sociales no puede dejar de lado a la hermenéutica, donde el factor determinante para analizar las relaciones sociales no sea únicamente la cuantificación sino que tenga en cuenta los diversos factores que forman parte de la realidad, haciendo que la acción juegue un papel importante para que el sociólogo pueda interpretar y entender el comportamiento humano.
- El sentido de análisis se trasluce mejor, siguiendo a Habermas en un significado de análisis, y clarificar este punto hace que desarrolle su propia teoría del lenguaje y de la comunicación.

El planteamiento reconstructivo de la sociedad se distingue de la metodología que pone en práctica, las ciencias humanas o sociales se proponen comprender una realidad simbólicamente estructura, tratando de descubrir y explicar la realidad observada mediante la formulación de hipótesis; estas han de comprender el sentido de estos productos simbólicos que son las

prácticas culturales. Y lo hace mediante la reconstrucción racional de los supuestos subyacentes a estas prácticas. El objetivo de una reconstrucción racional de este tipo, es dar a la luz el conjunto de reglas, operaciones y estructuras que los sujetos han de dominar para hablar y actuar, haciendo explícito que el saber teórico se encuentra implícito en la competencia del mismo sujeto y tienden a generar determinados productos simbólicos.

5.1.2.5. LA RACIONALIDAD Y LA ACCIÓN COMUNICATIVA

La teoría de la acción comunicativa se convierte en una teoría que analiza la sociedad moderna utilizando a la teoría del lenguaje como un resguardo doctrinario o conceptual. De igual forma, su postura crítica al respecto, no se encarga únicamente de describir sucesos o hechos sociales contemporáneos, sino integrar los mecanismos de alienación (normas) y contribuir a solucionar conflictos sociales, actuando de esta forma como un modelo normativo capaz de criticar aquellas prácticas sociales comunicativas que se alejen de la ética o verdad.

En ese sentido, Rey Cantor percibe que existen dos tipos de racionalidad, una que se encarga de instrumentalizar las decisiones de pocos y otra que se encarga únicamente de llevar el mensaje, haciendo que la interacción y la acción sea un fundamento principal para validar dicha teoría. (Rey Cantor, 2008)

Asimismo, puede evidenciarse que la racionalidad comunicativa se encuentra presente en el habla cotidiana que tiene la finalidad del

entendimiento en cada estrato social, haciendo que las sociedades modernas pueden verse inmersas dentro de conflictos por falta de entendimiento.

Debemos entender que todo símbolo lingüístico debe estar acompañado de veracidad y validez, haciendo referencia o mencionando hechos objetivos que puedan ser medibles en el mundo de los sistemas (normas, reglas, tablas, etc.), buscando que la crítica sea sostenida entre los argumentos o posturas planteadas.

5.1.2.6. EL DERECHO EN LA ACCIÓN COMUNICATIVA

Häberle constata que en una sociedad en la que prevalecen los sistemas económicos y burocráticos, hacen que su autonomía que parte del contexto de la sociedad (mundo de vida), acaben “tomando el control”, es decir, generando ámbitos más extensos del mismo mundo de vida. En este sentido, la juricidad se convierte en uno de los instrumentos de perpetración del mundo de vida, haciendo que el derecho se convierta así en un instrumento de alienación en la medida que contribuye a sustituir el lenguaje del mundo de la vida por código o normas que regulen el sistema económico y burocrático (dinero y poder) cortando las fuentes que deberían permitir la reproducción de las estructuras simbólicas de este mundo de vida (cultura, sociedad y persona), (Häberle, 2008).

La concepción de derecho que maneja la Teoría de la Acción Comunicativa es dual, ya que Habermas distinguía el derecho como instrumento y el derecho como medio, entendiendo a este último concepto como facilitador de la

organización de los sistemas económicos y de poder, al mismo tiempo el derecho como institución conlleva a que los sistemas de la economía y el Estado se articulen y queden conectados con el mundo de vida generando un espacio para el mundo de vida, si bien es cierto considera que el derecho es un mecanismo de control social y de garantía de libertades, (Habermas, 1985).

Es así, que el derecho (como norma) se convierte en una restricción para ejercer de manera plena nuestros derechos fundamentales, siendo necesario y de suma importancia para una convivencia pacífica, en ese contexto encontramos en literatura jurídica la relación existente entre el Estado y el Derecho, permitiendo que se encuentre una vinculación entre el orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales, debe advertirse que la necesidad por vincular estas categorías radica en la protección de la persona que se convierte en el fin supremo del Estado y del Derecho.

El concepto de derecho, que se encuentra plasmado en la introducción de la teoría de la acción comunicativa, aparte de otorgarle un concepto dual, verifica que debe coexistir la factibilidad y validez esta relación se somete al fenómeno jurídico cuando la veracidad de los marco jurídicos subyacen a la estructura propia de la sociedad, en donde se produce una clara revalorización del papel del derecho en sociedades modernas hasta el punto que el derecho pasa a ocupar una posición central dentro de la misma teoría de la acción comunicativa que se explica mucho mejor en la conexión entre el mundo de vida y el mundo de sistemas, en el nuevo esquema el derecho juega un papel

de transformación del circuito de comunicación entre sistema y mundo de vida y es considerado como el verdadero cimiento de la sociedad.

Habermas, convencido de que el factor de una teoría radica en el establecimiento de un orden comunicativo cotidiano a pesar de todas las distorsiones inimaginables, podemos imaginarnos a cada instante con los contenidos cognitivos, las expectativas morales y las autoexpresiones, cuyas valoraciones individuales se encuentran permanentemente interrelacionadas, nos da la pista de que podemos ir a buscar todavía la raíz común de estos diferentes aspectos de racionalidad, (Habermas, 1985).

Es así que podemos analizar que su postura crítica deja verse más como una consecuencia lógica de su propia posición teórica, ello se refleja por un lado en ese esfuerzo por construir una teoría que permitirá ofrecer un diagnóstico de la modernidad con intenciones transformadoras.

5.2. TEORÍAS CONEXAS A LA TEORÍA DE LA ACCIÓN COMUNICATIVA

5.2.1. TEORÍA DE LA ACCIÓN SOCIAL DE WEBER

Para Weber, acción social, es cualquier tipo de proceder humano que se orienta por las acciones de otro, siendo estas presentes o futuras. En ese sentido se puede apreciar que esta acción, está referida a la conducta del otro sobre nuestras acciones, y los niveles de intersubjetividad en cada una de las decisiones, en ese sentido clasifica la orientación del proceder social en: (Weber, 1964)

1. Acción racional con arreglo a fines, los sujetos orientan su acción de acuerdo al fin o consecuencia que se pretenda alcanzar
2. Acción racional con arreglo a valores, no tiene una orientación directa al resultado y se basa en el valor que se le otorgue a la acción, siendo esta ética, religiosa, estética, etc.
3. Acción afectiva, se cimienta en estados de ánimo o sentimientos actuales
4. Acción tradicional, tiene su origen en la costumbre que se ha ido adquiriendo de generación en generación.

Asimismo, debe entender que no toda relación o contacto entre personas genera un carácter social, sino que aquella que origina este carácter debe ser una que tenga sentido. Asimismo, es preciso señalar que la acción social es disímil a la una de la otra. En esa misma línea de idea, Weber, menciona que una acción será social, si cumple con los dos siguientes requisitos: que se otorgue un sentido subjetivo a la acción, y que tome en cuenta la conducta de otro y se oriente a ella.

Figallo inicia criticando a Weber debido a que solo considera (en su concepción) aquellas conductas racionales y aparta la concepción de lo no instrumental de la acción, en ese sentido toma algunas orientaciones de la teoría de la acción social de Weber, como es: uso, interés y orden legítimo, asemejando una relación entre lo normativo y lo condicional, dejando al libre albedrío la interpretación normativa por parte del actor. (Figallo A, 2002).

5.2.2. TEORÍA DE LA ACCIÓN SOCIAL DE PARSONS

Bajo la concepción de Parsons, cualquier fenómeno, es un sistema que puede descomponerse en menor nivel de acuerdo al análisis respectivo, siendo que la acción social puede disgregarse hasta llegar al acto unidad, definiendo este nivel inferior en la existencia del acto, su finalidad, medios y condiciones, y los valores que orientan el actuar del actor, incluyendo de esta forma elementos de la vida real, lo que Parsons denomina “condiciones” que el actor no puede controlar y que son independientes a este, y el cuerpo del ser humano es considerado como un medio para llevar a cabo las acciones logrando de esta forma satisfacer sus necesidades personales, sociales y culturales, (Parsons, 1984).

Para Parsons, el concepto de la inclusión radica en el sentido de tener acceso por la vía de los roles complementario a todos los subsistemas de la sociedad, siendo así que no todos pueden ser médicos, pero todos pueden ser pacientes; no todos pueden ser profesores. pero todos pueden tener acceso a la enseñanza; no todos pueden ser vendedores. pero todos pueden ser compradores, (Parsons, 1984).

En resumen, la Teoría general de la acción de Parsons, se centra en determinar la voluntad del actor para alcanzar sus objetivos o metas mediante su intervención dentro de su entorno físico, social y cultural.

5.2.3. TEORÍA DE LA SOCIEDAD DE DURKHEIM

Por su parte, Durkheim se encarga de observar que la coerción ejercida sobre los individuos hace que se presente independencia en las formas individuales, considerando para tal fin, al hecho social como un fenómeno que puede ser colectivo, cuando es común a todos los integrantes de la sociedad, o a la mayoría, y por consiguiente es general. Siendo necesaria para la construcción de un hecho social: la exterioridad, la coerción, la colectividad, y la internalización. (Durkheim, Las reglas del método sociológico, 1985)

En ese sentido, establece categorías a los hechos sociales, siendo estas:

- Las creencias y las practicas constituidas, entiéndase como aquella relación donde se encuentra una organización definida
- Las corrientes sociales que no están organizadas, indignación sobre un hecho social
- Movimientos de opinión

Siguiendo a Durkheim, este se encarga de compartir la idea de Comte acerca que solo una elite puede orientar y apreciar la fuerza colectiva que se ejerce sobre la sociedad, en ese sentido manifiesta que la acción social sigue diversos caminos oscuros y desviados, asimismo emplea mecanismos complejos para que un observador puede apreciar su origen.

Asimismo, afirmaba que las personas que deberían guiar la acción colectiva debían ser los intelectuales mediante reformas a la normatividad y al derecho, concibiendo que el conocimiento sería el factor diferenciador adecuado para

continuar con el progreso de la sociedad, aduciendo además que el lugar principal donde se ejerce mejor la acción social, es el derecho.

En este orden, podemos advertir la naturaleza bipartida de la acción social, por un lado tenemos la concepción negativa donde cobraba relevancia el derecho penal y la acción positiva que era propicia del derecho civil, dichas formas son convergentes con la necesidad de la sociedad y garantiza la convivencia armoniosa y pacífica.

La percepción de cada una de las teorías antes mencionadas, hacen que se puede condensar la información y arribar a que cada una de ellas manifiesta un aporte significativo en la construcción de la sociedad, entendiendo que Weber desde su concepción analiza el actuar humano desde una perspectiva que según Parsons es limitativa, ya que no solamente se debe analizar aisladamente al ser humano o persona, sino que debe analizarse a la sociedad teniendo en cuenta cada uno de los parámetros que este no puede controlar, y para Durkheim este posicionamiento en el ámbito social lograra la participación colectiva para alcanzar objetivos comunes y transversales, (Durkheim, 1987).

Para el presente trabajo de investigación, debe tenerse en cuenta que la acción social conjunta de cada uno de los ciudadanos conllevará a la participación masiva de la sociedad y de esta forma se lograra proteger adecuadamente el derecho a vivir en un medio ambiente a través de su involucramiento directo en la toma de decisiones y en la ejecución de acciones.

5.2.4. TEORÍA DE LA FACTIBILIDAD Y VALIDEZ

Para Habermas, la factibilidad y validez depende del espacio y tiempo en que se encuentra la sociedad, bajo esta perspectiva el lenguaje cobra vital importancia al momento de lograr la integración de las personas socializadas, manteniendo las órdenes sociales y haciéndolos perdurar en el tiempo. (Habermas, 1985).

Asimismo, analiza a la validez, desde la perspectiva social donde prevalece la aceptación de las normas jurídicas por los miembros de una comunidad en donde se desee aplicar la normatividad específica; desde la perspectiva convencional, en este sentido se debe tener en cuenta los usos y costumbres, haciendo mención a la factibilidad artificial producida por la amenaza que representa la sanción normativa ante el incumplimiento o encuadramiento de tipo penal que puede verse inmerso y reclamado en los Tribunales; finalmente la validez del derecho se manifiesta legítima y posiblemente cuando se sustente en la validez jurídica.

En este sentido, hace prevalecer los conceptos de la racionalidad comunicativa donde se observa la confiabilidad de los argumentos planteados en la teoría del discurso, donde se evidencia la necesidad de otorgarles validez y factibilidad. Menciona además, que el factor de legalidad solo se satisface con el acatamiento mientras que para la legitimidad surge de la posibilidad de aprobación

Esta teoría permite que podamos observar la efectividad del aparato normativo, ya que el bagaje normativo es diverso para la protección de derechos de diversa índole y se han creado programas que no han logrado la efectividad, o

se han implementado medidas que no garantizan la efectividad de la sanción, bajo esta concepción se analiza la necesidad que haya un involucramiento directo de los ciudadanos para que puedan otorgarle legitimidad a cada uno de los actos del aparato estatal, y consecuentemente lograr la aprobación de las medidas coercitivas o limitativas que permitan una protección adecuada del derecho a vivir en un medio ambiente sano y equilibrado.

5.2.5. TEORÍA DE LOS SISTEMAS

Schütz establece que bajo la concepción del sistema, se trata de reducir la complejidad, así como equiparar equivalentes que pueden dar soluciones a problemas similares. En esta teoría podemos observar la necesidad de incorporar todos los tipos diferentes de sistemas teniendo en cuenta las condiciones indistintas de su complejidad que se deberá reducir para un mejor entendimiento. (Schütz, 1972)

El autor antes mencionado, inicia con la concepción de que los sistemas existen y coexisten simultáneamente, asimismo menciona que los sistemas sociales no deben analizarse aisladamente sino en la necesidad de interactuar, organizaciones, sociedades e intereses particulares, asimismo se evidencia que el sistema y el entorno mantienen una unidad indisoluble, siendo que los sistemas se mantienen y constituyen por medio de la creación y conservación de las diferencias con el entorno.

Para analizar a la Sociedad Lutz, descompone el análisis de la misma en los siguientes niveles: (Lutz, 2007)

- La teoría de los sistemas y dentro de ella, la teoría de los sistemas autopoieticos, llegando a efectivamente a decisiones conceptuales y los resultados de investigaciones empíricas sirven para la construcción de otros sistemas
- La teoría de los sistemas sociales, son comprendidos por la comunicación como aquel intercambio de códigos generando un contacto entre las conciencias individuales
- La teoría del sistema de la sociedad

Para ello, se trató en la presente tesis, de descomponer a la sociedad para analizarla integralmente desde la percepción inicial que tienen acerca de la realidad, así como de los problemas de su entorno para centrarnos en propuestas de involucramiento que permitan satisfacer los puntos necesarios y convergentes referidos a los derechos humanos, y entre ellos el derecho a vivir en un medio ambiente sano y equilibrado.

5.2.6. TEORÍA DE LOS ACTOS DEL HABLA

Para Touraine (1969), la teoría de los actos del habla, parte de la presunción de que las oraciones declaratorias no se utilizan únicamente para hacer descripciones, sino además para realizar “actos verbales”, además agrega la concepción de la veracidad, (Touraine, 1969). Así mismo, se centró en ahondar

en los problemas de identificación de los actos del habla, así como aquellos actos indirectos que se encuentran inmersos en la comunicación.

Siendo así, que el ser humano realiza actos ilocucionarios cuando se comprometen a una conducta que se encuentra gobernada mediante normas, haciendo que los actos se constituyan por reglas, proposiciones y significado.

Esta comunicación, debe evidenciarse en los mecanismos propios de la entidad competente que se encargue de proteger adecuadamente el derecho a vivir en un medio ambiente sano y equilibrado, por tal motivo se creyó conveniente que aquellos actos del habla se acompañen por acciones donde se manifieste la participación colectiva en la toma de decisiones pertinentes para lograr un espacio de diálogo donde se demuestre la necesidad de seguir estructurando parámetros sociales que inciten al involucramiento y a la puesta en marcha de políticas que parte del gobierno central o local para velar adecuadamente por los intereses de la sociedad.

5.3. LA INEFICACIA DE LAS POLÍTICAS MEDIOAMBIENTALES POR FALTA DE COMUNICACIÓN

Habiéndose analizado las categorías concurrentes de la teoría de la acción comunicativa de Giddens y aquellos conceptos necesarios que hacen que la necesidad de analizar la problemática ambiental salga de los marcos jurídicos, se encuentra una relación existente entre los presupuestos de la acción comunicativa y la estructura del estado, y por ende su ineficacia, siendo que la estructura de nuestro Estado es vertical y las decisiones tomadas desde el Gobierno Central

deben ser respetadas y ejecutadas por las entidades federativas, esto promueve que la falta de relación entre el mundo de vida (proyección de un modelo personal de ciudad) se vea afectado por el mundo de sistemas (mundo normativo, entre otros), haciendo que el entendimiento de cada uno de los objetivos de las políticas de Estado sean relativizadas o desconocidas. (Giddens, 2006)

La problemática medioambiental hace que retomemos presupuestos tales como la acción comunicativa y la diversidad de teorías para poder analizarla, contrastarla, evaluarla y proponer algunos planes de mejora y efectivizar de esta forma los presupuestos necesarios para lograr el desarrollo sostenible en nuestro país. Es así que debemos recordar que la teoría de la acción comunicativa nace de la teoría de lenguaje haciendo de esta una teoría de vinculación con la teoría de la racionalidad cuya finalidad se centra en determinar la factibilidad o validez de un argumento y la verdad y justificación de otro.

La concepción que conlleva la teoría del discurso hace que retomemos aquellas concepciones como el derecho, la democracia y el poder, a fin de comprender la forma de relación en la teoría de la acción comunicativa.

Asimismo, debemos advertir que la razón comunicativa debe enlazar fundamentos de la racionalidad con lo discursivo, es decir, generar una argumentación basada en el razonamiento y orientada al entendimiento de la sociedad haciendo que teorías tales como el contrato social, y demás teorías relacionadas a la sociedad puedan tener una base fundamental en la comunicación. Es por ello que la teoría de la acción comunicativa desarrolla

una teoría de la sociedad, es decir un modelo de sociedad y ciudad pero agrega una clave comunicativa y la confronta con fundamentos filosóficos - lingüísticos de una teoría de la racionalidad generando de esta forma una interacción simbólicamente mediada.

De igual forma se puede decir que la interacción simbólicamente mediada se rige por normas obligatoriamente válidas que definen expectativas recíprocas de comportamiento, entiéndase que deberían ser reconocidas al menos por dos sujetos agentes haciendo que la validez se base en reglas, técnicas y estrategias, y que dependa de enunciados que sean empíricamente verdaderos y analíticamente correctos, por su parte la validez de las normas sociales sólo se fundamenta en la intersubjetividad del entendimiento, es decir, sobre intenciones y sólo asegura reconocimiento general de las obligaciones. En este contexto, la teoría de la acción comunicativa rompe con la primacía de la teoría del conocimiento y trata que las suposiciones generadas en la acción orientada al entendimiento con independencia de los presupuestos sean trascendentales al conocimiento, esta teoría no es una meta teoría, sino que constituye por ella misma el principio de una teoría de la sociedad que se esfuerza por informar de los cánones críticos que utiliza.

La teoría de la acción comunicativa trata de enlazar de manera sistemática lo siguiente:

1. desarrollar un nuevo concepto de racionalidad.
2. entender a la sociedad con un complejo articulado es decir una relación entre la percepción de vida que tienen y el sistema que lo rodea.

3. elementos necesarios para desarrollar la teoría de la modernidad explique las patologías que describan hoy en día las sociedades desarrolladas o en vías de desarrollo.

La práctica comunicativa cotidiana hace posible un entendimiento orientado por pretensiones de validez dejando como única alternativa a la influencia recíproca de medios, haciendo que trasciendan su propio contexto y se verifiquen más allá de su origen en donde se encuentran delimitadas por el espacio y el tiempo, todo acuerdo logrado comunicativamente tiene que apoyarse sobre un potencial de razones y éstas deben ser construidas de tal forma que no obliguen a tomar posición entre un sí o un no. Con ello, las condiciones de la acción orientada al entendimiento llevan incorporado un elemento de incondicionalidad. Y es este elemento el que diferencia a la validez que reclamamos para nuestras pretensiones, desde la simple vigencia social como una práctica meramente convencional. Lo que consideramos justificado es que desde la perspectiva de la primera persona se cuestiona la posibilidad de fundamentación y no en función de los hábitos o costumbres vitales, haciendo que el mensaje adolezca de validez. Por ese motivo existe un interés filosófico en ver nuestras prácticas sociales de justificación en algo más simples hasta prácticas. (Baldassarre, 2001) Encontramos este mismo interés en la obstinación con que la filosofía se aferra el papel de protectora de la racionalidad; un papel que cada vez causa más disgustos y sin duda ya no tiene ningún privilegio

5.4. DERECHO A VIVIR EN UN AMBIENTE SANO Y EQUILIBRADO

En la actualidad constituyen opinión generalizada que la protección del medio ambiente es una preocupación global y su análisis tiene un tratamiento prioritario en los temas de la agenda internacional. Numerosos documentos internacionales como nacionales se encargan de corroborar dicha problemática. Así mismo, la protección de derechos humanos también posee la actualidad, relevancia mundial y, en el ámbito internacional, ha precedido a la preocupación por el medio ambiente. Según Badii la definición más famosa en la literatura del desarrollo sustentable, es decir, la de la Comisión de Brundtland del ONU emitida en 1987 que lo describe como “aquel desarrollo que reúne las necesidades de la presente generación sin sacrificar la habilidad de las futuras generaciones para reunir sus necesidades”, esta es frecuentemente criticada y considerada como vaga, o según los expertos, no operacional (BADII, 2007). Por esta razón O’Riordan (The politics of sustainability, 1988) reportó que al permitir que la gente utilice esta definición de la Comisión de Brundtland, cualquier cosa se puede reclamar como parte del desarrollo sustentable. En este concepto es evidente la preocupación por la solidaridad intergeneracional, esto es, cómo el desarrollo de las actuales generaciones no puede comprometer la posibilidad de las futuras generaciones de sujetar los mismos derechos.

En este contexto, el Derecho al Desarrollo en una evaluación si no se contempla su evolución de sustentabilidad indica el bienestar presente y no necesariamente la capacidad para mantener este a un largo plazo, el bienestar presente depende a la par de recursos económicos, como los ingresos, y de

características no económicas de la vida de las personas: lo que hacen y lo que pueden hacer, la valoración de su vida, en su entorno natural. La sustentabilidad de estos niveles de bienestar depende de la cuestión de saber si los stocks de capital que importan en nuestra vida (capital natural, físico, humano, social) se transmitirán o no a las generaciones futuras (Stiglitz, 2008)

El desarrollo sustentable es un punto de acuerdo para los ambientalistas y los desarrolladores. Ya que tanto los ambientalistas, enfatizando la parte sustentable y los desarrolladores, enfatizando la parte del desarrollo se sienten cómodos con el concepto del desarrollo sustentable (O'Riordan, 1988)

El punto clave se radica en el significado del desarrollo. Para algunos, el desarrollo significa el mejorar los prospectos para el hombre, para otros, quiere decir, el desarrollo de recursos humanos, y aún más, otra persona puede definir el desarrollo en término del crecimiento. Por tanto, si no se puede tener un consenso sobre la noción del desarrollo, ¿cómo se espera tener una definición verdadera del desarrollo sustentable? De aquí sobresale que el problema de tener una definición precisa no es tan importante como ponerse de acuerdo sobre los valores que están implícitos en la definición (Badii, 2007).

La protección de los derechos humanos es diferente de la protección del medio ambiente. La mayor parte de la doctrina reconoce que la responsabilidad y la protección de los derechos humanos corresponden a todos. Es decir, todos los individuos y los Estados del mundo tienen una aplicación similar respecto a la protección del cumplimiento de los derechos humanos. No obstante, en el caso de

la protección del medio ambiente, esta obligación se cumple de maneras distintas. En efecto, tal como lo reconoce el principio 7° de la declaración de Río de Janeiro de 1992, conocido como el principio de corresponsabilidad asimétrica, la responsabilidad y la protección del medio ambiente global son comunes pero diferenciadas. En otras palabras, esto quiere decir que aquellos Estados que han utilizado menos sosteniblemente sus recursos naturales en el pasado, y por ello los han degradado, en mayor medida, el medioambiente global, tiene una responsabilidad mayor ante la solución de los graves problemas ambientales que aquejan hoy a nuestra sociedad; esto último no debe perderse de vista.

Tratándose de los países en desarrollo y, en particular, de los países latinoamericanos, la protección de los derechos humanos y la protección del medio ambiente están íntimamente vinculadas. Y no sólo por la temática o problemáticas creada por la contaminación o por los elevados índices de pobreza, que es considerada un grave problema ambiental en el sur, sino también por el grave problema que representan las poblaciones indígenas amazónicas que, muchas veces, por razones diferentes son desplazados de sus localidades y de esta forma pierden sus derechos humanos y fundamentales.

5.5. EL DERECHO HUMANO A UN MEDIO AMBIENTE SANO Y EQUILIBRADO

Un sector de la doctrina internacional, especialmente francesa, ha postulado la existencia de un derecho humano al medioambiente. Para firmarlo en un sentido

más estricto se debe señalar que lo que existe es el derecho humano a un ambiente sano y equilibrado. En nuestro entender, este planteamiento ingresa en la categoría de derecho humano y es un derecho que posee toda la humanidad, incluyendo pueblos e individuos.

El derecho a un ambiente sano y equilibrado tiene un reconocimiento importante en el aspecto jurídico internacional. Sin embargo, no debemos olvidar que la declaración de Estocolmo no conlleva cumplimiento obligatorio dado que una declaración, según el derecho internacional, posee un carácter no vinculante. Por ello, en opinión de un gran sector de la doctrina internacional los principios de la declaración de Estocolmo no generan obligaciones internacionales susceptibles de ser seguidos por todos los estados. Un segundo instrumento legal incorpora el llamado derecho al medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado y la carta africana de derechos humanos y de los pueblos de 1981 en cuyo artículo 24 señale expresamente que todos los pueblos tienen el derecho a un satisfactorio medio ambiente favorable a su desarrollo.

Un tercer instrumento sugiere que la idea del derecho al medio ambiente como derecho fundamental se puede encontrar en el protocolo adicional de la convención americana de derechos humanos en el área de los derechos económicos, sociales y culturales, adoptado en el Protocolo de San Salvador, que es un Protocolo Adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos, el 17 de noviembre de 1988. Concretamente, podemos encontrar en los artículos 10 y 11 que toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos, y que los Estados partes promoverán la protección,

preservación y mejoramiento del medio ambiente. En este instrumento internacional, vinculante para México, se reconoce que los Estados tienen obligaciones relativas a la protección del medio ambiente que son necesarias para el cumplimiento de otros derechos garantizados por los instrumentos del Sistema Interamericano. Las obligaciones para los Estados respecto al derecho al medio ambiente sano son al menos las siguientes cinco:

- Garantizar a toda persona, sin discriminación alguna, un medio ambiente sano para vivir
- Garantizar a toda persona, sin discriminación alguna, servicios públicos básicos
- Promover la protección del medio ambiente
- Promover la preservación del medio ambiente
- Promover el mejoramiento del medio ambiente

En palabras de Aldave (2005), el derecho a vivir en un medio ambiente sano y equilibrado, debe considerarse como un nuevo derecho humano fundamentalmente por dos razones: en primer lugar, porque aceptar la existencia de este derecho refuerza y garantiza los otros derechos humanos que reconoce a las personas y naciones, y en segundo lugar porque este derecho reconoce tácitamente los derechos de las generaciones futuras, los llamados derechos intergeneracionales. Así, por ejemplo derechos humanos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales no podrán ser ejercidos en un mundo donde la

responsabilidad haya dañado incluso destruir el medio ambiente global. De este modo, el reconocimiento de este derecho debe entenderse, necesariamente, como una precondition para la existencia y disfrute de los otros derechos Humanos en el mundo, (Aldave, 2005).

5.6. EL DERECHO AL MEDIO AMBIENTE COMO UN DERECHO HUMANO DE TERCERA GENERACIÓN

Un sector de la doctrina considera que este derecho se encuentra dentro de los derechos de tercera generación, pero sobre el particular, debemos recordar que la UNESCO en el año de 1993 hizo una categorización de los derechos en cada una de sus escalas, es así que los derechos humanos de primera generación son los que incorporan los derechos civiles y políticos, derechos derivados, fundamentalmente, de los conceptos generados durante las revoluciones tanto americana como francesa.

Por último, los derechos humanos de tercera generación, a los cuales pertenecería el derecho al medio ambiente junto con el derecho a la paz y el derecho al desarrollo, entre otros, son los más novedosos, aunque no gozan todavía de un reconocimiento general por parte de todos los estados. Algunos autores consideran que estos derechos se derivan de conceptos como el de la solidaridad entre las naciones, idea que es fruto de los, cada vez mayor, procesos de interdependencia entre los estados.

Sobre el particular existe una gran discusión entre los autores internacionales para determinar: uno si realmente existe una categoría de derechos humanos denominado de tercera generación; y dos, de ser así, para considerar si se puede aceptar el derecho el medio ambiente como uno de ellos.

5.7. ALGUNAS REFERENCIAS EN EL CONSTITUCIONALISMO COMPARADO SOBRE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE: SU RELACIÓN CON LOS DERECHOS HUMANOS

Así como existen textos internacionales que recoge la figura jurídica del derecho humano al medio ambiente, algunas constituciones nacionales también le incorporan; unos de manera más extensa, otros de manera más restringida. En todo caso, es indudable que este derecho está siendo cada vez más constitucionalizado a nivel mundial.

Es así que Andaluz, considera que las constituciones que abordan la temática ambiental se pueden clasificar de tres maneras: a) Como constituciones que reconocen el derecho a un ambiente adecuado; b) Como constituciones que proclaman el derecho del Estado o de los ciudadanos de gozar de un ambiente; y c) Como constituciones introducen la temática ambiental sin señalar derechos o deberes específicos. (Andaluz Westreicher, 2004).

5.8. CONCEPCIÓN NORMATIVA

Si retrotraemos la percepción histórica podemos observar que este derecho tiene su aparición en la Declaración de Estocolmo sobre medio ambiente en Suecia en el año de 1972. A nivel infraconstitucional existe el primer reconocimiento en la Constitución Portuguesa de 1976, en la Constitución de 1977 de la extinguida Unión Soviética y en la Constitución Española de 1978.

De igual forma, el mencionado derecho, se encuentra regulado en el artículo 11 del Protocolo de San Salvador que adiciona a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en materia de derechos económicos sociales y políticos.

En México los derechos humanos y el derecho al medio ambiente en particular, son de arquitectura internacional. El derecho al medio ambiente se incluyó por primera vez en 1999, en el artículo 4 constitucional el cual señalaba que “Toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar”. El 8 de febrero de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforma el párrafo quinto y se adiciona un párrafo sexto al artículo 4 de la CPEUM, estableciendo que “...Toda persona tiene derecho a un medio sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a ese derecho, el daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley... Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades

para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.”

El derecho humano al medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar posee una doble dimensión; por una parte, dicha prerrogativa protege el ambiente como un bien jurídico fundamental y expresa el papel indiscutible que este tiene en la realización de un plan de vida digno, a través del aseguramiento de las condiciones óptimas del entorno y la naturaleza, más allá de su relación con el ser humano y de la apreciación que este haga sobre aquellos, reconociendo que su valor intrínseco deriva de que su proceso o los procesos que la integran continúan y siguen aparentemente en un sentido: reproducirlo vivo, seguir existiendo, en su esfuerzo constante de adaptarse para sobrevivir, incluso a la acción humana, y, por la otra parte, la protección de este derecho humano constituye una garantía para la realización y vigencia de los demás derechos, atendiendo al principio de interdependencia, ya que, como se acaba de señalar, el ser humano se encuentra en una relación indisoluble con su entorno y la naturaleza, por lo que nuestra calidad de vida, presente y futura, nuestra salud e incluso nuestros patrimonios material y cultural están vinculados con la biosfera; en este sentido, la dignidad, la autonomía y la inviolabilidad de la persona dependen de su efectiva defensa. En otras palabras, nuestra vida depende de la vida del planeta, sus recursos y sus especies (Comisión Nacional de los Derechos Humanos México, 2014).

CARACTERÍSTICAS DEL DERECHO HUMANO AL MEDIO AMBIENTE EN MÉXICO				
Difuso	Intergeneracional	Atemporal	Disperso	Transversal
Exhibe una dimensión colectiva, de afectación de bienes públicos, o derechos compartidos por todos en igualdad de condiciones	No sólo le pertenece este derecho a las generaciones presentes, sino preponderantemente a las generaciones futuras	Su magnitud es impredecible y puede pertenecer a todas las épocas	Las normas ambientales no se encuentran codificadas; existen en la legislación laboral, fiscal, sanitaria, y administrativa	Involucra múltiples disciplinas y se encuentra en constante evolución

Fuente: Elaboración Propia

Asimismo, Burgos, se encarga de evidenciar que el medio ambiente se convierte en el conjunto de elementos sociales culturales bióticos y abióticos que interactúan en un espacio y tiempo determinado, lo cual podría graficarse como la sumatoria de naturaleza y las manifestaciones humanas en un lugar y tiempos concretos. (Burgos, 2008)

Por su parte, la Constitución Política, se orienta al disfrute de la persona de su medio ambiente generando una relación directa entre sus necesidades, producción y promoción del mismo, generando de esta forma una armonía entre el desarrollo y la conservación del medio ambiente.

Desde una perspectiva práctica, se puede advertir que el ambiente puede ser afectado por alguna de las siguientes cuatro actividades que mencionaremos a continuación:

1. Actividades molestas, generadas por los ruidos o vibraciones, así como por embarcaciones de humos gases, olores, nieblas y otras sustancias.
2. Actividades insalubres, estas ocurren cuando se vierten productos artificiales en el ambiente que pueden resultar perjudiciales para la salud y para el entorno ambiental.
3. Actividades nocivas, estas se generan cuando se vierten productos al ambiente que afectan y ocasionan daños a la riqueza agrícola forestal y pecuniaria.
4. Actividades peligrosas, que se producen debido a las explosiones, combustiones o radiaciones generando graves daños en las personas o sus bienes, y por lo tanto afectando directamente al medio ambiente.

Tal como lo manifiesta, Brañes, la preocupación y reconocimiento del ambiental como parte coadyuvante de la defensa y justicia de la dignidad, así como del desarrollo de la persona, surge la necesidad de establecer en cada Estado, un sistema de protección jurídica de las condiciones que hacen posible la vida, cuya complejidad a veces no es acorde con los marcos normativos. (Brañes, 1994)

En este contexto, la Constitución no sólo garantiza la existencia física de la persona sino que protege a esta frente a los ataques de su medio ambiente, es decir, de lugar en donde el cual se desenvuelve su existencia para así permitir que el desarrollo de la vida se realiza en condiciones de ambiente aceptable.

Siguiendo Borrás a través del derecho que reconoce la protección al medio ambiente se ha logrado establecer el proceso concreto de interacción entre el hombre y el medio ambiente, y de esta forma lograr su conservación y preservación, (Borrás P, 2014).

El establecimiento de este derecho apunta por un lado a racionalizar la explotación económica de los recursos naturales y por el otro fundamentalmente a permitir de un goce equilibrado y que garantice la protección del entorno.

Al respecto, en España, se presentó el Caso: “Gobierno Vasco” recogido en la STC 102-1995, donde su Tribunal Constitucional señala que el medio ambiente “es el entorno vital del hombre y se genera en un régimen de armonía que aúna lo útil con lo grato”, (4to fundamento jurídico, 3er párrafo). En ese sentido los elementos del ambiente, ya no sólo aparecen como objeto de disfrute antes de que los recursos formen parte de un proceso de transformación para los fines del proceso económico sino también para el goce contemplativo y el esparcimiento común.

Bajo esta concepción, el modelo económico constitucional implica modificar las pautas del crecimiento económico con la finalidad de garantizar en su totalidad la calidad de vida y el desarrollo de la persona. Ahora bien, el derecho al goce de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida no puede realizarse individualmente de forma restrictiva, ya que el ambiente pertenece a todos, por ello se debe garantizar el simultáneo disfrute y codisfrute solidario y con correspondencia del deber y conservación hasta el mejoramiento.

Según Canosa (2000), el derecho a gozar de un ambiente saludable se relaciona con las siguientes facultades:

- A. Facultad de acceso a los bienes ambientales, esta consiste en el atributo dentro de un marco regulatorio previsto por el estado de llegar ingresar y recorrer y de ser el caso permanecer durante un lapso en un lugar ambiental
- B. Facultad de contemplación, esta consiste en el atributo de observar examinar considerar y sentir los fenómenos estéticos que fluyen de un lugar ambiental
- C. Facultad de uso, esta consiste en el atributo de servirse y disponer de un recurso ubicado un lugar ambiental siendo estas facultades objeto de restricciones y limitaciones en su goce con fines de preservación

Dicho derecho, en principio establece un derecho subjetivo intrínseco y fundamental, siendo el titular el ser humano que es considerado en sí mismo, ya que será quien disfrute, goce y conserve el medio ambiente, sin razón de nacionalidad, (Canosa Usera, 2000).

En palabras de Gonzales el derecho a gozar de un ambiente sano y equilibrado, “concurrentemente se trata también de un derecho de interés difuso en el sentido que la legitimidad procesal para su defensa judicial es asignable a todos y cada una de las personas”. (Gonzales, 2007)

Desde esa perspectiva a lo anteriormente expuesto implica una capacidad o potestad auto determinativa para disfrutar del entorno, y por tanto a no ser

molestado en su goce, en tanto se actúe dentro de las condiciones legales y legislativas judiciales procesales establecidas por el estado.

En consecuencia por tratarse de un derecho que no pertenece a una sola persona, sino a una pluralidad se deriva un interés difuso, un interés colectivo. En este orden de ideas, Vera (1992) haciendo mención a las nuevas formas de la responsabilidad civil manifiesta que:

Los intereses de pertenencia difusa son aquellos que forman parte de manera homologa a una pluralidad de sujetos en cuanto integrante de un mismo grupo clase o categoría de personas que se encuentran ligados a la pretensión individual de uso o goce de una misma prerrogativa ya sea legal o no, es por eso que la satisfacción o lesión del fragmento o proporción del interés que atañe a cada individuo se extiende por naturaleza al resto de los miembros del colectivo al que pertenece, (Vera Esquivel, 1992).

Haciendo referencia al derecho a Vivir en un medio ambiente sano y equilibrado, dentro de la teoría de Derechos Humanos, Alexy (1993) menciona que:

Así, quien propone el establecimiento de un derecho fundamental ambiental o su adscripción interpretativa a las disposiciones ius fundamentales existentes puede, por ejemplo, incluir en este haz un derecho a que el Estado omita determinadas intervenciones en el medio ambiente (derecho de defensa), un derecho a que el Estado proteja al titular del derecho fundamental frente a intervenciones de terceros que dañan el ambiente (derecho a protección), un

derecho a que el Estado permita participar al titular del derecho en procedimientos relevantes para el medio ambiente (derecho al procedimiento) v un derecho a que el propio Estado realice medidas fácticas tendientes a mejorar el ambiente (derecho a una prestación fáctica. (Alexy, 1993)

Este carácter, que permite la actuación de la colectividad ante la vulneración de este derecho, no lo hace excluyente sino inclusivo, haciendo de la legitimidad procesal pertenezca a cualquier ciudadano.

5.9. AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Como hemos señalado dentro del medio ambiente, debe tenerse en particular importancia de los recursos naturales, ya que éstos pueden ser definidos como el conjunto de elementos que brinda la naturaleza para satisfacer las necesidades humanas en particular y las biológicas en general. La Organización de las Naciones Unidas ha declarado que estos (recursos naturales) son todos aquellos que el hombre encuentra en su ambiente y que puede utilizar para su beneficio.

Sin entrada detalle podemos clasificarlos en recursos renovables y no renovables, los primeros en palabras de Andaluz, señala que son aquellos que no afectan la posibilidad de autorrenovación del recurso y que permiten a las futuras generaciones servirse de él, siendo que estos recursos tiene la capacidad de alcanzar la autogeneración y autodepuración, por tal motivo un producto será renovable y la medida que su utilización y aprovechamiento no sea objeto de una desmesurada irracional explotación; por otro lado los recursos no renovables son

aquellos que una vez utilizados tienden a desaparecer o su producción tiende a disminuir como es el caso de los minerales el petróleo, el carbón, gas natural y etc., estos tiene la característica que su utilización y/o aprovechamiento conlleva inexorablemente a la extinción de la fuente productiva, ya que no tiene la capacidad de alcanzar la autogeneración o autodepuración, (Andaluz Westreicher, 2004).

El marco constitucional se encarga de fijar reglas para conservar adecuadamente estos recursos y de esta forma garantizar la protección del medio ambiente, como condiciones para una racional utilización de los mismos y condiciones de otorgamiento a particulares con resguardo del interés nacional.

En cuanto al vínculo existente entre la producción económica y el derecho a un ambiente equilibrado y adecuado desarrollo de la vida se materializa en función a los siguientes principios:

- **PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN,**

En la medida que se orienta a que la protección sea permanente y los bienes ambientales se conserven en estado óptimo.

- **PRINCIPIO DE PREVENCIÓN**

Se orienta a resguardar o colocar en cautela a los bienes ambientales antes que se les ocasione un daño irreversible y que determine su extinción.

- **PRINCIPIO DE RESTAURACIÓN**

Esta prerrogativa se orienta a obligar a que aquellos sujetos agentes que hayan dañado el ambiente para que se encarguen de sanear el o de recuperar los bienes ambientales deteriorados.

- **PRINCIPIO DE MEJORA**

Se enfoca a garantizar los bienes ambientales en pro del disfrute humano.

- **PRINCIPIO PRECAUTORIO**

Se encarga de adoptar medidas de cautela y reserva cuando existe incertidumbre científica o indicios de amenaza sobre la real dimensión de los efectos de las actividades humanas en general en el ambiente.

- **PRINCIPIO DE COMPENSACIÓN**

Hace que los responsables y el mismo Estado, se oriente a crear mecanismos de reparación o de contra protección para la explotación de recursos no renovables

CONCLUSIONES

Luego de realizar un profundo análisis dogmático, doctrinario y pragmático de las diferentes instituciones y conceptos en torno al derecho al desarrollo como derecho humano, se ha arribado a las siguientes conclusiones:

- I. El derecho al desarrollo se encuentra dentro de derechos humanos de tercera generación. Es el derecho que poseen todas personas y sociedades a participar del desarrollo social, económico, cultural y político de un determinado país. Es el derecho que confiere la potestad de elegir la vida que se desee en conformidad de la digna humana.
- II. La principal razón de ser del derecho al desarrollo como derecho humano es garantizar una las características esenciales de un hombre libre: La dignidad. Esta característica es una atribución propia e inherente de todo ser humano, como miembro de una comunidad de seres morales.

En este sentido, la dignidad distingue al ser humano de los animales y lo individualiza ante todas las demás criaturas en el planeta. Nuestra obligación con nosotros mismos es no negar la dignidad de la humanidad en nuestra propia persona y de los demás. Por ello, en la medida que se niegue o lesione la dignidad del otro afecto también a la humanidad de mi persona, como ser digno objeto razón, conciencia y moralidad.

- III. La dignidad no puede ser afectado por instancias arbitrarias, circunstancias contingentes o relaciones de poder, de ahí que la dignidad humana pertenece a todo ser humano, por el solo hecho de pertenecer a esta especie. El reconocimiento de todo ser personal, y particularmente de todos los seres humanos como personas, tiene como consecuencia fundamental

que cada uno debe ser tratado siempre al mismo tiempo como fin y nunca sólo como medio.

- IV. Por otra parte, la globalización es un concepto que virtualmente expresa igualdad, sin embargo sus efectos se caracterizan por una visión marcadamente individualista y mercantil de la realidad humana. No se preocupa por las enormes desigualdades económicas y sociales que padece el hombre, más bien las agrava y aumenta cada día más. Las fuerzas económicas, políticas, sociales y culturales, los controlan los grandes medios de comunicación, que han impuesto en la sociedad los términos de "globalización" o "mundialización" como paradigma de la sociedad del futuro. Situación que no ha generado más que desarrollo para pocos y pobreza para muchos.
- V. Ahora bien, al finalizar la investigación es evidente que es relativa la posibilidad de hacerlo efectivo en la práctica, puesto que no existe positivación de este derecho. Sin embargo, según la vigencia y aceptación universal de los principios jurídicos, se concluye que el derecho al desarrollo tiene fuerza vinculante y todas las posibilidades de hacerse efectivo.
- VI. Por otra parte intrínsecamente, el Estado de Derecho como máxima expresión de organización de y para el ser humano, es una dimensión de un concepto integral de desarrollo humano, el cual está conformado

integralmente por los ámbitos económicos, sociales, culturales y políticas del desarrollo. El derecho al desarrollo no es y no debe ser un ámbito ajeno al desarrollo. Es decir, debe haber congruencia con las expectativas de desarrollo de una población determinada y debe consignar los marcos mediante los cuales los derechos fundamentales de naturaleza civil, política, social, medio ambiental, que se aseguren integralmente dentro de Estado de Democrático y de Derecho.

- VII. Los obstáculos que afronta el derecho al desarrollo para lograr su plena realización está sometida a la precariedad democrática en cuanto a las políticas económicas, la escasez de recursos, comercio injusto, la deuda externa, los programas de ajuste estructural entre otras problemáticas.
- VIII. La aplicación del derecho al desarrollo exige la adopción de medidas tanto en el ámbito interno como en el ámbito internacional. Es decir, este derecho humano, debe ser impulsado y garantizado por la comunidad internacional y cada país para el ejercicio de este derecho por cada persona.
- IX. Desde el punto de vista solidario, en relación con los pueblos con menos recursos o también llamados países de Tercer Mundo y con la situación ecológica del Planeta, el derecho humano al desarrollo exigiría la revisión de los niveles de consumo equilibrado y acceso a servicios de manera equitativa, en relación a los países en desarrollo y los países de primer mundo. Por ello, aquéllos que estén en mejor situación deben adoptar estilos de vida acordes con las necesidades ecológicas del Planeta.

- X. Pues, los niveles de consumo y de producción vigentes en los países desarrollados no son objeto de universalización por los mismos intereses económicos de cada país. Por ello, la civilización occidental no es universalizable, ni siquiera materialmente, ya que no hay recursos materiales en la Tierra para que todos los países alcanzaran el mismo nivel de producción y consumo. En razón a ello se determina en palabras de Adela Cortina “El primer criterio para discernir si una forma de consumo es justa consiste en considerar si puede universalizarse” puesto que la universalización del consumo y la producción repercute en los niveles de desarrollo de cada país o población.
- XI. Una cuestión irónica y reflexiva es la existencia de un enorme porcentaje en el mundo que se encuentra en la pobreza extrema, imposibilitada de gozar los derechos humanos más básicos como la alimentación y el evitar una muerte evitable producto de la inseguridad de un país. Estos derechos se supone que deberían conjugarse dentro del Derecho Humano al Desarrollo para que se garantice el ejercicio del mismo. En relación a lo anterior, se observa que hay millones de personas que forman parte de los flujos migratorios expuestos a ser víctimas de prácticas de explotación, trata de personas, violaciones, secuestros, asesinatos entre otras vejaciones contra el ser humano. Además, esta realidad, provoca muchas de las veces enfrentamientos dentro sus propias sociedades.

- XII. La pobreza y la marginación imponen en muchas ocasiones condiciones de empleo de semiesclavitud, con un abaratamiento de la mano de obra, dejando a muchos ciudadanos de países desarrollados en paro y dependiendo de los servicios sociales, que son cuestionados por no ser sostenibles. (Cortina, 2000)
- XIII. Por otro lado, se concluye que el excesivo consumo de los países desarrollados e industrializados causa la sobreexplotación de riquezas naturales de los países en vías de desarrollo. Estos efectos no sólo implica el agravio de las condiciones de vida de estos últimos, sino que también implica la destrucción del hábitat natural y social que necesita el ser humano. Asimismo condiciona e hipoteca la vida de las futuras generaciones, incluyendo las de los países desarrollados.
- XIV. En efecto las grandes desigualdades existentes, no sólo entre países, sino también al interior de los mismos, constituyen el hábitat perfecto para la fractura social, la violencia, la inestabilidad interna, el enfrentamiento entre Estados que afectan la seguridad internacional y la paz. Por lo tanto no se garantiza el derecho al desarrollo Humano, quedando solo en los escritos ideológicos de los Derechos Humanos.
- XV. Otras de las conclusiones a la que se ha arribado es que los organismos financieros internacionales, cuya única guía, en ocasiones parece ser la protección del gran capital económico, a costa de conflictos armados, desnutrición, epidemias y muerte. Por ello, el derecho al desarrollo no debe

verse sólo desde el punto de vista de la economía, sino desde la perspectiva de la paz mundial y las razones pragmáticas que se ejerce a través de la filosofía y conceptualizaciones que rigen el mundo.

- XVI. El Derecho al desarrollo debe convertirse en derecho fundamental, desde el marco normativo interno de cada país esencialmente de México, el cual debe estar en perfecta armonía con el derecho internacional, para que en las acciones políticas concretas se incluyan tanto a autoridades como a ciudadanos con la cooperación a la solidaridad nacional e internacional.
- XVII. En la actualidad, no se encuentra realmente garantizado el derecho humano al desarrollo en México, puesto como había mencionado anteriormente este derecho no se encuentra positivado mucho menos reconocida en la Constitución mexicana. Por ello, una vez que este derecho se establezca en el texto constitucional, de donde se desprenderán las leyes secundarias y las políticas públicas pertinentes para instrumentar y garantizar el desarrollo humano en México en beneficio de la persona, la cual, es el sujeto central del desarrollo, su origen y su meta.
- XVIII. Además las diferencias económicas y sociales prevalecientes en las diferentes regiones y sociedades, afectan directamente el derecho a la salud, para subsanar esta diferenciación sectorial deben implementarse políticas de impacto nacional y regional donde sea homogéneo el acceso a

los diferentes servicios de salud, teniendo como primicia el bienestar de la persona humana, garantizando un derecho al desarrollo justo y equitativo.

XIX. El crecimiento económico, en todo país representa una mejora en la calidad de vida de sus habitantes de todas las esferas sociales, por lo tanto una política de desarrollo implementada a casos concretos para los diferentes estratos sociales, beneficiaria a la población con una mejora en los servicios básicos como el de salud y el de acceso a la educación, promoviendo un derecho al desarrollo equitativo y justo para toda esfera social, teniendo como primicia la dignidad y el desarrollo de la persona humana.

XX. La educación permite el desarrollo de la persona humana ya sea individual o colectivamente, es decir; por medio de la educación la persona tiene una puerta para salir de la pobreza, toda vez que se garantice este derecho, ya que la educación permite a quienes tienen un empleo estable y formal tener un empleo remunerado, para de esa manera mitigar la pobreza monetaria. Por otra parte con una política de educación bien implementada, se podría impedir que la pobreza se transmitiera de generación en generación, debido la garantía de un derecho a la educación estribaría en mejores medios y calidad de vida, favoreciendo el desarrollo de la persona humana.

XXI. Garantizar el acceso a la justicia a toda persona, también está inmersa dentro del derecho al desarrollo, como una manifestación del estado en protección de la ciudadanía.

XXII. Vivir dentro de un medio ambiente sano y equilibrado, se ha convertido en una necesidad de todo ser humano para su desarrollo, no podemos estar frente a un desarrollo del humano, si no contamos con un medio ambiente equilibrado.

REFERENCIAS

Alvarez del Castillo, E. (1982). *El Derecho Social y los Derechos Sociales Mexicanos*. México : Porrúa.

Ávalos Rodríguez, C. (2013). *Tutela judicial de derechos e imputación necesaria*. Lima : Gaceta Jurídica .

Aldave, P. (2005). *Lecciones de Educación Ambiental*. Trujillo: Fondo Editorial UCV.

Alexy, R. (1993). *Teoría de Derechos Humanos*. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales.

Abregú, M. (1994). *Tutela judicial del derecho a la verdad en Argentina*. Buenos Aires: Depalma.

Amartya Sen. (2000). *Desarrollo y libertad*. Barcelona: Planeta.

Amartya Sen. (2002). *Desarrollo y Libertad*. Bogotá: Planeta.

Amartya Sen. (2010). *El desarrollo humano*. Madrid: Trotta.

Amartya Sen. (1982). *Elección, Bienestar y Medición*. Madrid: Oxford.

Andaluz Westreicher, C. (2004). *Derecho Ambiental*. Lima: Gráfica Bellido.

Angulo Sánchez, N. (2005). *El Derecho Humano al Desarrollo frente a la Mundialización del Mercado*. Madrid: IEPALA.

Aparicio, R., Villarespe, V., & Urzúa. (2009). *Pobreza en México: magnitudes y perfiles*. México: UNAM.

Arteaga Nava, E. (2002). *Derecho Constitucional*. México: Oxford .

Aspe, P. (2009). *El camino mexicano de la transformación económica*. Barcelona : Civitas.

Atkinson, A. (2005). *El derecho humano al desarrollo frente a la mundialización del mercado*. Madrid: IEPALA.

Baldassarre, A. (2001). *Los Derechos Sociales*. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.

Babbie, E. (2007). *The Practice of Social Research*. Belmont: Thompson - Wadsworth.

Badii, M. H. (2007). Sustentabilidad y política. *Daena: International Journal of Good Conscience* , 274-285.

Barroso, L. R. (2008). *El Neoconstitucionalismo y la Constitucionalización del Derecho*. México: UNAM.

Bermudez S, J. (2000). Derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. *Revista de Derecho de la Universidad de Valparaíso* , 9-25.

Bobbio, N. (1991). *El tiempo de los derechos*. Madrid: Civitas.

Bobbio, N. (2005). *Entre el Derecho y la Política*. *Boletín del Área de Derecho Público*. Madrid: Trotta.

Borras P, S. (2014). Del derecho humano a un medio ambiente sano al reconocimiento de los derechos de la naturaleza. *Revista Vasca de Administración Pública* , 649-680.

Brañes, R. (1994). *Manual de derecho ambiental*. México. México: Fondo de Cultura Económica.

Burgos, G. (2008). *Políticas públicas y el medio ambiente*. Madrid: Tecnología en Marcha.

Butler, J. (2009). *Lenguaje, poder e identidad*, trad. de Javier Sáez y Beatriz Preciado. Madrid: Trotta.

Chamorro Bernal, F. (1994). *La tutela judicial efectiva*. Barcelona: Bosch.

Chanamé Orbe, R. (2011). *La Constitución Comentada*. México: Adrus.

Cano, G. (1978). *Derecho, política y administración ambiental*. Buenos Aires : Depalma.

Canosa Usera, R. (2000). *Constitución y medio ambiente*. Madrid: Dykinson.

Larrandart, L. (1992). *Acceso a la Justicia y tutela de los derechos ciudadanos*. Buenos Aires: Clara.

Carrillo Salcedo, J. A. (1999). *Dignidad frente a barbarie. La Declaración Universal de Derechos humanos, cincuenta años después*. Madrid : Trotta.

Carrillo Salcedo, J. A. (2001). Notas sobre el significado político y jurídico de la Carta de derechos fundamentales de la Unión Europea. *Revista de Derecho Comunitario*, nº9 , 179.

Carrión, F. (1995). De la violencia urbana a la seguridad ciudadana. *Revista Pretextos* , 42-55.

Castillo González, F. (2012). *El Delito de Omisión Impropia*. Costa Rica: Blanco.

Celi Arevalo, M. (2007). *Derecho ambiental hacia un desarrollo sostenible*. Lima : PUCP.

Cefp, C. d. (2012). *Indicadores sobre Seguridad Social en México*. México: CEFP.

Lefranc Weegan, F. C. (2011). *Sobre la Dignidad Humana*. Madrid: Ubijus.

Comision Nacional de los Derechos Humanos Mexico. (2014). *El Derecho Humano al Medio Ambiente Sano para el desarrollo y bienestar*. México: Comisión Nacional de los Derechos Humanos .

CONEVAL. (2014). *La pobreza en la población indígena de México*. México.

Consejo Nacional de Evaluacion. (2007). *Los mapas de Pobreza en México*. México: Gobierno Federal.

Consejo Nacional de Poblacion, C. (2011). *Indice de Marginación por entidad federativa y municipio 2010*. México: Gobierno Federal.

Contreras Nieto, M. Á. (2001). *El derecho al desarrollo como derecho humano*. Mexico: UNAM.

Cortina, A. (2000). *Ética de la Empresa. Claves para una nueva cultura empresarial*. Trotta: Madrid.

Losagno, M. (2008). *Gobernabilidad y desarrollo humano: una nueva aproximación al desarrollo, Instituto internacionalidad de desarrollo*. Madrid: Trotta.

Lozano, J. M. (1988). *Derecho al Desarrollo*. Líma: Cuzco .

Lutz, B. (2007). *Estructura y sujeto: perspectivas teóricas desde las ciencias sociales*. Santiago de Chile : Moebio.

Declaración sobre el Derecho al Desarrollo. (2005). *La Alta Comisionada para los Derechos Humanos*. ONU.

De La Válgoma, M. (2000). *La lucha por la dignidad*. . Barcelona: Anagrama.

De La Válgoma, M. (2000). *La lucha por la dignidad. Teoría de la felicidad política*. Barcelona: Anagrama.

De Bernardis, L. M. (1985). *La Garantía Procesal del Debido Proceso*. Lima: Cultura Cusco .

Desarrollo Humano. (2016). *Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo*. México: PNUD.

Díaz Müller, L. T. (2004). *El derecho al desarrollo y el nuevo orden mundial*. México: UNAM.

Durkheim, E. (1987). *La división del trabajo social*. Barcelona: Planeta.

Durkheim, E. (1985). *Las reglas del método sociológico*. México: Premia.

Dworkin, R. (2002). *Los derechos en serio*. Barcelona: Ariel.

Ernesto, B. (2001). *Dignidad Humana y Derechos de la Personalidad*. Madrid: Marcial Pons.

Esquivel Hernández, G. (2015). *Desigualdad Extrema en México Concentración del Poder Económico y Político*. México: Porrúa.

Fernández Enguita, M. (2010). *Sociología de la educación*. Barcelona: Ariel.

Fernández Sessarego, F. (2007). *En La Constitución Comentada*. Lima: Gaceta Jurídica.

Fernandez, G. (2011). *Estudio general de la contaminación acústica en las ciudades de Andalucía*. Andalucía: Geográficos.

Figallo A, G. (2002). *La gravitación del Derecho Ambiental*. Lima: IEP.

Fiorovanti, M. (2009). *Constitución de la antigüedad a nuestros días*. Madrid: Trotta.

Foy, V. (2001). *En busca del Derecho Ambiental*. Lima: Fondo de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Fucito, F. (2003). *Sociología del Derecho*. Madrid: Trotta.

Fuchs, C. (1990). *Concepto del hombre y dignidad humana en la investigación médica y en la clínica*. Madrid: Trotta.

Gándara, A. (1983). *Del Estado Liberal de Derecho al Estado Social de Derecho*. Venezuela: Merida.

Gómez ISA, F. (1999). *El derecho al desarrollo como derecho humano en el ámbito jurídico internacional*. Bilbao: Universidad de Deusto.

Gérvás, J. (12 de Febrero de 2004). *Atención primaria de salud, política sanitaria y exclusión social*. Obtenido de 2009: <http://equipocesca.org/atencion-primaria-de-salud-politica-sanitaria-y-exclusion->

García Amado, J. A. (1985). *Teorías del sistema jurídico y concepto del derecho, hacia una nueva justicia*. Madrid: Nueva Epoca.

García Amado, J. A. (1985). *Teorías del sistema jurídico y concepto de derecho*. Madrid : Nueva epoca.

García De Enterría, E. (1980). *La Constitución como norma y el Tribunal Constitucional*. Madrid: Civitas.

García F, X. (2010). *Los efectos de la contaminación acústica en la salud*. Valencia: Civitas.

García Matamoros, L. V. (17 de abril de 2007). *El derecho del desarrollo como base para la construcción del derecho al desarrollo*. Obtenido de <http://www.uasb.edu.ec/padh/revis>

- García Maynez, E. (2009). *Introducción al Estudio del Derecho*. México: Porrúa.
- García Ricci, D., & SEPÚLVEDA IGUÍNIZ, R. (2012). *Derecho Constitucional de los Derechos Humanos*. México: Porrúa.
- García Toma, V. (2013). *Los Derechos Fundamentales*. Lima : Adrus.
- Garzón Valdés, E. (1998). *Algo más sobre la relación entre derecho y justicia publicado en Derecho y Moral*. . Barcelona: Gedisa.
- Garzón Valdés, E. (2006). *¿Cuál es la relevancia moral del concepto de dignidad humana?* . México: Fontoroma.
- Gialdino, R. (2003). *Dignidad Humana y Derechos Humanos en Revista de Derechos Humanos de Cátedra*. México: UNESCO.
- Giddens, A. (2006). *La constitución de la sociedad* . Buenos Aires: Amorrortu.
- Giroux, H. (1999). *Teoría y resistencia en educación*. Madrid: Trotta.
- Gobierno de la República. (22 de julio de 2008). *Plan Nacional de Desarrollo*. Obtenido de <http://pnd.gob.mx>
- González de la Vega, R. (2001). *Políticas Públicas en materia de Criminalidad*. México: Porrúa.
- González, A. (1997). *Naturaleza y dignidad personal desde el pensamiento de Robert Spaemann*. Panplona: Trota.
- Gonzales Pérez, J. (2006). *El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva*. Pamplona: Civitas.
- Gonzales, A. (2007). *Contaminación física en ambiente humano*. Montevideo : Titin.
- Guski, A. (2006). *El ruido: efectos de los sonidos no deseados*. Barcelona: Herder.
- Habermas, J. (1985). *Conciencia Moral de la Acción Comunicativa* . Madrid: Civitas.
- Hegel, F. (2007). *La filosofía total, Reflexiones sobre las raíces filosóficas del totalitarismo, Citado por Mauricio Rojas*. Chile : Piramidal.
- Hernández Valle, R. (1994). *El Derecho de la Constitución*. Costa Rica: El Derecho de la Constitución.
- Häberle, P. (2008). *La dignidad del hombre como fundamento de la comunidad estatal*. Madrid: Trotta.
- Hobbes, T. (2011.). *Leviatán, o la materia, forma y poder de una república eclesiástica y civil/Thomas Hobbes*. México: Porrúa.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2008). *Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares*. México: Gobierno del Estado .

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2008). *Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares*. México: Gobierno Federal.

Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. (2009). *Aprendizaje y desigualdad social en México: Implicaciones de política educativa en el nivel básico*. México.

Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. (2008). *¿Avance o retrocede la calidad educativa?* México: Gobierno Federal.

Isa Gómez, F. (8 de Marzo de 2007). *Diccionario de acción humanitaria y cooperación al desarrollo: derecho al desarrollo*. Obtenido de <http://dicc.hegoa.efaber.net>

Isuani, F. (1012). *Las Capacidades Estatales, contenido en "Gestión Públicas: Balances y perspectivas* . Madrid : Trotta.

Isuani, F. (2012). *Las Capacidades Estatales, contenido en "Gestión Públicas: Balances y perspectivas* . Madrid: PUOC.

Kant, E. (1995). *Fundamentación de la metafísica de las costumbres*. Madrid: Trotta.

Kirchmeier, F. (07 de Julio de 2006). *El Derecho al Desarrollo, ¿dónde nos encontramos*. Obtenido de <http://www.fes-globalization.org/publications/FESO>

Malberg, C. D. (1948). *Teoría General del Estado*. México: Fondo de Cultura Económica.

Martínez de Bringas, A. (2001). *Globalización y Derechos Humanos*. Deusto: Bilbao.

Milanovic, B. (2012). *Los que tienen y los que no tienen*. Civitas: Alianza.

Molina, I. (2010). *Estimación pequeña área de Indicadores de pobreza* . Madrid: Trotta.

Morello, A. (1994). *El Proceso Justo*. Argentina : Abeledo-Perrot.

Moreno, M. C., & CUBERO , R. (1990). *Relaciones sociales: familia, escuela, compañeros. Años preescolares*. Madrid: Alianzá.

Naciones Unidas. (12 de Agosto de 1992). *INFORME DE LA CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO*,. Obtenido de <http://www.un.org/documents.>>

Naranjo, M. (2016). *Teoría Constitucional e instituciones políticas*. México: Porrúa.

Nieves, S. E. (1999). *La Doctrina Economica de la propiedad: de la escolástica a Adam Smith*. Madrid: Trotta.

Novak, F. (2003). *Derecho Internacional Ambiental*. Lima: Fondo Editorial de la PUCP.

O'Riordan, T. (1988). The politics of sustainability. En R. K. Turner, *Sustainable Environmental Management: Principles and Practices*. London: Belhaven.

Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. (4 de Diciembre de 1986). *Declaración sobre el derecho al desarrollo*. Obtenido de <http://www.unhcr.org>

OMS. (14 de Mayo de 2014). *ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD* . Obtenido de <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs323/es/>

Organización Mundial de la Salud. (2010). *Fundamentos y Modelos de la OMS*.

Oszlak, O. (2012). *Políticas Públicas y regímenes políticos*. Madrid: PUCP.

Pérez Luño, A. (1993). *Los derechos fundamentales*. Madrid: Tecnos.

Pérez Luño, A. (1993). *Los derechos fundamentales*. Madrid: Trotta.

Pérez Perdomo, R. (1987). *Acceso a la justicia en la sociedad contemporánea: un análisis de Derecho Comparado*. Caracas: Monte Ávila Editores.

Pérez Royo, J. (2000). *Curso de derecho constitucional*. Barcelona: Madrid.

Pacheco, V. (2014). *Conciencia Ecológica: Garantía de un medio ambiente sano*. Lima: PUCP.

Parsons, T. (1984). *La estructura de la acción social* . Madrid: Guadarrama.

Pellegrini Grinover, A. (1982). *Proceso y régimen constitucional*. Madrid: Trotta.

Peces Barba. (2002). *La dignidad de la persona desde la filosofía del Derecho*. Madrid: Dykinson.

Picó I Junoy, J. (1997). *Las garantías constitucionales del proceso*. Barcelona : Bosch.

PNUD. (1990). *Desarrollo Humano*. Barcelona: Tercer Mundo Editores.

Quevedo, P. (1999). *Desarrollo sustentable en el Perú*. Lima : Agenda Perú.

Ramírez López, A. J. (2003). *Derecho a la Salud*. México: Sista.

Ravallion, M. (1998). *Documento de trabajo*. Madrid: Civitas.

Rawls, J. (2000). *Teoría a la Justicia México: Fondo de Cultura Económica*. Madrid: Cívicas.

Recaséns Siches, L. (1999). *Filosofía del Derecho*. Méxco : Porrúa.

Reiter. (1998). *La dignidad humana y la ingeniería genética*. Madrid: Trotta .

Rey Cantor, E. (2008). *Control de convencionalidad de las leyes y derechos humanos*. México : Porrúa.

Rey Cantor, E. (2008). *Control de convencionalidad de las leyes y derechos humanos*. México: Porrúa.

Robert Alexy. (1997). *El concepto y la validez del derecho y otros ensayos*. Colección *Estudios Alemanes*. Barceola: Gedisa.

Robert Alexy. (2003). *Tres escritos sobre los derechos fundamentales y la teoría de los principios*. Bogotá: Nordi.

Rorty, R. (1986). *Pragmatism, Davidson and Truth*. Basil : Oxford.

Rosatti, H. (1984). *El Derecho a la Jurisdicción antes del Proceso*. Buenos Aires: Depalma.

Rousseau, J. J. (2014). *El Contrato Social*. Madrid: Edimat Libros, S. A.

Ruiz Casal, E. (2009). *Contaminación Acústica: Efectos Sobre Parámetros Físicos y Psicológicos*. México: Universidad de La Laguna.

Schütz, A. (1972). *Fenomenología del mundo social: introducción a la sociología comprensiva*. Buenos Aires: Paidós.

Salcedo, J. A. (1972). El derecho al desarrollo como derecho de la persona humana. *Española de Derecho Internacional* , 119-125.

Sanchez Gonzalez, J. J. (2007). *La Administración Pública como Ciencia. su objeto y su estudio*. México : IAPEM.

Saulino, M. (2015). *Carlos Nino y la titularidad del derecho a un ambiente sano*. Buenos Aires: Análisis Filosófico.

Secretaria de Salud. (2003). *Salud para un bienestar*. México: Gobierno Federal.

Soberón Acevedo, G. (1987). *La protección de la salud en México*. México: Porrúa.

Spaemann, R. (1980). *Crítica de las Utopías Política*. Pamplona: Trotta.

Spaemann, R. (1998). *El Concepto de Dignidad Humana en Derecho a la Vida*. Madrid: Civitas.

Spaemann, R. (1988). *Sobre el concepto de dignidad humana*. Madrid: Civitas.

Stiglitz, J. A. (2008). *Informe de la Comisión sobre la Medición del Desarrollo Económico y del Progreso Social*. . Francia: Ambafrance.

Támara, J. (2000). Desde los derechos humanos hasta el derecho al desarrollo en el sistema de las Naciones Unidas: ¿Existe un verdadero derecho al desarrollo humano? *Revista DHIAL (Desarrollo Humano e Institucional en América Latina)* , 44-55.

Ticona Postigo, V. (1995). *Análisis y Comentarios del Código Procesal Civil*. Lima: Grijley.

- Touraine, A. (1969). *La sociología de la acción Barcelona*. 1969: Ariel.
- Vandana Shiva. (2009). *Globalización y pobreza*. Madrid: Trotta.
- Vargas, A. L. (1999). *Teoría General de los Procesos Urgentes*. Buenos Aires: Culzoni Editores.
- Vera Esquivel, J. (1992). *El nuevo derecho internacional del medio ambiente*. Lima: Academia diplomática del Perú.
- Villar Ezcurra, J. L. (2008). *Derecho Administrativo Especial. Administración Pública y Actividad de los Particulares*. México: Civitas.
- Von Hayek, F. (2000). *Derecho, legislación y libertad*. Madrid : Civitas.
- Wellmer, A. (1990). *Comunicación y emancipación*. Madrid: Civitas.
- Weber, M. (1964). *Economía y sociedad*. México: Fondo de Cultura Económica.